

6-2016

## **La relación del estado colombiano con la naturaleza en territorios rurales. Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería**

Constanza Ruiz Ruiz  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Katherine Andrea Mazabel Pineda  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Oscar Fernando Castelblanco Callejas  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Luis Francisco Delgado Suárez  
*Universidad de La Salle, Bogotá*

Follow this and additional works at: [https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo\\_social](https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social)



Part of the [Social Work Commons](#)

---

### **Citación recomendada**

Ruiz Ruiz, C., Mazabel Pineda, K. A., Castelblanco Callejas, O. F., & Delgado Suárez, L. F. (2016). La relación del estado colombiano con la naturaleza en territorios rurales. Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería. Retrieved from [https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo\\_social/](https://ciencia.lasalle.edu.co/trabajo_social/)  
103

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Departamento de Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Trabajo Social by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [ciencia@lasalle.edu.co](mailto:ciencia@lasalle.edu.co).



**|LA RELACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA NATURALEZA EN  
TERRITORIOS RURALES**  
**Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería**

Constanza Ruiz Ruiz  
Katherine Andrea Mazabel Pineda  
Oscar Fernando Castelblanco Callejas  
Luis Francisco Delgado Suárez

Asesor  
David Andrés Jiménez  
Antropólogo

Trabajo de grado para optar al título de trabajadora / trabajador social

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,  
Programa De Trabajo Social,  
Línea de Investigación Derechos Humanos y  
Fortalecimiento Democrático  
Bogotá, Distrito Capital  
Julio 2016



LA RELACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA  
NATURALEZA EN TERRITORIOS RURALES  
Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la  
luz de la megaminería



UNIVERSIDAD DE  
**LASALLE**

CONSTANZA RUIZ RUIZ -  
KATHERIN ANDREA  
MAZABEL PINEDA - OSCAR  
FERNANDO CASTELBLANCO  
CALLEJAS - LUIS FRANCISCO  
DELGADO SUÁREZ

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE  
TRABAJADORA / TRABAJADOR SOCIAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES,  
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL,  
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DERECHOS HUMANOS Y  
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO

ASESOR DAVID ANDRÉS JIMÉNEZ

BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL  
JUNIO 2016

Este trabajo va dedicado a todas las personas y colectivos que desde la honestidad contribuyen aquí en Colombia y en Chiloé (Chile) a la construcción de relaciones alternativas entre la sociedad y la Naturaleza.

## TABLA DE CONTENIDO

|   |           |
|---|-----------|
| RESUMEN.....  | 5         |
| ABSTRACT .....  | 6         |
| INTRODUCCIÓN .....  | 7         |
| CAPÍTULO 1: DELIMITACIÓN DEL TEMA.....  | 9         |
| CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES .....  | 10        |
| <b>Hallazgos de los antecedentes:</b> .....   | <b>14</b> |
| <i>Desarrollo humano sustentable y Desarrollo sostenible, apuestas frente a la problemática socioambiental:</i> ..... | 15        |
| <i>Colonización de la Naturaleza:</i> .....   | 16        |
| <i>Relación entre la cuestión ambiental y los derechos humanos:</i> .....   | 22        |
| <b>Vacíos de conocimiento:</b> .....  | <b>25</b> |
| CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....   | 26        |
| CAPÍTULO 4: JUSTIFICACIÓN.....  | 28        |
| CAPÍTULO 5: OBJETIVOS.....  | 32        |
| CAPÍTULO 6: CONCEPTOS ACLARATORIOS .....  | 32        |
| <i>Naturaleza:</i> .....  | 32        |
| <i>Medio ambiente:</i> .....  | 34        |
| <i>Desarrollo sostenible:</i> .....   | 35        |
| CAPÍTULO 7: POSICIÓN POLÍTICO-TEÓRICA.....  | 37        |
| <i>Marxismo ecológico:</i> .....  | 37        |
| <i>Estado ambiental de derecho:</i> .....   | 39        |
| CAPÍTULO 8: REFERENTE SITUADO DE LA PROBLEMÁTICA .....  | 41        |
| CAPÍTULO 9: METODOLOGÍA .....   | 42        |
| CAPÍTULO 10: SIGNIFICADOS CONSTRUCTORES DE LA REALIDAD SOCIOAMBIENTAL .....   | 48        |
| <i>Naturaleza:</i> .....  | 48        |
| <i>Desarrollo:</i> .....  | 55        |
| <i>Derechos:</i> .....  | 58        |
| CAPÍTULO 11: LOS SENTIDOS DETRÁS DE LA RELACIÓN ESTADO-NATURALEZA .....   | 60        |
| <i>Cuando los sentidos provocan contrasentidos:</i> .....   | 68        |
| <i>Los grises entre los sentidos del Estado y los contrasentidos de actores contrahegemónicos:</i> .                  | 73        |

|  |    |
|--|----|
| CAPÍTULO 12: LAS MANIFESTACIONES DE LA TENSIÓN ENTRE LOS SENTIDOS Y CONTRASENTIDOS ..... | 75 |
| <i>La tierra, ¿para quién?:</i> .....  | 79 |
| <i>Vida saludable versus megaminería:</i> .....  | 82 |
| <i>Cuando trabajo no hay:</i> .....  | 83 |
| <i>El silenciamiento del pueblo:</i> .....   | 86 |
| CAPÍTULO 13: CONCLUSIONES.....   | 88 |
| BIBLIOGRAFÍA.....  | 95 |
| ANEXOS.....  | 0  |

## RESUMEN

### LA RELACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA NATURALEZA EN TERRITORIOS RURALES

#### Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería

La presente investigación documental analiza la relación que establece el Estado colombiano con la Naturaleza en territorios rurales a partir de los discursos expresados en lineamientos y políticas públicas, específicamente las relacionadas con el ambiente. Para dicho análisis se retoma el fenómeno de la minería a gran escala como uno de los elementos centrales de estudio en la relación Estado-Naturaleza y se establecen tres categorías ejes: Naturaleza, desarrollo y derechos, las cuales son estudiadas a la luz del posicionamiento teórico-político de la investigación sustentado en el marxismo ecológico y en el Estado ambiental de derecho.

Se define como metodología de investigación el análisis de discurso retomando algunos aspectos de la metodología utilizada por Roland Barthes, tales los elementos lingüísticos de significante, significado y significación, que permiten identificar la razón de ser que fundamenta la relación que el Estado colombiano establece con la Naturaleza. Dicha razón de ser -entendida aquí como *sentidos*-, por un lado, repercute en la consolidación de una relación hegemónica y depredadora con la Naturaleza, generando contradicciones en determinados actores contrahegemónicos que buscan entablar o reforzar una relación alternativa con la misma; y por el otro lado, lleva tanto a una implicación discursiva *-legitimación del modelo neoliberal por parte del Estado colombiano-* como a unas implicaciones socioambientales.

**Palabras claves:** Estado, discursos, Naturaleza, desarrollo, megaminería e implicaciones socioambientales.

## **ABSTRACT**

### **THE COLOMBIAN STATE RELATIONSHIP WITH NATURE IN RURAL TERRITORIES**

#### **Hegemonic discourses and socio-environmental implications in light of the mega mining**

This documentary research analyzes the Colombian State with Nature in rural areas relationships from the discourses expressed in guidelines and Public Policies, specifically the policies related to the environment. For this analysis, the phenomenon of a large-scale mining is taken up as one of the central elements of the study in the State-Nature relation. Besides, three categories axes are established: Nature, development, and rights. Those categories are studied in the light of theoretical and political positioning of the research, based on ecological Marxism and the environmental State of right.

Research methodology is defined as the discourse analysis taking into account some aspects of Roland Barthes' methodology. Linguistic elements such as significant, meaning, and significance allow to identify the reason in which is established the Colombian state's relation with nature. That reason affects the predatory and hegemonic relation with nature, so this generates contradictions in some counter hegemonic characters that seek to reinforce an alternative relation. Additionally, this involves the neoliberal legitimation by the Colombian Estate.

**Keywords:** State, discourses, Nature, development, large-scale mining and socio-environmental implications.



## INTRODUCCIÓN

“Los conflictos ambientales emergen de las fracturas del modelo hegemónico capitalista de desarrollo, en donde el hombre máquina convirtió a los demás seres de la naturaleza en recursos para poder mantener y engrosar el modelo económico capitalista que tiene como motor fundamental la acumulación de capital, la cual requiere del desarrollo de las fuerzas productivas y del avance tecnológico y científico que posibilitan el incremento de la producción, la expansión de la demanda y el consumo. Así, podemos establecer que la crisis ambiental del modelo de desarrollo y, por tanto, los conflictos socioambientales son la evidencia del fraccionamiento del modelo económico”  
(Gómez López, 2012, pág. 9).

En la actualidad, lo socioambiental cobra auge por diversas razones, entre ellas el cambio climático, la crisis hídrica, la crisis energética y las distintas luchas que emergen por la existencia de relaciones hegemónicas que determinados actores establecen con la Naturaleza y con las poblaciones que reivindican derechos como el de acceso a la tierra, al ambiente sano, entre otros derechos que han sido vulnerados en el marco de las relaciones mencionadas.

Es en estas relaciones hegemónicas, que se forman a raíz del modelo neoliberal y de las dinámicas de la globalización, en donde ha de considerarse al Estado como uno de los actores principales en su configuración. Por esta razón la presente investigación considera relevante analizar la relación que sostiene el Estado colombiano con la Naturaleza en territorios rurales a la luz del fenómeno de la megaminería, desde un cuerpo categorial que logre cohesionar de forma compleja la relación aquí estudiada. Este cuerpo está conformado por las categorías de Naturaleza, desarrollo y derechos, y su abordaje se ha realizado a partir de los discursos que el Estado plasma en los lineamientos y políticas públicas concernientes a lo ambiental, ya que éstas construyen la realidad socioambiental en Colombia, como la que se da en territorios rurales por la explotación minera a gran escala.

Un ecosistema paramuno como el páramo de Santurbán resulta un ejemplo claro de disputa discursiva entre el Estado y determinados actores contrahegemónicos para situar el ejercicio analítico de problemáticas socioambientales que se desprenden de las formas depredadoras de relacionarse con la Naturaleza. La disputa discursiva mencionada se logra analizar aquí a la luz de los significados que el Estado atribuye a las tres categorías antes

mencionadas, de los sentidos latentes detrás de estos significados y de los contrasentidos de los que dan cuenta los actores contrahegemónicos considerados en esta investigación, como por ejemplo los de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Lo planteado se logró por medio de un recorrido metodológico que dio como fruto la conformación de tres capítulos en cuanto hallazgos, los cuales son: (1) “Significados constructores de la realidad socioambiental”, (2) “Los sentidos detrás de la relación Estado-Naturaleza”, y (3) “Las manifestaciones de la tensión entre los sentidos y contrasentidos”. Estos tres capítulos son los que dan forma a la conexión existente entre los discursos del Estado en torno a su relación con la Naturaleza -a la luz de la megaminería en territorios rurales-, los sentidos detrás de éstos y los contrasentidos que emergen como respuesta por parte de determinados actores contrahegemónicos, y, por último, las implicaciones que su enunciación y materialización producen; implicaciones que en este caso se han abordado desde el ámbito socioambiental.

Dichas implicaciones están inscritas en el campo de los derechos, comprendidos desde la integralidad propuesta por Gregorio Mesa Cuadros, es decir desde el ámbito socioambiental. Así, esta investigación, la cual se enmarca en la temática de investigación de la Universidad de La Salle llamada “Estudios sobre Estado y políticas públicas en y desde los derechos humanos”, la cual se inscribe en la línea de investigación “Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático”, propone profundizar sobre la esfera socioambiental en el estudio de los derechos, entendiendo que la discusión de los mismos no está acabada y precisa generar crítica que construya comprensiones y abordajes cada vez más complejos.

Esta investigación espera ser útil en el reconocimiento crítico y complejo de las dinámicas y repercusiones a las que se enfrentan territorios donde se desarrollan megaminería y otras formas de relación depredadora con la Naturaleza, con el fin de contribuir, desde un posicionamiento político, a la comprensión compleja de la realidad socioambiental y al vislumbramiento de posibles ejes de acción con base en fundamentos analíticos concienzudos.

## **CAPÍTULO 1: DELIMITACIÓN DEL TEMA**

El tema de investigación es la relación del Estado colombiano con la Naturaleza en territorios rurales, desde los discursos expresos en lineamientos y políticas públicas concernientes a lo ambiental. Para llegar a esto se hizo tras una serie de discusiones sobre aproximaciones teóricas y conceptuales en torno a las formas de concebir la Naturaleza y los derechos concernientes a la misma; dándose un consenso entre el equipo para que el punto de interés investigativo sea el análisis de la relación entre la misma y el Estado colombiano en el contexto del sistema capitalista y neoliberal, ya que este sistema es el que determina la noción predominante y uso que se hará de la Naturaleza.

Analizar esta relación, Estado-Naturaleza, implica hacer un frente crítico a la despolitización de la Naturaleza analizando cómo el Estado se relaciona con ella desde la legislación colombiana, a la luz de tres categorías analíticas que guían el desarrollo del proyecto: Naturaleza, desarrollo y derechos.

## CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES

Para dar inicio al desarrollo del proyecto de grado en la línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático, el equipo investigador empezó a revisar los posibles temas de trabajo según sus intereses personales y académicos. A partir de la experiencia de práctica profesional de dos integrantes del grupo, se materializó la afinidad con el pensamiento marxista-ecológico, es decir, se cristalizó un mayor enfoque horizontal sociedad-Naturaleza en su quehacer profesional. A su vez, algunos integrantes del mismo equipo llevaban un recorrido de producción de conocimiento en relación a temas indígenas, desde una perspectiva decolonial, haciendo una crítica al concepto de desarrollo, al sistema capitalista y neoliberal, al eurocentrismo y al antropocentrismo, temas que se compartían ampliamente por todo el grupo de investigación.

Todo este recorrido condujo a la identificación discriminada de las siguientes categorías: Naturaleza, desarrollo y derechos; todos ellos leídos desde el sistema socio-político-económico capitalista, como ya mencionó en el apartado anterior de *Delimitación del tema*. El grupo de investigación inició un ejercicio exploratorio sobre dichas categorías mediante un rastreo en el cual se tuvieron en cuenta bases de datos electrónicas y base de datos de las instituciones universitarias<sup>1</sup> que cuentan con el programa de Trabajo Social en la ciudad de Bogotá, además de la Universidad Industrial de Santander debido al interés de abordar el problema de investigación trayendo a colación la relación del Estado colombiano con la Naturaleza que se da en un territorio como el páramo de Santurbán.

Las bases de datos electrónicas revisadas fueron: Redalyc, E-libro y Scielo. Este barrido se discriminó por medio de los siguientes criterios: Naturaleza, derechos humanos, ciencias sociales y sistema capitalista. Dicha búsqueda dio como resultado 56 archivos en total que fueron discriminados por el grupo investigador mediante un barrido que permitió determinar qué archivos serían útiles para esta fase investigativa, como también identificar los aportes teóricos de dicha base bibliográfica, desde los intereses teórico-políticos hasta ese momento proyectados.

---

<sup>1</sup> Se consideró sólo las escuelas de trabajo social de Bogotá ya que para esta etapa investigativa el interés se centró en indagar los estudios realizados en esta ciudad en torno a los tres temas mencionados.

A continuación se expone, de manera detallada, los resultados de dicha búsqueda:

*Cuadro 1.* Base de datos electrónicas:

| <b>Base de datos electrónica</b> | <b>Cantidad</b> |
|----------------------------------|-----------------|
| Redalyc                          | 35              |
| E-libro                          | 4               |
| Scielo                           | 17              |
| <b>Total:</b>                    | <b>56</b>       |

Elaboración propia.

Para el rastreo documental el grupo investigador tuvo en cuenta a la Universidad de La Salle, la Universidad Externado, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Republicana, la Fundación Universitaria San Alfonso, la Universidad Monserrate, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Nacional; además de la Universidad Industrial de Santander, por las razones anteriormente mencionadas.

Este barrido dio como resultado doce (12) investigaciones desde la disciplina de Trabajo Social:

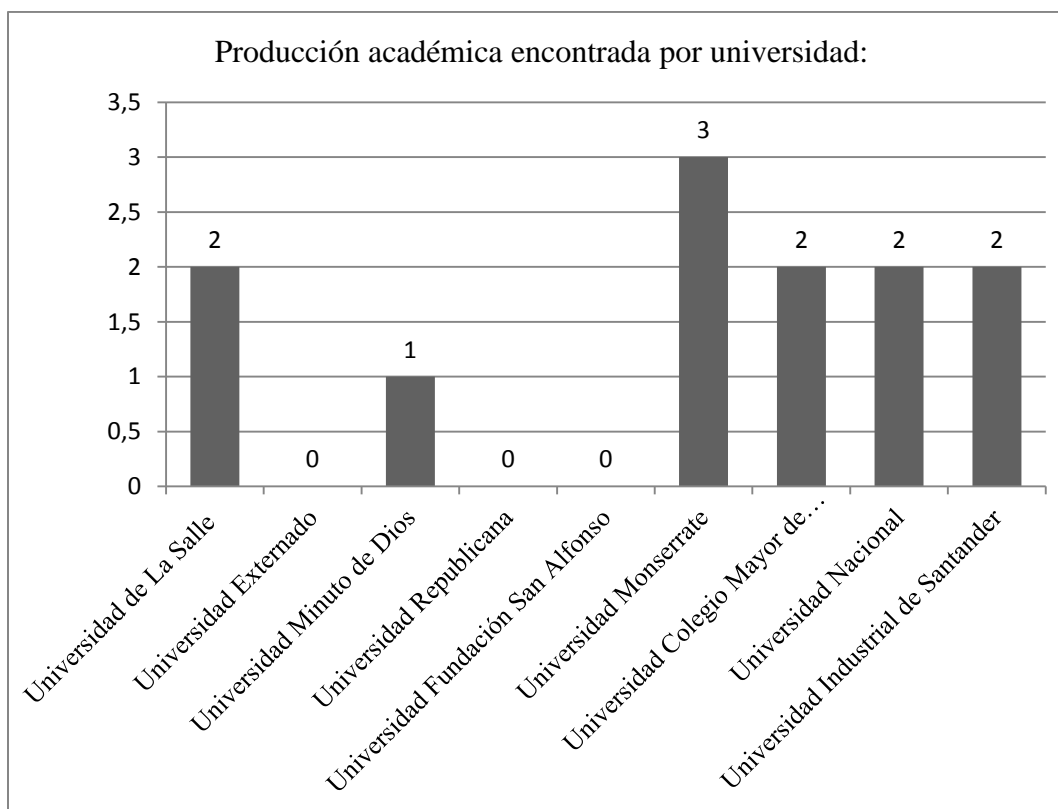
*Cuadro 2.* Base de datos de instituciones universitarias:

| <b>Universidad</b>                        | <b>Número de investigaciones</b> |
|---|----------------------------------|
| Universidad de La Salle                   | 2                                |
| Universidad Externado                     | 0                                |
| Universidad Minuto de Dios                | 1                                |
| Universidad Republicana                   | 0                                |
| Universidad Fundación San Alfonso         | 0                                |
| Universidad Monserrate                    | 3                                |
| Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | 2                                |
| Universidad Nacional                      | 2                                |
| Universidad Industrial de Santander       | 2                                |
| <b>Total:</b>                             | <b>12</b>                        |

Elaboración propia.

En resumen, los porcentajes correspondientes a producción de conocimiento en torno a la relación entre los criterios de búsqueda “Naturaleza, derechos humanos y Trabajo Social”, son los siguientes:

*Gráfica No. 1:*



Elaboración propia.

El anterior gráfico muestra la baja producción de conocimiento referente a la relación entre la disciplina de Trabajo Social y el concepto de Naturaleza. Por esta razón el grupo investigador encontró necesario ampliar el espectro de búsqueda con otras disciplinas de las ciencias sociales. En esta línea, la Antropología y la Sociología destacaron con un conglomerado de investigaciones un tanto mayor que Trabajo Social. Las investigaciones de las dos nuevas disciplinas consideradas corresponden al mismo grupo de instituciones universitarias previamente señaladas.

Es menester mencionar que en relación a los estudios referentes a la Naturaleza, hechos desde la Antropología, estos han respondido al interés de producción de conocimiento relacionado al ámbito cultural; tal como lo señala Campos:

(...) podemos observar cómo la naturaleza ha sido un eje de vital importancia en el desarrollo de la disciplina antropológica, apareciendo como un polo fundamental en su constitución y distribución de sentidos. Así, una aportación indiscutible de la antropología es haber definido la cultura frente a la naturaleza; de hecho “la relación

entre cultura y naturaleza (o entre población y entorno, si prefiere utilizarse el vocabulario ecológico-técnico) ha ocupado una parte sustancial del análisis antropológico” (Comas d’Argemir, 1998:124) (Campos, 2008, pág. 145).

Por lo anterior, los antecedentes aquí expuestos no dan cuenta de la producción académica desde el campo del saber de la Antropología, ya que el interés del presente trabajo se centra en la relación Estado-Naturaleza desde los ámbitos social, político y económico, a partir de los discursos de Estado y de gobierno propuestos desde el año 2010 a la actualidad.

En relación a la sociología, se encontró que esta disciplina ha hecho en Colombia un aporte a las ciencias sociales, en cuanto a la relación de las mismas con la Naturaleza para su campo de saber, desde tres corrientes “que se interrelacionan permanentemente en su objetos y métodos de estudio: la historia ambiental, la ecología política y la Sociología ambiental” (Castro Osorio, 2009, pág. 26). El siguiente cuadro, elaborado por Carolina Castro (2009) muestra los temas de estudio abordados desde cada corriente:

*Cuadro 3. Corrientes desde la Sociología en torno a la Naturaleza:*

| <b>Historia Ambiental</b>                            | <b>Sociología ambiental<br/>(relación hombre-<br/>Naturaleza)</b> | <b>Ecología política</b>   |
|--|---|--|
| 1. Transformación del medio ambiente.                | 1. Creación y concepción del mundo. Sistema de significados.      | 1. Transformación de la naturaleza.  |
| 2. Influencia de la naturaleza sobre la vida social. | 2. Influencia del entorno físico.                                 | 2. Concepciones de la naturaleza.  |
| 3. Ideas sobre la naturaleza.                        | 3. El hombre como factor de cambio del medio ambiente.            | 3. Disputas políticas y sociales por la apropiación y significados de la naturaleza. |
| Origen: Historia.                                    | Origen: ecología humana.  | Origen: ecología humana y Economía política.   |

*Fuente:* Tomado de Carolina Castro Osorio (2009).

Ha surgido así en Colombia la inquietud de generar saber desde la Sociología entorno a una nueva cuestión, la cuestión ambiental; lo que para el presente proyecto de

investigación resulta mandatorio explorar. Gómez López expresa el surgimiento de dicha cuestión de la siguiente manera:

La cuestión ambiental surge como una crisis en las formas de cómo se ha comprendido el mundo e intervenido la naturaleza. Esta problemática se enmarca en una crisis del conocimiento generada por la racionalidad teórica, formal e instrumental del orden económico y jurídico, enmarcada en el modelo económico capitalista, como respuesta a la incapacidad de explicar procesos emergentes desde las teorías científicas y los métodos de investigación hegemónicos. En este sentido, se plantea la necesidad de internalizar un saber ambiental emergente que dé cuenta de los procesos de orden natural y social que determinan los cambios socioambientales en el contexto de la globalización (Gómez López, 2012, pág. 6).

#### Hallazgos de los antecedentes:

Respecto a los aportes de las investigaciones exploradas, tanto en las bases de datos electrónicas como en las disciplinas de Sociología y Trabajo Social en las instituciones universitarias mencionadas anteriormente, se halló que el tema de la Naturaleza ha sido entendido y trabajado desde diferentes perspectivas, entre las cuales algunas convergen en el enfoque de derechos humanos y en la crítica al actual modelo económico-político-social y de desarrollo.

Con el fin de dar cuenta de manera más detallada de las perspectivas encontradas, se construyó una serie de categorías de análisis, producto de un cruce comparativo de los resultados de la búsqueda de antecedentes. Dicho conjunto categorial es el siguiente:

1. Desarrollo humano sustentable y Desarrollo sostenible, apuestas frente a la problemática socioambiental.
2. Colonización de la Naturaleza.
  - 2.1. Extractivismo: colonización de la Naturaleza. Multinacionales y/o trasnacionales, principales actores.
3. Relación entre la cuestión socioambiental y los derechos humanos.



*Desarrollo humano sustentable y Desarrollo sostenible, apuestas frente a la problemática socioambiental:*

Frente a la problemática socioambiental, se encontró que desde el trabajo social, esta se ha venido trabajando desde una corriente que la ha abordado en relación al Desarrollo Humano Sustentable y al Desarrollo Sostenible. Las investigaciones que le apuestan a estos modelos de desarrollo conciben a la Naturaleza como proveedora de recursos naturales para el desarrollo del hombre.

La investigadora Sánchez Ariza afirma que la Naturaleza se entiende como el contexto que satisface las necesidades de las personas, brinda un territorio provisto de elementos que hacen la vida más fácil y permite consolidar relaciones interpersonales, con el fin de realizarse como personas y como ser social (Sánchez Ariza, 2009).

(...) la naturaleza proporciona elementos para la vida de una persona -funcionamientos: estar suficientemente alimentado, gozar de buena salud, evitar enfermedades, ser feliz, tener dignidad, participar, etc.-, que favorece la manifestación de capacidades -conjunto de funcionamientos que reflejan la libertad del individuo para llevar un tipo de vida- (Sánchez Ariza, 2009, pág. 32).

Bajo esta misma línea, Ruth Bello hace una lectura de la Naturaleza bajo el concepto de medioambiente; el cual según ella “transversaliza todos los ámbitos de la vida humana y por lo tanto se encuentra en una directa relación con mejores condiciones para la calidad de vida de la población” (Bello, 2002, pág. 23).

Según otra investigación de trabajo social, la disciplina ha reconocido que la sociedad no era consiente entre el vínculo estrecho de las actividades humanas y el medioambiente y por ende, en este estudio se expone la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible-sostenibilidad ambiental, a través de procesos sociales educativos y formativos, ya sea con personas familias, grupos o comunidades (Ballén, Buitrago, Gómez, Salamanca, & Toro, 2000).

A su vez, la trabajadora social July Constanza Castro, recomienda para la intervención en el ámbito ambiental el apoyo a las comunidades en la conformación de redes locales para el desarrollo local, en pro de la construcción de sostenibilidad y la promoción de criterios de integralidad que no superpongan las acciones enfocadas exclusivamente en el sector económico y de infraestructura física (Castro Castro, 2002).

Por último, Bello hace referencia a la importancia de abordar la problemática ambiental desde la seguridad alimentaria en torno a los dos modelos de desarrollo aquí planteados, ya que la cuestión ambiental juega un papel importante, porque afecta la calidad y las condiciones de la alimentación y, porque en el contexto rural de Colombia el agro presenta una crisis económica que ha producido un colapso tanto a nivel social como ecosistémico (Bello, 2002). En este sentido, la autora afirma que:

(...) es necesario avanzar en la visión productiva del problema alimentario basándonos en supuestos de conservación y preservación de los recursos naturales, como condición necesaria para que haya sustentabilidad ambiental donde no sólo la producción alimentaria sea ambientalmente sana, sino que sea propulsora de tecnologías limpias que contrarresten las inadecuadas prácticas agrícolas que agotan los recursos naturales los cuales son la base de la producción alimentaria (Bello, 2002, pág. 18).

### Colonización de la Naturaleza:

Otro aspecto, en relación a la Naturaleza y la sociedad, trabajado desde las Ciencias Sociales ha sido la colonización de la primera; la cual, según Luis Alfredo Bohórquez Caldera (Bohórquez Caldera, 2013), se da mediante la interrelación de tres elementos esenciales que constituyen el dispositivo colonial: Naturaleza, extractivismo y colonialidad.

La Naturaleza, parafraseando al autor, es una apropiación de carácter cultural por parte de una comunidad humana, es decir, un “cúmulo de elementos biológicos, sus características, las narrativas, las visiones, los simbolismos y las cosmovisiones a través de las cuales se hace lectura, explicación, comprensión y praxis de lo que identificamos como la cosa natural” (Bohórquez Caldera, 2013, pág. 222).

En cuanto al extractivismo, Bohórquez lo señala como “un elemento estructural que hace posible, no sólo la diferencia colonial sino la hegemonía del poder y la subalternidad del ‘otro’, que en el lenguaje colonial, es el “bárbaro” (Bohórquez Caldera, 2013, pág. 226); cabe aclarar que por diferencia colonial el autor alude a la clasificación e identificación que hace quien posee un rango cualitativo superior de las poblaciones según sus faltas o excesos (Bohórquez Caldera, 2013, pág. 226).

Por último, el elemento de colonialidad, como parte del dispositivo colonial sobre la Naturaleza, hace referencia, según Quijano, retomado por Quintero, a:

(...) un 'patrón de poder' que opera a través de la naturalización de jerarquías raciales y sociales que posibilitan la re-producción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas que no sólo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial, sino que también subalternizan y obliteran los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados (Quijano, 2000) (Quintero, 2010, pág. 89).

Son estos tres elementos los que componen el dispositivo colonial, el cual posibilita la colonización de la Naturaleza, entendida entonces como “la estrategia, la serie de circunstancias y mecanismos a través de los cuales ha sido posible establecer la colonialidad, no sólo del poder, sino del ser y en general, la subalternidad de la cultura” (Bohórquez Caldera, 2013, pág. 223).

Así mismo, estos tres elementos son entendidos como parte de un discurso dominante y poderoso que, además de tener implicaciones en el ámbito económico, político y social, también las ha tenido sobre la Naturaleza, es decir, ha producido la colonización de la Naturaleza. Frente a esta colonización, el autor aclara que la misma no hace referencia a hechos correspondientes que hayan quedado en el pasado; por el contrario, siguen latentes en la actualidad, disfrazados con otras denominaciones y discursos que se constituyen desde y para el capitalismo.

De esta manera, Bohórquez Caldera invita a tener claridad sobre el discurso que se maneja, tanto desde la academia como desde las instituciones estatales y asimismo desde la

población, a fin de tener una comprensión de carácter crítico sobre lo concerniente a la manera dominante con la que se ha establecido la relación sociedad-Naturaleza.

En relación a este fenómeno en el contexto colombiano, Myriam Luz Jaramillo indica cómo se ha constituido en el país un histórico que atenta contra la conservación de la Naturaleza mediante políticas agrarias que funcionan como herramienta del capitalismo y mediante relaciones de poder hegemónico entre la élite -la cual es la minoría- y la población campesina y agrícola, la cual representa la mayoría (Jaramillo Giraldo, 2005). Jaramillo da cuenta de nociones de la Naturaleza y fundamentos que justifican la colonización de la misma, tales el determinismo geográfico, la civilización de vertiente, el progreso y la tierra como función social, con las cuales se ha impuesto una relación de dominio sobre la tierra y la Naturaleza en un país netamente rural; relación que se caracteriza por las dinámicas de explotación de la Naturaleza, las cuales se han ido reforzando desde la colonización hasta el día de hoy y han tenido repercusiones en el ámbito cultural, político, legal y social del país.

El determinismo geográfico hace referencia al desprecio que se tenía por la tierra y por la Naturaleza. Bajo esta concepción, la biodiversidad de Colombia era vista como impedimento para el desarrollo y como sinónimo de infortunio para una élite que pretendía copiar el modelo de desarrollo e industrialización europeo. Esta forma de comprender la Naturaleza tiene como base la influencia conservadora y religiosa cristiana heredada de la colonia que, entre otras ideas, establecía “que los reinos vegetal y animal habían sido maldecidos igualmente a causa del pecado del hombre” (Jaramillo Giraldo, 2005, pág. 90).

La civilización de vertiente se caracteriza por la intervención del “hombre culto” sobre la Naturaleza para traer consigo prosperidad y cultura (todo ello, siempre bajo modelos extranjeros). Jaramillo cita a Luis López de Mesa, representante a favor de esta concepción y afirma que “fue ineludible destruir el país existente para recrearlo a la medida del hombre culto (López de Mesa, 1956: 280)” (Jaramillo Giraldo, 2005, pág. 92).

La idea de progreso, la cual es concebida por la Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC, constituida en 1878, defiende “la idea de que la agricultura es ‘motor de progreso y fuente de acumulación de riqueza’, y para ello se requieren hombres ilustrados”

(Jaramillo Giraldo, 2005, pág. 93). Aunque esta concepción haya nacido a finales del siglo XVII, sólo hasta el siglo XX empezó a tomar fuerza, es decir, empezó a adoptar la “visión que relaciona ciencia-técnica y naturaleza, que habla de la tierra como industria, como riqueza natural” (Jaramillo Giraldo, 2005, pág. 93).

La última concepción que trabaja la autora, es la que ve a la tierra como función social. Esta se manifiesta en la Ley 200 de 1936, la cual afirma que sólo se puede ratificar la adjudicación de un terreno siempre y cuando este sea utilizado para la agricultura y/o ganadería, es decir que todo aquel que fuera dueño de una propiedad debía explotarla con fines económicos o de lo contrario sería un terreno de dominio público (Jaramillo Giraldo, 2005, pág. 97).

Estas cuatro concepciones, todas lideradas por la élite colombiana, denotan una herencia de colonización sobre la Naturaleza y un deseo de apropiación de modelo de desarrollo, en el cual el papel deseado por dicha élite era el de promotor del capitalismo en el país (Jaramillo Giraldo, 2005).

*Extractivismo: colonización de la Naturaleza. Multinacionales y/o trasnacionales, principales actores:*

En cuanto al extractivismo efectuado por empresas multinacionales y/o trasnacionales, se encontró una serie de investigaciones producidas; empero, no todas responden al análisis complejo que visibilice a dichos actores (multinacionales) como responsables de la colonización de la Naturaleza. Así, en primera instancia, se halla una postura clara respecto a este fenómeno por parte de Luis Bohórquez Caldera, quien señala que:

(...) el extractivismo, como parte del dispositivo colonial, ha funcionado de manera eficiente, y ha generado riquezas para quienes ejercen el control comercial, desde que fue impuesto por el colonialismo hispano-portugués hasta nuestros días. Afirmar lo contrario, puede hacer parte de un discurso artificioso que busca blanquear la imagen del capitalismo, y que además, intenta poner en escena, discursos falaces que se pregonan camuflados con sostenibilidad, responsabilidad social, eco sostenibilidad, sello verde, eco-

eficiencia, etc., cosas, que se están demostrando que no son en la realidad tanto como se teorizan (Bohórquez Caldera, 2013, pág. 229).

Asimismo, desde el Instituto de Estudios Ambientales-IDEA de la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra una investigación que hace un recorrido epistemológico y de contexto en torno a la práctica extractivista en Colombia (Putumayo). Dicha investigación hace una crítica a las lógicas basadas en la economía neoclásica y los impactos de éstas sobre el ambiente y sobre determinadas poblaciones humanas.

Los desarrollos de la industria extractiva no sucedieron ni suceden sobre espacios vacíos sino sobre paisajes naturales y sociales que se han afectado violentamente desde la irrupción de la extracción de hidrocarburos. Durante los dos períodos expuestos previamente se generaron una serie de cambios que transformarían de manera radical la composición social del Putumayo. Tales transformaciones implicaron dinámicas de exclusión e inclusión para diversos actores territoriales y configuraron la actual composición social del departamento a través de situaciones de conflicto por recursos como la tierra y por la demanda de mayores oportunidades económicas (Muñoz Angulo, 2010, pág. 47).

Sin embargo, a pesar de que esta investigación pone en manifiesto las consecuencias ambientales y sociales de este modo de producción del capital y de este tipo de colonización por parte de las lógicas extractivistas de multinacionales -las cuales transforman la composición social del territorio- el autor adopta el desarrollo sostenible como forma de equilibrar el modo de producción capitalista y el daño al ambiente.

En segunda instancia, se halla producción de conocimiento desde la disciplina de Sociología en torno a la política minero-energética colombiana. Según la autora Natalia López Gómez, esta política minero-energética debe ser analizada desde la dinámica económica nacional, la cual se caracteriza por el creciente saqueo de sus riquezas naturales, la no industrialización por no adoptar la vía del modelo de sustitución de importaciones, la utilización de mano de obra barata y desvalorizada, y por el endeudamiento creciente del país. Además esta política debe analizarse como un negocio viable y fructífero para empresas transnacionales, debido al régimen jurídico y tributario nacional. Por último, en

relación al conflicto socioambiental por la gran minería en la vereda de Santa Lucía (municipio de La Sierra, Cauca), la autora señala, entre otras cosas, que:

(...) el problema de tierras, la pobreza económica, el no-acceso a la educación, la falta de oportunidades para el desarrollo del campesinado como actor político y decisivo para el país, etc. han beneficiado y facilitado el ingreso de las empresas mineras, instaurándose y legitimándose como una solución a los problemas económicos de las personas más pobres y afectadas en la vereda de Santa Lucía, municipio de La Sierra-Cauca (Gómez López, 2012, pág. 31).

De acuerdo a lo que menciona Natalia Gómez, esta colonización sobre la Naturaleza por parte de transnacionales se extiende hacia una colonización sobre las poblaciones rurales del país, produciendo tensiones sobre el territorio y cambiando sus dinámicas y condiciones de vida por unas que son impuestas.

Por último, se halla que en relación a esta categoría, la disciplina de Trabajo Social presenta matices en cuanto al análisis arriba expuesto. De esta manera, por un lado se encuentra una investigación de la Universidad de La Salle muy cercana a la postura del presente proyecto, la cual realizó un análisis sobre las relaciones entre la sociedad y el ambiente, específicamente en torno al agua, y la forma en las cuales se han sustentado dichas relaciones. Por el otro lado se encuentra otra investigación desde trabajo social, de la Universidad Industrial de Santander-Bucaramanga, que realiza su análisis desde los impactos de la presencia de mineras multinacionales sobre la Naturaleza.

Así, la investigación de Dahan Sánchez, Harold Castillo y Cristina Soler da cuenta del auge de proyectos mineros o embalses para generar energía que amenazan el agua, los cuales “deja una preocupación y muchos cuestionamientos a nivel social, cultural, político y económico” (Sánchez, Castillo, & Soler, 2013, pág. 123). Frente a esto, los autores mencionados traen a colación un informe de la Contraloría sobre el estado de los recursos naturales y ambientales en Colombia durante el año 2011 y 2012, en donde “se concluyó que el desarrollo territorial del país es desordenado, inequitativo y ambientalmente insostenible, aunque las locomotoras de la economía generan tasas de crecimiento positivas” (Sánchez, Castillo, & Soler, 2013, pág. 123).

La investigación anteriormente referenciada permite leer el panorama político-económico-social del territorio nacional, basado en un modelo pensado para la subsistencia y reforzamiento del sistema capitalista, en especial el extranjero que domina y se superpone al bienestar tanto ambiental como social. En términos de colonización de la Naturaleza, esta investigación aborda la colonización del agua y sus repercusiones en comunidades rurales que se oponen a proyectos minero-energéticos.

Ahora, en relación al análisis que presenta la investigación de Ana Sánchez Ariza, se identifican algunos impactos propios de las actividades directas/indirectas que realizan las multinacionales sobre la Naturaleza, tales como: “la contaminación del elemento hídrico por disposición indiscriminada de basuras y el vertimiento de aguas negras -sin previo tratamiento-, la deforestación, la erosión (...), la degradación de suelos, la pérdida de la cubierta vegetal, la reducción del cauce por edificaciones” (Sánchez Ariza, 2009, pág. 155). Sin embargo, estos impactos son presentados por la autora como hechos ocasionados con igual nivel de responsabilidad tanto por las multinacionales como por la población común, quedando ausente el componente analítico crítico que posibilita reconocer y visibilizar a los actores preponderantes de la colonización de la Naturaleza.

### *Relación entre la cuestión ambiental y los derechos humanos:*

La cuestión ambiental, como ya se ha mencionado desde la propuesta de Gómez López, manifiesta la manera cómo se ha comprendido y establecido una relación con la Naturaleza a partir de dinámicas propias del sistema económico capitalista; en este sentido, siguiendo a la misma autora, la gran minería constituye el conflicto socioambiental en tanto que genera una vulneración de derechos humanos íntimamente relacionados con la Naturaleza. Dicha vulneración representa “el problema de tierras, la pobreza económica, el no-acceso a la educación, la falta de oportunidades para el desarrollo del campesinado como actor político y decisivo para el país, etc. (...)” (Gómez López, 2012, pág. 31).

Aquí, vale la pena mencionar la forma en la que Gómez entiende el conflicto socioambiental a fin de identificarlo como un elemento complejo y sustancial que transversaliza el tema de los derechos humanos:



Los conflictos ambientales emergen de las fracturas del modelo hegemónico capitalista de desarrollo, en donde el hombre máquina convirtió a los demás seres de la naturaleza en recursos para poder mantener y engrosar el modelo económico capitalista que tiene como motor fundamental la acumulación de capital, la cual requiere del desarrollo de las fuerzas productivas y del avance tecnológico y científico que posibilitan el incremento de la producción, la expansión de la demanda y el consumo. Así, podemos establecer que la crisis ambiental del modelo de desarrollo y, por tanto, los conflictos socioambientales son la evidencia del fraccionamiento del modelo económico (Gómez López, 2012, pág. 9).

Siguiendo los planteamientos de la autora, se rescata su posicionamiento frente al papel que asume el Estado para enfrentar las distintas problemáticas que inherentemente repercuten en la vulneración de los derechos de las poblaciones y sus territorios:

Los programas y proyectos sociales son una estrategia que facilitan el ingreso de la empresa a los territorios, en la medida que brindan beneficios económicos a corto plazo que no solucionan los problemas estructurales existentes en las zonas, sino por el contrario los agudizan. Las relaciones que se caracterizaban por la solidaridad, la cooperación y la confianza han pasado a ser mediatizadas por la individualización que identifica a la forma de vida hegemónica (Gómez López, 2012, pág. 31).

Lo anterior resulta significativo para el análisis que se pretende trabajar en la presente investigación debido a que plantea una crítica a la labor del Estado y su relación con el sistema capitalista, y la influencia negativa de la misma en las problemáticas de orden estructural dadas por la legitimación de las actividades de las grandes empresas.

Otro aspecto encontrado durante la revisión documental, específicamente de una investigación de trabajo social, basada en conceptos como medio ambiente y recursos naturales, hace relevancia a la relación que se da entre la vulneración al medio ambiente y la vulneración de derechos humanos a poblaciones dominadas que no tienen acceso libre al uso o a la conservación de los recursos naturales. A su vez, hace una directa relación entre problemática ambiental y cuestión social, concepto de inminente importancia, para la investigación presente, si se sitúa el problema de la misma dentro del contexto de sistema capitalista y neoliberal.

La propuesta de Franceschi (Franceschi Barraza, 2014), autora de la investigación mencionada previamente, se encuentra interesante puesto que plantea la importancia de estudiar la problemática ambiental dentro del quehacer del Trabajo Social debido a que dicha disciplina actúa sobre la cuestión social, siendo considerada no sólo como el producto de la contradicción capital-trabajo, sino de la contradicción entre actores de clases e intereses opuestos que los dominados problematizan colectivamente (Franceschi Barraza, 2014).

Es indispensable aclarar que este estudio investigativo realizado desde el Trabajo Social asume la Naturaleza como sinónimo de medioambiente, lo cual se aparta de la concepción que de ella se tiene en la presente investigación.

Un informe presentado por el CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, destaca la importancia de investigar y analizar los derechos humanos con relación a su violación desde las explotaciones mineras y proyectos energéticos, así mismo la capacidad de las comunidades para la lucha por un desarrollo integral el cual no considera menoscabar la Naturaleza fundamentado desde el crecimiento económico (CINEP/PPP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, 2012).

El aporte anterior devela la relación entre la cuestión ambiental y los derechos humanos, ya que reconoce la violación de estos últimos a partir de la explotación minera, en donde dicha explotación representa una de las formas de relacionarse con la Naturaleza que se han planteado desde el Estado; un Estado que enmarca su papel bajo las lógicas del sistema capitalista y del modelo neoliberal que, siguiendo a Sánchez Ariza, es entendido como un modelo de desarrollo “basado en la liberación económica, el Estado miniatura o sustitución del mismo por el mercado, la competencia por el recurso natural, la disciplina fiscal, la propiedad privada, la desregulación, la privatización, etc.; y como sustento teórico de la globalización (...)” (Sánchez Ariza, 2009, pág. 28).

En ese sentido, las lógicas que asume el Estado colombiano apuntan a la privatización, entre otras cosas, de lo que él denomina recursos naturales; y frente a estas lógicas, los movimientos sociales aparecen como un actor protagónico que se oponen a las mismas, puesto que éstos “surgen cuando el Estado y las instituciones o partidos políticos

no cumplen con su función social; es decir, no garantizan a la sociedad los derechos necesarios para vivir dignamente, conllevando a ser críticos del Estado y de los partidos políticos” (Tegría Uncaria, 2012, pág. 19).

Finalmente, es pertinente decir que los movimientos sociales -enmarcados en el conflicto ambiental- representan un papel protagónico, ya que se “convierten en una estrategia política de lucha para avanzar en la instauración de la justicia ambiental (...) y resolver inequidades, asimetrías y disparidades en la asignación y en la distribución de derechos y accesos, y a garantizar mecanismos, procesos e instituciones de justicia ambiental” (Tegría Uncaria, 2012, pág. 28).

#### *Vacíos de conocimiento:*

En el acumulado epistemológico que resulta de los antecedentes arriba expuestos, sobre la Naturaleza en las ciencias sociales, se puede observar que existen algunas investigaciones que dan cuenta de las afectaciones sociales, ambientales, culturales, políticas y económicas, producto de las formas de relacionamiento que sostiene la sociedad colombiana con la Naturaleza. Sin embargo, cabe mencionar que desde lo encontrado en el rastreo para la construcción de los antecedentes, en la disciplina de Trabajo Social no se ha desarrollado una vasta comprensión de la Naturaleza en estrecha e indisoluble relación con las dinámicas sociales; como bien dicen Sánchez, Castillo y Soler, una investigación de corte socioambiental representa un reto por “incursionar en temas poco abordados desde la profesión, el cual se sustenta en la responsabilidad ética y académica de responder a un vacío conceptual desde una postura crítica que sea un referente de análisis para posteriores ejercicios investigativos dentro de las Ciencias Sociales” (Sánchez, Castillo, & Soler, 2013, pág. 121).

Por otro lado, la mayoría de producciones de conocimiento giran en torno al concepto de medio ambiente, el cual responde a los modelos de desarrollo tanto sostenible como sustentable. Vale la pena aclarar que ambos modelos de desarrollo conciben la Naturaleza como proveedora de recursos naturales para el desarrollo del ser humano, visión

que se aparta del posicionamiento epistemológico y teórico del equipo de trabajo de la presente investigación.

Por último, se puede decir que en dicho compilado epistemológico está ausente el análisis crítico del rol del Estado colombiano en relación a la cuestión socioambiental y, a su vez, la visibilización de los actores responsables de la colonización de la Naturaleza. A pesar de que el modo de producción del capital y la colonización -manifestada en las lógicas extractivistas del Estado y de las multinacionales- han sido puestos en la palestra analítica, existe una tendencia a adoptar el desarrollo sostenible como una forma de mitigar los daños socioambientales, sin afectar los fundamentos del actual modo de producción.

### **CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

A la luz de los antecedentes y los vacíos de conocimiento que en ellos se encontraron, surgió el planteamiento del problema y la fase metodológica para la construcción de la pregunta problema que guiaría la investigación. Así, según lo indagado, se ha visto que la Naturaleza ha estado enmarcada en una concepción de medio ambiente, con intenciones colonizadoras que actualmente puede manifestarse también en los denominados desarrollos sostenible y sustentable. Esta concepción de medio ambiente ha legitimado el extractivismo de los elementos naturales, vistos como recursos al servicio de las personas; lo cual se fundamenta en el enfoque antropocéntrico que ve a la Naturaleza como un objeto de explotación y que busca mitigar los efectos de la depredación y no evitarla, dejando de lado el carácter de sujeto de derechos que posee la Naturaleza (Acosta & Martínez, 2009).

Comprender cómo esta intención colonizadora del ser humano -específicamente de los poderes industriales- ejercida sobre la Naturaleza, es adoptada por el Estado, permite hacer un énfasis en la actual crisis socioambiental en el marco de la relación sociedad-Naturaleza y los derechos que allí se ponen en juego; a su vez, implica cuestionar el papel del Estado en torno a las políticas públicas ambientales y los efectos que estas provocan

tanto en la Naturaleza como en la sociedad colombiana, específicamente en las poblaciones rurales.

Por lo anteriormente expuesto, es menester analizar esta relación Estado colombiano-Naturaleza, desde los discursos insertos en las políticas públicas ambientales de Colombia, los cuales avalan la explotación de la Naturaleza, sobre todo mediante actividades de mayor impacto como la megaminería, ya que para su ejecución:

(...) se hace necesario cambiar los cursos de los ríos y generalmente utilizan grandes explosiones con dinamita, que producen unos niveles de ruido de gran magnitud que provocan que los animales al igual que las personas, cambien su hábitat o incluso su comportamiento alimenticio y reproductivo. Igualmente suele ser necesaria la construcción de infraestructuras precedidas por la deforestación del lugar (PBI Colombia, 2011, págs. 6-7).

Comprender cómo el uso de la palabra, por parte del Estado, materializa la explotación desmedida de la Naturaleza bajo un ideal de bienestar que provoca un resultado contradictorio con los límites de los elementos naturales y con los ideales y/o dinámicas de determinados actores sociales, implica desentrañar algunos conceptos que el Estado colombiano maneja y que influyen en la relación que éste sostiene con la Naturaleza.

Con la finalidad de analizar los discursos estatales, reflejados en las políticas públicas ambientales de Colombia desde el año 2010 hasta el presente -los cuales generan determinadas dinámicas en la relación entre la sociedad y la Naturaleza, además de ser una base investigativa de relevancia para las Ciencias Sociales por los conflictos socioambientales que éstos ocasionan-, la presente investigación partirá desde la coyuntura del extractivismo, aludiendo a la explotación minera a gran escala en contextos rurales como el páramo de Santurbán.

Ahora bien, en relación a la construcción de la pregunta problema, esta fase se elaboró a partir de una serie de preguntas realizadas (*ver anexo No. 23, Matriz PP*) que generaron cuestionamientos sobre la corriente epistemológica que fundamentaba el proyecto de investigación, ya que era una base importante en la comprensión sobre el tema de estudio, pero también para que la creación de la pregunta problema tuviera un sustento

epistemológico claro. Dicha creación se hizo mediante el planteamiento de preguntas que se caracterizaban por ubicarse entre los siguientes enfoques teóricos de investigación: empírico-analítico, histórico-hermenéutico y crítico-social. Cabe señalar que enmarcar las preguntas en los tres enfoques teóricos se hizo con la intencionalidad de tener coherencia entre los intereses del grupo investigador y la postura epistemológica de la investigación misma.

Hacer el ejercicio con los demás enfoques teóricos permitió no caer en contradicciones epistemológicas en la elaboración de la pregunta problema. Como resultado, el enfoque crítico-social se correspondió con las preguntas más sustantivas construidas por el equipo de investigación. Así, la pregunta problema de investigación quedó formulada de la siguiente manera:

¿Cómo los discursos del Estado colombiano, sobre la Naturaleza, determinan su relación con la misma y la sociedad, específicamente en contextos rurales del territorio nacional?

## **CAPÍTULO 4: JUSTIFICACIÓN**

La Naturaleza y su relación con la sociedad es un campo de estudio y acción transversal a cualquier disciplina. En el caso del trabajo social, se dice que ésta es una disciplina que se encarga de abordar los fenómenos y problemáticas sociales que suscitan de la cuestión social (Franceschi Barraza, 2014), es decir, de las manifestaciones producto de las contradicciones del sistema histórico contemporáneo; sin embargo, en la comprensión amplia y compleja de la cuestión social, emergen nuevos campos de acción como la Naturaleza, ya que ésta es una actora victimizada más de las contradicciones del sistema.

En este nuevo campo de acción, donde se problematiza la relación entre el sistema capitalista y la Naturaleza, resulta pertinente realizar un trabajo de investigación documental, ya que permite, en primera medida, ejercer la profesión desde el compromiso

científico, con el cual es posible contribuir, desde un posicionamiento político, a la comprensión compleja de la realidad y al vislumbramiento de ejes de acción con base en fundamentos analíticos concienzudos. En segunda medida y con mayor especificidad, porque investigar documentalmente esta relación mencionada y sus manifestaciones en el contexto colombiano posibilita prestar atención sobre un componente importante de la cuestión social en el contexto nacional, tal vez sobre la raíz misma del conflicto que lo caracteriza.

El campo de saber del Trabajo Social requiere análisis crítico de la relación Naturaleza-capitalismo, estableciendo referencias situadas que permitan observar las relaciones que constituyen los ejercicios de explotación tales como la megaminería. Dicho análisis crítico posibilitaría pensar formas alternativas y complejas de un Trabajo Social que considere como uno de los ejes centrales de estudio el campo socioambiental para la reflexión-acción de la profesión.

Investigar el tipo de relación que tiene el Estado colombiano con la Naturaleza y las comunidades locales en los proyectos de explotación minera a gran escala, implica leer la realidad que está viviendo el campo colombiano desde un ejercicio analítico que entrelaza los aspectos ambientales, sociales, políticos y económicos. Bajo esta línea, investigar desde el enfoque teórico crítico-social es pertinente en la medida que posibilita reconocer las dinámicas y repercusiones a las que se enfrenta un contexto en disputa bajo las reglas y dinámicas del mundo neoliberal.

Por otro lado, considerando que esta investigación no se enmarca en ninguna sub-línea de la línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático del Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, el presente documento desea contribuir a dicha línea en la posible construcción de una sub-línea que contemple lo socioambiental como campo investigativo y de práctica profesional, en tanto la misma institución señala:

La orientación de los posibles problemas de investigación por sub-líneas no configura un marco rígido y unilateral para su desarrollo, pretenden delimitar énfasis, relaciones, pero su real concepción dependerá del estado de arte de la construcción de la línea, del criterio de las y los investigadores y de la creatividad e innovación para reconfigurar nuevos problemas e interrelaciones (Mellizo, 2014, pág. 9).

Ya que la línea de investigación e intervención de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático de la Universidad de La Salle se sustenta “en el acuerdo histórico que la AIETS y la FITS 2004 han hecho sobre la definición internacional de trabajo social, más acorde con el mundo globalizado y los problemas y necesidades propias del siglo XXI” (Mellizo, 2014, pág. 6); resulta pertinente abordar nuevas comprensiones y praxis de los derechos humanos y la democracia en el quehacer del trabajo social. En este sentido, considerar a la relación Capitalismo-Naturaleza como objeto de estudio, más precisamente a los discursos que sostienen la relación entre el Estado colombiano y la Naturaleza, amplía el espectro epistemológico, discursivo y de actuación de la profesión; conjuntamente, visibiliza formas de análisis y proyecta acciones que coadyuvarían a la defensa de derechos, en tanto existe una concordancia entre la efectividad de derechos humanos y derechos de la Naturaleza.

Así mismo, ya que la línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático de la Universidad de La Salle “se ha venido sustentando, en primer lugar, en la lectura crítica de la realidad latinoamericana, nacional y local, con crecientes niveles de desigualdad social, afrontando una guerra que de manera sistemática, degradada y prolongada acude a diversos tipos de violencia y barbarie que involucran y afectan a la sociedad civil” (Mellizo, 2014, pág. 6); el grupo investigador pretende superar la descripción de un aspecto de la realidad social, para realizar un análisis crítico de la relación de carácter depredador que sostiene el Estado colombiano con la Naturaleza y las comunidades en los proyectos de megaminería, en aras de visibilizar de modo crítico la posibilidad de una construcción de sociedad más justa y armoniosa con la Naturaleza y con los distintos actores que la conforman.

Así mismo, en concordancia con el objetivo general de esta línea de investigación e intervención, el cual pretende “contribuir con la construcción de conocimiento y de prácticas profesionales y ciudadanas en torno a los derechos humanos y la democracia, como aporte a la promoción de la justicia social, la construcción de la paz, la cultura política y la reparación integral, mediante procesos de docencia, investigación y proyección social (Mellizo, 2014, pág. 8); el grupo decidió trabajar un tema que complejice dicha promoción de la justicia social, mediante la mencionada relación entre el Estado



colombiano, la Naturaleza y las comunidades afectadas, en términos de derechos, por los proyectos de explotación minera a gran escala y otras formas de producción.

El mismo CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz insta como necesidad estudiar la minería en Colombia y sus afectaciones en términos de derechos humanos. En su Informe Especial Minería, Conflictos Sociales y Violación de Derechos Humanos en Colombia, recomienda a la sociedad civil “investigar y hacer análisis de conflictos sociales y de violación de DDHH y DIH, en relación con los procesos mineros y energéticos y las posibilidades de las comunidades que luchan por el desarrollo de una vida integral” (CINEP/PPP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, 2012, pág. 7).

Según la trabajadora social Franceschi, en las últimas décadas, organizaciones sociales comunitarias han luchado contra grandes proyectos o contra políticas que atentan contra el ambiente y sus derechos (económicos y sociales) como ciudadanos, por ende, contra sus condiciones de vida; reclamando al Estado un buen manejo de la política económico-ambiental (Franceschi Barraza, 2014).

Cabe destacar que en el contexto rural colombiano, las emergentes manifestaciones socio-políticas, concernientes a la relación Capitalismo-Naturaleza, por parte de la población, hacen pertinente una propuesta de trabajo de investigación documental que visibilice la postura del Estado, la cual se expresa en los discursos que fundamentan las políticas públicas ambientales y da origen a la contradicción socio-política que suscita de la ejecución de las mismas. Así, analizar la postura del Estado colombiano requiere leer sus discursos sobre la Naturaleza, en los que la academia en general y el Trabajo Social en particular debieran prestar atención.

Por último, en relación a la formación profesional, esta propuesta de trabajo procura que en esta etapa del proceso, ad portas de recibir el título de trabajadoras y trabajadores sociales, se proporcione a la disciplina un horizonte que materialice una perspectiva amplia y compleja de la cuestión social, una apuesta política en torno a la Naturaleza como forma de concebir y practicar el Trabajo Social colombiano y latinoamericano.

## CAPÍTULO 5: OBJETIVOS

**Objetivo General:** Analizar la relación entre el Estado colombiano y la Naturaleza en contextos rurales, mediante una lectura de los discursos manifiestos en lineamientos y políticas públicas, y en documentos contrahegemónicos en torno al fenómeno de la megaminería.

### **Objetivos Específicos:**

- Identificar la relación del Estado colombiano con la Naturaleza, a la luz de los significados que éste atribuye a las categorías de Naturaleza, desarrollo y derechos en lineamientos y políticas públicas.
- Develar los sentidos latentes en la relación del Estado colombiano con la Naturaleza, y los contrasentidos que estos ocasionan en actores contrahegemónicos.
- Problematicar la relación entre el Estado colombiano y la Naturaleza a partir de las implicaciones expresadas en políticas públicas y en discursos contrahegemónicos.

## CAPÍTULO 6: CONCEPTOS ACLARATORIOS

### Naturaleza:

El término Naturaleza ha tenido siempre un uso complejo. Esta complejidad deriva de la disputa misma que la caracteriza, ya que se puede concebir como un campo de batalla, por un lado, por parte de quienes quieren “acceder, usar, apropiar o depredar bienes naturales y ambientales” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 161) y por el otro, por parte de

ideologías y también de culturas, las cuales defienden y fundamentan posiciones según su interés (Mesa Cuadros, 2010).

En palabras de Arturo Escobar, el término Naturaleza tiene distintas “acepciones de acuerdo con los intereses políticos y económicos de distintos actores. Y se puede entender la Naturaleza como espacio vital vivido y transformado por las culturas locales, y la Naturaleza como mercancía, y la Naturaleza como objeto de transformación tecnológica” (Escobar, 1999, pág. 14).

#### *Naturaleza y sociedad:*

Según Karl Marx, el ser humano sostiene una relación dialéctica con la Naturaleza, que con la llegada del Capitalismo pasó de ser una relación en donde el hombre se concebía como parte de la misma -es decir que la Naturaleza no era algo ajeno al ser humano, sino que ambos conformaban una unidad- a ser luego una relación que cambia según las lógicas de producción y reproducción, es decir, que se distancia de ella para verla como proveedora de recursos a explotar. Así, la Naturaleza se transforma a la medida de las necesidades del sistema político, económico, social y cultural capitalista, el cual sobrepasa la relación de autosuficiencia que el modo de vida tradicional había definido, y amplía, por ende, la gama de necesidades, la diversidad de producción y la explotación de la Naturaleza (Marx & Engels, 2002).

En últimas, la Naturaleza ha tenido un uso amplio y diverso en términos de política, y quienes han jugado el rol de adecuar el concepto de ella y moldear las relaciones humanas con la misma han sido actores como los “liberales, socialistas y ambientalistas y ecologistas” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 165). Mesa sintetiza este proceso de la siguiente manera:

Si, por una parte, los ambientalismos y ecologismos más ligados al ecologismo profundo se han ocupado generalmente de explicitar la interrelación entre los diferentes procesos naturales y vitales, pero desconociendo, minusvalorando o eliminando el papel del ser humano en ellos, por otra, los ambientalismos renovados parten de comprender a los seres humanos y las culturas en contextos o ambientes concretos que influyen, cambian, transforman, trocan o intercambian bienes naturales y

ambientales, pero también tienen la capacidad de transformar y emanciparse de relaciones depredadoras y contaminadoras inadecuadas de una posible vida futura, no sólo humana sino de cualquier especie, pues como humanos estamos en la capacidad de destruirlo todo (tan rápido y tan lentamente como queramos) o de potenciar la vida, si así lo queremos, también y no sólo como utopía (Mesa Cuadros, 2010, págs. 165-166).

Con todo, asumiendo el reconocimiento de la complejidad, del recorrido histórico y de la disputa política, el concepto de Naturaleza aquí utilizado es el que está en estrecha relación con las dinámicas sociales, el que no es ajeno a las decisiones en torno a las formas de producción y reproducción social, política, económica y cultural. Más específicamente, el concepto de Naturaleza que el equipo investigador considera pertinente es el que plantea Karl Marx, ya que, en primer lugar, da cuenta de su transformación tanto teórica como material según los intereses del Capitalismo a lo largo de la historia; y en segundo lugar, porque el análisis que desarrolla el presente trabajo se realiza bajo la comprensión de las dinámicas que surgen de la relación entre el sistema capitalista en Colombia y la Naturaleza.

#### *Medio ambiente:*

Según Escobar, la industrialización de los llamados recursos naturales da inicio a lo conocido como medio ambiente (Escobar, 2007). Para entender cómo este concepto se ha inscrito en los discursos del Estado, es necesario remitirse al desarrollo sostenible, debido a que el crecimiento económico es el eje central de este tipo de desarrollo, supeditando a la Naturaleza. Así, el concepto de medio ambiente fundamenta la modificación de la comprensión de la Naturaleza para ejercer control sobre ella. Para comprender este proceso de modificación es importante considerar cómo “el medio ambiente incluye una visión de la naturaleza acorde con el sistema urbano industrial. Todo lo importante para el funcionamiento de este sistema se convierte en parte del medio ambiente” (Escobar, 2007, pág. 329). Esto quiere decir que la Naturaleza, bajo el concepto de medio ambiente, es concebida como un objeto al servicio del capital, que reproduce el sistema capitalista

colonizador del denominado tercer mundo y, a su vez, aumenta o genera conflictos sociales a causa de adquirir poder sobre la tierra.

Otro rasgo de interés, según Escobar, para comprender el cambio de concepto de Naturaleza a medio ambiente es la conquista semiótica estructural y de carácter transversal que realiza el sistema capitalista sobre conceptos inherentes al mismo, como por ejemplo, trabajo y producción, pero también sobre conceptos que complejizan aún más el análisis de la relación sociedad-Naturaleza, tales como Naturaleza y biodiversidad. Estas conquistas semióticas se configuran bajo la reproducción del código del sistema socio-político-económico y cultural capitalista. A decir:

Esta nueva capitalización de la naturaleza no descansa sólo sobre la conquista semiótica de territorios (en términos de reservas de biodiversidad y nuevos esquemas de control y propiedad de la tierra) y comunidades (como ‘guardianes’ de la naturaleza); también exige la conquista semiótica de los conocimientos locales en la medida en que ‘salvar la naturaleza’ exige la valoración de los saberes locales sobre el sostenimiento de la naturaleza. La biología moderna empieza a descubrir que los sistemas locales de conocimientos son complementos útiles (Escobar, 2007, pág. 342).

Finalmente, se puede añadir que se ha empleado el concepto de medio ambiente para fundamentar la extracción de los elementos naturales considerados como recursos, minimizando discursivamente los riesgos ambientales, sociales, políticos, económicos y culturales producto de la explotación de la Naturaleza.

### Desarrollo sostenible:

Según Enrique Leff (Leff, 2010), el discurso del desarrollo sostenible se fue legitimando y difundiendo desde la década de los noventa, específicamente, a partir de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo y su documento del año 1988, llamado Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe Brundtland, el cual “se centra menos en las consecuencias negativas del crecimiento económico sobre el ambiente que en los efectos de la degradación ambiental sobre el crecimiento y el potencial para el

crecimiento” (Escobar, 2007, pág. 328), y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en el año 1992. Este contexto es lo que Arturo Escobar llama como un proceso “de problematización de la supervivencia global” (Escobar, 2007, pág. 327).

Sin embargo, cabe resaltar que desde ese momento el concepto de desarrollo sostenible se ha visto inscrito en una ambigüedad que, en palabras de Leff, atiende a un proceso de vulgarización que se ha materializado en el discurso oficial y el lenguaje común (Leff, 2010). Dicha ambigüedad se refleja en la ausencia de un “sentido teórico y praxeológico capaz de unificar las vías de transición hacia la sustentabilidad” (Leff, 2010, pág. 3), es decir, en las contradicciones y diferencia de sentidos e intereses sobre la Naturaleza que suscitan del mismo término.

Arturo Escobar plantea que el desarrollo sostenible no aparta la supremacía del crecimiento económico sobre el daño ambiental y busca una adquisición de recursos que permitan una mayor sostenibilidad al momento de su extracción; esto por medio de procesos administrativos que generan cambios en los valores y las instituciones respecto a la relación sociedad-Naturaleza. Según este autor, “la clave en este discurso es qué clase de manipulaciones nuevas podemos inventar para sacar el máximo de los ‘recursos’ de la Tierra” (Escobar, 2007, pág. 325), legitimando socialmente el desarrollo sostenible a pesar de los daños producidos a la Naturaleza y a la vida humana en general; es decir:

El discurso de la ‘sostenibilidad’ lleva así a propugnar por un crecimiento sostenido, sin una justificación rigurosa sobre la capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales (de sustentabilidad, equidad, justicia y democracia) de este proceso. (...) el discurso de la sostenibilidad ha llegado a afirmar el propósito y la posibilidad de lograr un crecimiento económico sostenible a través de los mecanismos del mercado, sin justificar su capacidad de internalizar las condiciones de sustentabilidad ecológica ni de resolver la traducción de los diversos procesos que constituyen el ambiente (tiempos ecológicos de productividad y regeneración de la naturaleza, valores culturales y humanos, criterios cualitativos que definen la calidad de vida) en valores y mediciones del mercado (Leff, 2010, pág. 3).

## CAPÍTULO 7: POSICIÓN POLÍTICO-TEÓRICA

### Marxismo ecológico:

En concordancia con lo expuesto en el apartado anterior de conceptos aclaratorios, el grupo investigador encuentra pertinente posicionarse en el pensamiento-horizonte marxista ecológico debido a que este profundiza en la relación sociedad-Naturaleza desde un complejo analítico que incorpora de manera interdependiente el componente social, el componente económico y el componente político.

Asumir una posición marxista ecológica implica, en primera instancia, comprender cómo el Capitalismo ha constituido una relación ser humano-Naturaleza a partir de la concepción de esta última como fuente de recursos y, siguiendo a Sabbatella y Tagliavini, de la separación del hombre de su “cuerpo inorgánico”, es decir, de la Naturaleza.

La unidad del hombre con la naturaleza no precisa explicación sino su separación. Esa separación es de carácter histórico y es la base sobre la que se asienta la relación capital-trabajo. El trabajador es separado de su “cuerpo inorgánico” al mismo tiempo que el producto de su trabajo se convierte en mercancía apropiada por el capitalista (Sabbatella & Tagliavini, 2013, pág. 5).

En segunda instancia, cabe mencionar que la relación a la que se alude en el párrafo anterior, apropia una concepción de la Naturaleza como un objeto sobre el cual se ejerce un control por una parte de la sociedad, es decir, por quienes manejan los medios de producción. Es por esta razón que “la gran industria y la gran agricultura explotada industrialmente actúan en unidad, una devastando la fuerza de trabajo y otra degradando la fuerza natural de la tierra” (Sabbatella & Tagliavini, 2013, pág. 5). En consecuencia, la Naturaleza pierde su connotación ancestral y asume un rol en la sociedad capitalista como una fuente fundamental para la satisfacción de necesidades que emergen de la relación mercado-consumo.

Respecto a la relación ser humano-Naturaleza en mención, Sabbatella y Tagliavini consideran que la fuerza de trabajo del hombre sobre el suelo puede representar tanto un impacto negativo como positivo sobre el mismo. Tales impactos han generado cambios a

nivel social, político y económico. Respecto a los impactos negativos<sup>2</sup>, dados bajo la adopción de un modelo de producción y extracción con lógicas capitalistas, estos repercuten en lo que Marx considera la separación campo-ciudad caracterizada por “la gran propiedad, el despoblamiento rural y el hacinamiento urbano” (Sabbatella & Tagliavini, 2013, pág. 5).

En congruencia con lo planteado en este apartado de marxismo ecológico y como respuesta alternativa a la crisis ambiental, es pertinente traer a colación la propuesta del ecosocialismo de Löwy, entendida como “una alternativa civilizatoria radical, fundada en los argumentos básicos del movimiento ecológico, y en la crítica marxista de la economía política. Opone al progreso destructivo capitalista (Marx) una política económica basada en criterios no monetarios y extraeconómicos: las necesidades sociales y el equilibrio ecológico” (Löwy, 2013, pág. 55). Tales criterios, siguiendo la lógica del autor, son también una crítica al auge de la ola verde impulsada por el capitalismo que no contempla los límites de la Naturaleza (Löwy, 2013).

De lo expuesto, es posible decir que la posición marxista ecológica implica hacer una lectura analítica de la actual crisis ambiental a la luz de la estructura de producción capitalista imperante. En palabras de Sabbatella y Tagliavini “es necesario recuperar la fortaleza de la ley del valor, del fetichismo de la mercancía y del trabajo alienado. Son los elementos fundamentales para la crítica de la economía-política-ecológica en la edificación del aparato conceptual del ME (*marxismo ecológico*)” (Sabbatella & Tagliavini, 2013, pág. 11).

Finalmente, el equipo investigador encuentra afinidad con lo planteado por los autores recientemente mencionados en tanto que, el fin último de retomar los postulados marxistas en relación con la Naturaleza se fundamenta en el interés de asumir el campo socioambiental en la construcción de una posición crítica de la economía política que permita comprender de manera compleja dicha crisis.

---

<sup>2</sup> Se hace énfasis en los impactos negativos con el fin de contar con un marco teórico que aporte al presente interés investigativo, sin intención de desconocer los impactos positivos.



### *Estado ambiental de derecho:*

Por último, el grupo investigador considera ciertos aspectos del concepto de Estado ambiental de derecho, promovido por el colombiano Gregorio Mesa Cuadros, como una apuesta política, de carácter formal y loable, debido a que el actual Estado social de derecho establecido en Colombia no es suficiente para la actual plataforma ambiental, social, política y económica que vive el país. En palabras de Mesa Cuadros, esta insuficiencia del tipo de Estado vigente responde a lo siguiente:

(...) no es dable quedarse en los primeros momentos de los derechos, los derechos de primera y segunda generación (como derechos de autonomía y libertad en primer lugar, y derechos sociales, económicos y culturales, posteriormente) sino avanzar en la construcción de un genuino ‘Estado ambiental y democrático de derecho’, no sólo para que hayan nuevos derechos, sino porque esos derechos son necesarios en la realización auténtica de los demás (Mesa Cuadros, 2010, pág. 367).

Estas consideraciones fundamentan el hecho de que a pesar de que un marco jurídico como la Constitución colombiana de 1991 contenga una gama de derechos colectivos y ambientales, no significa que logre dar garantía y protección efectiva a los mismos, ya que “las múltiples evidencias de su violación sistemática por el Estado y los particulares, especialmente las empresas nacionales y transnacionales, con el apoyo o presión de gobiernos extranjeros” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 378) demuestran lo contrario.

Asimismo, el equipo autor del presente proyecto, al igual que Mesa Cuadros, cree conveniente concebir un cambio en la jerarquía actual frente a los derechos fundamentales y sus supeditados. Esto, porque al no considerar los derechos ambientales, es decir, los derechos de la Naturaleza, como derechos fundamentales y posibles ejes de garantía y gozo de los demás derechos, no se cumple la efectividad de los mismos. Bajo esta lógica, el actual Estado social de derecho sería un Estado fallido, en el sentido no sólo de que es insuficiente, sino además contradictorio a sus propias pregonas.

Un sistema jurídico podrá ser muy avanzado en la incorporación de nuevos derechos, pero muy retrasado en cuanto a las garantías y protección efectiva de los mismos (un

ejemplo podría ser el caso colombiano: su Constitución Política de 1991 incorporó una serie de derechos denominados de tercera generación -especialmente los colectivos y ambientales- pero las múltiples evidencias de su violación sistemática por el Estado y los particulares, especialmente las empresas nacionales y transnacionales con el apoyo o presión de gobiernos extranjeros, ponen en discusión la existencia de un ‘Estado ambiental de derecho’ (Mesa Cuadros, 2010, pág. 378).

Antes de seguir adelante conviene saber que los derechos humanos no son derechos inherentes al ser humano per sé, si no que según Gregorio Mesa, son construcciones culturales en donde “tanto las culturas como los pueblos y los individuos nos autoimponemos responsabilidades con respecto a los demás, con nosotros mismos y con el ambiente o la naturaleza (tierra o biósfera), quienes nos orientan e indican claras concepciones para el reconocimiento, la redistribución, el respeto y la reciprocidad” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 368). Igualmente conviene tener claridad de que “no todo ‘Estado de derecho’ es o puede ser ‘Estado ambiental de derecho’” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 372).

El concepto de Estado ambiental de derecho que propone Gregorio Mesa Cuadros recoge una serie de responsabilidades, deberes y obligaciones producto del recorrido histórico de variados actores, tales movimientos sociales, comunidades, colectivos, entre otros, frente a la lucha contra la destrucción, depredación e injusto trato y relación con la Naturaleza que protagonizan las clases privilegiadas de la sociedad. Se trata pues de una apuesta política que pretende superar la noción y el tratamiento de las problemáticas ambientales para complejizarlas y convertirlas en un problema sociopolítico que plantee “cambios sustanciales en las maneras de acceder, apropiarse, producir, consumir, intercambiar y desechar bienes naturales y ambientales” (Mesa Cuadros, 2010, págs. 370-371).

Todo lo dicho hasta ahora se explica, según el autor aquí trabajado, por la existencia de unos límites naturales y sociales tanto para el crecimiento económico como para las acciones humanas; por esta razón, no se deben modificar los ecosistemas relevantes para el equilibrio ambiental y la vida natural y social. Así, tal como Mesa Cuadros (2010) retoma a Serrano Moreno, el equipo investigador del presente escrito comparte la afirmación de que: “hasta la mejor democracia directa carecerá de legitimidad ecológico-ambiental si las

decisiones de la mayoría afectan las condiciones de la vida que no se pueden tocar” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 380).

## **CAPÍTULO 8: REFERENTE SITUADO DE LA PROBLEMÁTICA**

La investigación considera pertinente hacer alusión a un territorio de referencia en el que se desarrolle minería a gran escala, ya que posibilita llevar las reflexiones teóricas a un escenario tangible, sin dejar cerrada la posibilidad de llevar dichos análisis a otros escenarios socioambientales con características similares a las aquí abordadas. Así, se decidió tomar al páramo de Santurbán como referente por ser un territorio álgido -en cuanto conflictividad socioambiental-, y sobre todo, porque éste representa para el Estado un eslogan de protección ambiental por su delimitación, mediante la resolución n° 2090 del año 2014.

Según el informe “Minería en Colombia: ¿a qué precio?”, para el año 2011 “el 40% del territorio colombiano estaba concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos” (PBI Colombia, 2011). Uno de los tantos territorios en donde se llevan a cabo proyectos de extracción por los actores recién mencionados es el páramo de Santurbán. Dicho páramo tiene una extensión de 142,610 hectáreas aproximadamente y se encuentra ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander (Santurbán-FAOS, 2015).

Es relevante acotar que los páramos son ecosistemas con propiedades únicas que propician vida a una serie de seres vivos; específicamente, el páramo de Santurbán, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, posee una diversidad biológica que se ve reflejada en la existencia de 293 especies de fauna, 457 variedades de plantas, 42 especies de aves y 39 especies de mamíferos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). Además, cabe mencionar que “Colombia tiene el 49 % de los páramos del mundo” (Greenpeace, 2013, pág. 6).

Otra de las varias propiedades de los ecosistemas de páramos, es la capacidad hídrica, dado que un páramo es capaz de “interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos” (Ministerio del Medio Ambiente, 2001). Según el Observatorio Nacional de Paz, el páramo de Santurbán cuenta con un “potencial hídrico para proveer agua a 10 millones de personas” (Observatorio Nacional de Paz, 2010, pág. 2). Esto, entre otras razones, convierte al páramo de Santurbán -y a los demás páramos- en territorios estratégicos desde el punto de vista ambiental, social y también económico; y es por razones como estas que territorios como los páramos han sido foco de interés tanto para el Estado como para actores internos y externos, tales empresas nacionales y multinacionales como Greystar y AngloGold Ashanti (AGA).

Ahora bien, vale la pena indicar que la megaminería determina ciertas dinámicas sociales en territorios como éstos; sin embargo, éstas varían según minería artesanal o minería industrial. Como menciona Emerson Buitrago, la actividad minera a pequeña escala difiere de las multinacionales tanto en el nivel de explotación ambiental como en las relaciones sociales implicadas (Buitrago Hernández, 2015). En cuanto a las relaciones sociales, éstas están directamente relacionadas con el suelo y el subsuelo, estableciendo así “una relación muy estrecha entre el agua, el territorio y la tierra para la mayoría de los pobladores de estas zonas. Los usos del suelo, su economía local y su vida en general están ligados a este tipo de ecosistema. Los páramos representan la vida y los intereses de muchos” (Observatorio Nacional de Paz, pág. 2).

## **CAPÍTULO 9: METODOLOGÍA**

El presente trabajo se realizó bajo la modalidad de investigación documental, entendida ésta como un ejercicio que requiere una búsqueda, una recuperación, un análisis y una interpretación de fuentes documentales de diversos tipos que puede generar, según Nidia Suárez (Suárez, 2007):

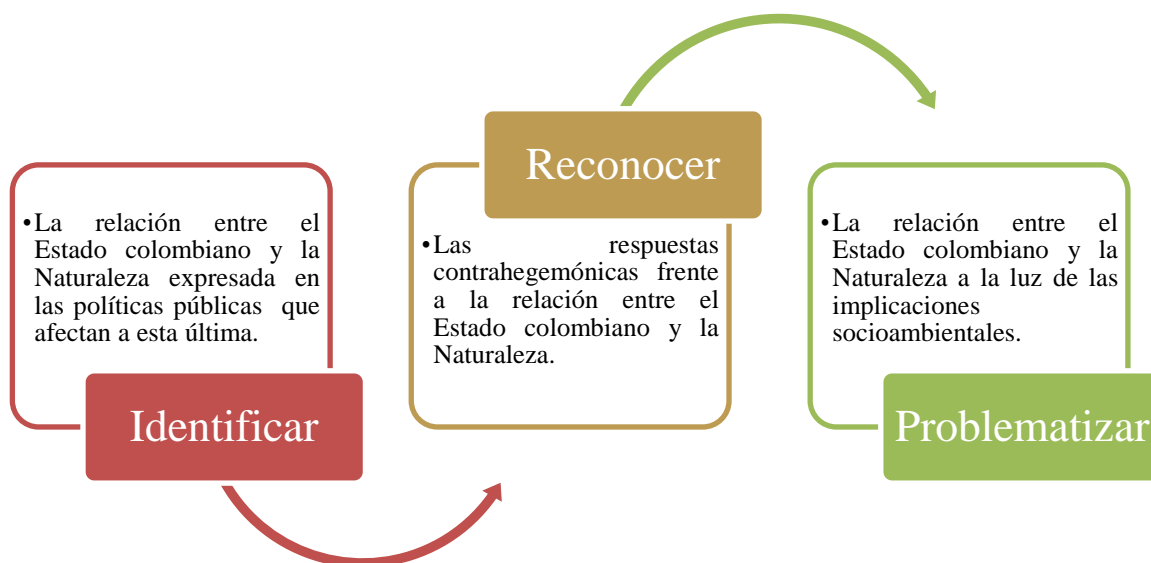
Valiosos aportes teóricos y presentar conclusiones científicas en la medida en que el proceso lleve al esclarecimiento de hechos que, aunque no pasen por la verificación

experimental, pudieran ser objeto de un riguroso análisis que llegue más allá del ejercicio intelectual de recopilar y ordenar datos. Puede abordar redefiniciones importantes que sirvan de base a nuevas propuestas de trabajo (Suárez, 2007, pág. 18).

Asimismo, el enfoque de investigación es el crítico social, ya que, según Rosa María Cifuentes, este enfoque se sustenta en el paradigma marxista desde el cual se comprende que “todo se halla en relación: la Naturaleza y la sociedad como un todo en interacción” (Cifuentes Gil, 2014, pág. 32). La misma autora señala a su vez que este enfoque posibilita conjugar tanto el proceso comprensivo como el explicativo para desentrañar contradicciones implícitas a nivel ideológico en la estructura social y finalmente proponer “procesos de reflexión, problematización, empoderamiento de la palabra, la escritura y la transformación” (Cifuentes Gil, 2014, pág. 32). En este punto cabe precisar que la presente investigación enfatiza en proponer elementos de reflexión y problematización en torno a la relación que sostiene el Estado colombiano con la Naturaleza en contextos rurales donde acontecen procesos de explotación minera a gran escala.

Lo anteriormente expuesto requiere un recorrido metodológico acorde a la posición político-teórica del presente análisis, es decir, un paso a paso congruente y en diálogo con los dos ejes teóricos que enmarcan esta investigación: marxismo ecológico y Estado ambiental de derecho. De estos dos ejes teóricos surgieron dos categorías (Naturaleza y Derechos), que se acompañó de una tercera categoría (Desarrollo), ya que responde al modelo de desarrollo que el Estado colombiano ha adoptado. Estas categorías posibilitaron, de forma sucinta, el siguiente proceso:

*Esquema 1. Bosquejo de recorrido metodológico:*



Para realizar lo expuesto en el esquema anterior, el grupo investigador recurrió a un determinado aspecto de la metodología de Roland Barthes utilizada en su artículo “El azul está de moda este año” (Barthes, 1967), comprendiendo dos cosas; primero, que el propio Barthes no posee un cuerpo metodológico cerrado en estricto rigor, ya que como indican Alonso y Fernández, “no se puede hablar de la utilización de una metodología fija de investigación (*en este autor*)” (Alonso & Fernández Rodríguez, 2006, pág. 14); y segundo, que tanto esta metodología señalada como otras metodologías y/o teorías pueden no responder en un momento determinado al problema de investigación en su totalidad y, por ende, no satisfacer el desarrollo de algunos objetivos propuestos. En el caso de esta investigación Barthes no brindó los recursos metodológicos necesarios para dar alcance en su totalidad al segundo objetivo específico y para desarrollar el tercer y último objetivo, como se explicará más adelante.

Bajo esta lógica, el aspecto retomado de Barthes que permitió construir una metodología de análisis para lograr dar respuesta al problema de investigación, es decir, para encontrar los sentidos latentes en los discursos del Estado que sustentan su relación con la Naturaleza, específicamente en lineamientos y políticas públicas concernientes a lo ambiental hace referencia a la relación de dos elementos lingüísticos: significante y

significado, cuya unión compone una significación, la cual permite dar cuenta de los sentidos que se esconden en la relación aquí en cuestión. Así, para el caso de esta investigación, los significantes han hecho alusión a las categorías analíticas ya mencionadas anteriormente, los significados responden a los contenidos que el Estado les ha asignado a los significantes o categorías, y la significación hace referencia a los sentidos resultantes del cruce entre los significantes y sus significados atribuidos por el Estado en los documentos de lineamientos y políticas públicas dirigidas a la actividad minera; es decir, la significación hace referencia a la razón de ser que para el Estado colombiano tiene establecer ciertos vínculos entre estos significantes estudiados y sus significados asignados.

Este aspecto metodológico de Roland Barthes contribuyó a esta investigación en la medida que permitió identificar y problematizar la relación del Estado colombiano con la Naturaleza a la luz de su significación, es decir, de sus sentidos. Sin embargo, dicho aspecto metodológico se complementó con el fin de alcanzar los objetivos de esta investigación debido a que, como señalan Alonso y Fernández, Barthes no contempla el seguimiento de los conflictos de sentido que se dan en el campo de disputa de las prácticas discursivas (Alonso & Fernández Rodríguez, 2006), y tampoco permite llevar el análisis al ámbito de las implicaciones socioambientales que resultan de la relación aquí estudiada, aunque si permitió la identificación de la implicación discursiva de la cual se desprende dichas implicaciones socioambientales.

Fue por esto que para esta investigación se hizo necesario confrontar a los sentidos detrás de la relación que sostiene el Estado colombiano con la Naturaleza a una serie de contrasentidos -sentidos contrarios a los hegemónicos- que fue posible identificar gracias a los discursos de determinados actores contrahegemónicos<sup>3</sup> que convergen con el marxismo ecológico al denunciar que el Estado y las multinacionales que desarrollan megaminería -u otras actividades de carácter depredador- “transforma(n) la naturaleza en una naturaleza hecha por el hombre, ‘humanizada’, que al principio de cada proceso productivo es utilizada y que, terminado el consumo del producto, recibe los desperdicios producidos”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Actores colectivos que desarrollan proyectos de relación con la Naturaleza de carácter alternativo.

<sup>4</sup> Naturaleza humanizada hace referencia a la transformación constante de la misma, producto de la acción del ser humano en el proceso de acumulación capitalista (Alvater, 2007) .

(Alvater, 2007, pág. 347). En cuanto a las implicaciones socioambientales, se acudió nuevamente a los discursos contrahegemónicos con el fin de profundizar en el análisis de la relación mencionada, ya que dicho discurso nace como contra-respuesta de la realidad socioambiental influenciada por la actividad minera a gran escala en territorios rurales.

Dado lo anterior, el paso a paso para poder vislumbrar la relación entre el Estado colombiano y la Naturaleza a la luz de la megaminería en contextos rurales del territorio nacional- y para poder dar alcance a los objetivos de la presente investigación- se realizó de la siguiente manera:

Para el primer objetivo se identificaron los significados que el Estado establece a los significantes Naturaleza, derechos y desarrollo mediante un formato de ficha temática (*ver anexo No. 24, Formato Inst-E*); para el segundo objetivo se analizaron los sentidos del Estado con base en la información recogida en el instrumento mencionado, lo que se acompañó de un análisis de los contrasentidos que exponen determinados actores contrahegemónicos en documentos concernientes a la megaminería en Colombia, mediante un segundo instrumento (*ver anexo No. 25, Formato Inst-CH*) que permitió extraer tanto las convergencias como las divergencias respecto a la relación que sostiene el Estado colombiano con la Naturaleza en territorios rurales.

*Esquema 2. Esquema de significación basado en Roland Barthes:*



El desarrollo de estos sentidos y contrasentidos se dio mediante la construcción de una serie de categorías relacionales que se nutrieron de la información obtenida en los documentos tanto del Estado como de los contrahegemónicos; a su vez, el análisis de dicha información llevó a que se construyera un apartado -no contemplado previamente- que



permitió exponer los elementos convergentes entre la postura hegemónica y la contrahegemónica.

Por otro lado, para dar respuesta al tercer objetivo se consideraron los dos instrumentos ya mencionados con el fin de determinar los derechos vulnerados más notables en los discursos hegemónicos y contrahegemónicos; hecha esta determinación se empleó un tercer instrumento (*ver anexo No. 26, Formato Inst-Imp*) que permitiera clasificar la información según los derechos definidos.

Para todo lo anterior, fue necesario construir una unidad de análisis (*ver anexo No. 27, UDA*) mediante una selección de documentos que tuvo en cuenta los siguientes criterios: delimitación espacio-temporalidad, implicaciones inferidas o evidenciadas, y nivel de impacto. Respecto al criterio de espacio-temporalidad se dirá que éste refiere sólo al territorio nacional, específicamente a los documentos que hacen referencia a territorios rurales, y realizados en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016<sup>5</sup>, ya que a partir del año 2010, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el gobierno nacional expresó públicamente la necesidad de que el Estado asuma la actividad minero-energética como un pilar para el desarrollo del país. En cuanto al criterio de implicaciones inferidas o evidenciadas, los documentos seleccionados fueron escogidos según su abordaje respecto a las consecuencias de la relación entre el Estado colombiano con la Naturaleza, a la luz de la actividad minero-energética en territorios rurales. En relación al criterio de nivel de impacto, se tomaron en cuenta los documentos que tratan de las implicaciones ya dichas a nivel local -para el contexto referencial de la megaminería en el páramo de Santurbán-, y también, a nivel nacional.

---

<sup>5</sup> Se contemplan también documentos de base realizados fuera de este periodo, tales como la Constitución Política de 1991, el Código de Minas de 2002 y el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2006-2019.

## **CAPÍTULO 10: SIGNIFICADOS CONSTRUCTORES DE LA REALIDAD SOCIOAMBIENTAL**

El análisis de la relación que establece el Estado colombiano con la Naturaleza parte de la identificación de los significados que éste otorga a los significantes Naturaleza, desarrollo y derechos. Es así que en el presente capítulo se desarrollan cada una de las categorías mencionadas a partir de la información recolectada de los diferentes documentos de lineamientos y políticas públicas acá seleccionadas con el fin de reconocer cómo el Estado define estas categorías y de tener un primer acercamiento al discurso hegemónico que éste apropia.

### *Naturaleza:*

La Naturaleza es definida en la Constitución como riquezas naturales o recursos naturales renovables o no renovables, lo cual limita su protección por parte del Estado, ya que no todo lo que compone la Naturaleza entra en estas dos categorías de “riquezas” y “recursos”. A su vez, la Naturaleza es definida como ambiente y espacio de uso común, el cual servirá para provecho de la población, ya que, como dice el artículo 79, “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 28).

También existe una concepción de propiedad, al señalarse en el artículo 58 que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991); sin embargo, más adelante se dice que las propiedades que contribuyan al interés social podrán ser expropiadas, pudiendo perder la función ecológica, antes señalada en la Constitución: “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se hará consultando los intereses de la comunidad y del afectado” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 24).

Similar a la definición anterior, se encuentra la de Naturaleza como componente del territorio nacional, en donde, según el artículo 101, se especifica lo siguiente: “También son

parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 34). Esto denota un significado de Naturaleza sectorizada por partes y funciones particulares.

Siguiendo esta lógica, en el Código de Minas de Colombia, se significa a la Naturaleza como una propiedad proveedora de recursos, es decir, como un elemento de la economía; tales los minerales que se encuentran en los suelos y subsuelos de determinados terrenos y que poseen algún valor económico en el mercado, en donde para tal caso dicho propietario es el Estado colombiano.

Artículo 5°. Propiedad de los Recursos Mineros: Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacientes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos (Congreso de la República, 2001, pág. 2).

A su vez, en el Código de Minas, se significa a la Naturaleza como un objeto expuesto a recibir daños en pro de la explotación de la misma, empero bajo un proceso de recuperación definido por criterios de profesionales afines, como bien lo menciona el artículo 85 del documento aquí en cuestión: “Las obras de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del ecosistema alterado serán ejecutados por profesionales afines a cada una de estas labores” (Congreso de la República, 2001, pág. 13).

El Plan Nacional para el Desarrollo Minero, permite identificar otro elemento sustantivo dentro del significado aquí abordado, el cual hace referencia a la Naturaleza como un objeto de estudio para pasar a ser un objeto de explotación.

Considerando que el conocimiento de las potencialidades geológico-mineras de un país es uno de los factores motivantes de inversión, se espera que los programas de exploración básica (geología, geoquímica y geofísica regionales) a cargo del Estado, proporcionen a los inversionistas una mejor visión de las zonas del país que ameritan

ser exploradas en forma detallada (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006, pág. 79).

Otro aspecto que en este documento alimenta la definición de Naturaleza es el de valorización al mencionar que “la industria minera es un negocio que se basa en agregarle valor económico a los recursos del subsuelo” (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006, pág. 13). Ahora bien, esta valorización es de carácter diferencial, ya que en el caso de la minería “unas piedras valen mucho más que otras” (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006, pág. 38).

Si se examinan ahora los PND correspondientes a los periodos 2010-2014 y 2014-2018, del presidente reelecto Juan Manuel Santos, se puede decir que el significado de Naturaleza contenido en dichos documentos es el mismo expuesto a lo largo de este apartado, es decir, el de recursos naturales y servicios ecosistémicos, bajo la explícita salvedad de que son considerados como la base de la economía, ya que “la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveen beneficios que son la base para el desarrollo de las actividades económicas y sociales del país y la adaptación al cambio climático” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 601). Sin embargo y por esta misma razón, el gobierno aquí en cuestión reconoce que esta noción es un factor de conflicto en el país, lo que incluye una arista de mayor complejidad al significado de Naturaleza.

El rápido crecimiento económico ha generado beneficios para la sociedad y, a su vez, desafíos para la conservación, gestión y aprovechamiento sostenible del capital natural del país. En las últimas décadas, la actividad económica y la presión poblacional han desencadenado transformaciones en el territorio que imponen retos crecientes sobre la biodiversidad y los sistemas que de ésta dependen. El inadecuado uso y ocupación del territorio, el conflicto armado y la degradación de la calidad ambiental han creado condiciones de conflicto, que requieren ser abordados a partir del ordenamiento y la gestión ambiental sectorial, aportando a la construcción de un país más equitativo y en paz (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 583).

Por otro lado, la Naturaleza se significa como objeto de gestión y tecnificación en dos perspectivas, la de prevención de desastres y de impactos ambientales por un lado, y la de industrialización por el otro. En el caso de la prevención de desastres el Plan Nacional de

Desarrollo 2010-2014 señala que “la ola invernal que golpeó al país a mediados del año 2010 (...) ha cambiado el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país, ha transformado la visión de los colombianos sobre las posibles consecuencias del cambio climático, e inevitablemente ha alterado el plan de gobierno de este cuatrienio” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 561). Sobre la prevención de impactos ambientales el texto precitado apunta al “establecimiento de medidas para resarcir a la biodiversidad por los impactos negativos que conllevan a la pérdida de la misma, *(por lo cual)* siguen existiendo retos en la aplicación de la legislación ambiental y en el desempeño de la autoridad ambiental” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 585). Por último, respecto a la perspectiva de industrialización, el significado de Naturaleza como objeto de gestión y tecnificación en territorios rurales hace referencia a que, por ejemplo:

En las próximas décadas se abre una ventana de oportunidad para el sector agropecuario colombiano como resultado del crecimiento esperado de la demanda de alimentos en todo el mundo, especialmente por parte de países altamente poblados y con fuerte dinamismo económico como China e India. El campo colombiano tiene la oportunidad de convertirse en una despensa productiva para el mundo. Para tal fin, el sector agropecuario deberá transformarse en un sector más competitivo, productivo e innovador (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 206).

La Naturaleza como objeto de gestión y tecnificación conduce a otro aspecto que el gobierno aquí en cuestión relaciona al significado de la misma. Este aspecto es el de pasivos ambientales, es decir, que existen espacios de la Naturaleza que se consideran deuda ambiental por haber sido alterados negativamente mediante intervención humana y que continúan causando efectos negativos. Aquí, el gobierno 2010-2014 señalaba en el PND correspondiente a ese periodo que “los pasivos ambientales asociados a la minería legal no han sido cuantificados en términos económicos y sociales, ni internalizados, ni tampoco se cuenta con fuentes de financiación específicas para su recuperación” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 562).

Ahora, si se sitúa el discurso del Estado en el contexto aquí referenciado del páramo de Santurbán y se revisa el Plan de Desarrollo de Santander 2012-2015, se encuentra que el significado de Naturaleza corresponde a una variada geografía que “ofrece una amplia

oferta ambiental y de ecosistemas, alternativas importantes para diversos sectores económicos (...) para la competitividad” (Departamento de Santander, 2016, pág. 35). En esta oferta ambiental se encuentran los recursos no renovables para la “producción de materiales pétreos, minerales industriales; se trata de recursos naturales no renovables que se extraen y tiene poca o nula transformación” (Departamento de Santander, 2016, pág. 107).

Además, en esta variada oferta ambiental y de ecosistemas se encuentra también que entonces la Naturaleza es fragmentada y categorizada. Una de las categorías encontradas es la de ecosistema estratégico, donde se ubica el ecosistema de páramo. Frente a esta categoría, el Estado plantea la noción de un fragmento de la Naturaleza como productora potencial de servicios ambientales tales el agua, el cual se debe proteger justamente por esta capacidad de producción de un elemento vital.

Referente a esta fragmentación y categorización señaladas, en el Plan de Desarrollo de Santander 2016-2019 se identifica también la categoría de Naturaleza como servicio ambiental para el turismo, ya que se considera que la región cuenta con “un sin número de escenarios majestuosos por su variedad climática y topográfica, (...) con un total de 265 atractivos naturales (...) 750.000 hectáreas de parques naturales” (Gobernación de Santander, 2016, pág. 90); razones por las cuales el “departamento cuenta con potencialidades que pueden permitir la atracción de turistas de nicho: arqueología, avistamiento de fauna y flora, compras, destinos patrimonio, golf” (Gobernación de Santander, 2016, pág. 93).

Empero, vale señalar que para la región la Naturaleza significa también patrimonio, el cual entreteje valores culturales. Así lo expresa el mismo documento anteriormente referenciado: “El reto que tenemos los SANTANDEREANOS, es volver a reencontrarnos con lo que representa el origen de nuestra cultura, el paisaje agreste, por las formas de la tierra, por las condiciones macro y micro climáticas, eso que hizo posible ser independientes, estoicos, laboriosos, austeros, y sobre todo, respetuosos de la naturaleza” (Gobernación de Santander, 2016, pág. 177).

Ahora bien, en el Norte de Santander, la Naturaleza de la región es considerada como geografía estratégica en términos comerciales. El Plan de Desarrollo de este territorio para el período 2012-2015 señala que una de las ventajas comparativas<sup>6</sup> más importantes del Norte de Santander es su ubicación geográfica, ya que:

(...) las posibilidades de conectividad del Norte de Santander con el mundo son múltiples: primero, tenemos una salida natural al Lago de Maracaibo y por él, al mar Caribe; segundo, la ubicación de nuestra capital sobre la carretera Panamericana (...) nos conecta hacia el nororiente, con el interior de Venezuela y hacia el suroccidente, con el interior de Colombia y varios países de América Latina; y tercero, la posibilidad de atravesar la Cordillera Oriental en diversos puntos nos permite actualmente conectarnos con el río Magdalena y los Llanos Orientales y en un futuro, con el Océano Pacífico, si se desarrolla la vía el Alto del Escorial que conectaría con El Playón para llegar en menos tiempo a Bucaramanga y Medellín (2012, pág. 92).

Otro documento que resulta imperativo revisar aquí es la Resolución 2090, por medio de la cual se delimitó el páramo de Santurbán en diciembre del año 2014. Esta resolución retoma la denominación de Naturaleza expuesta en la Constitución de 1991, la cual hace referencia a ambiente o territorio con función ecológica, entendida ésta como la de proveer recursos naturales.

Por otro lado, este documento expresa que es el Estado el principal encargado del manejo y cuidado de estos recursos, sobre todo de aquellas áreas de mayor valor ecológico, ya que éstas son de interés general. Ejemplo de una de estas áreas son los páramos, por lo que el páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín ha sido delimitado en pro de:

(...) buscar que en las actividades que se lleven a cabo en las áreas funcionalmente vinculadas al área del páramo aquí delimitado, se complemente el flujo de los servicios ecosistémicos, se atenúen y prevengan las perturbaciones y se garantice su aporte a la protección y conservación del ecosistema del Páramo Jurisdicciones -Santurbán-Berlín delimitado (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 6).

---

<sup>6</sup> Apertura al mercado internacional vía especialización de la producción y exportación a bajo costo; para lo cual la política debe explotar la posición geográfica y natural.

Esta delimitación sobre el páramo consta entonces de un proceso que ordene el territorio, defina zonas con funciones específicas y determine los distintos usos que se le harán al ecosistema de páramo. Por tanto, un ecosistema de páramo no es considerado en su totalidad como conservable, ya que se han especificado zonas de preservación, zonas de restauración y zonas de uso sostenible. Lo anterior significa que la Naturaleza es vista de formas diversas según el uso y el tipo de actividad que se desarrolle en ella y que la preservación o restauración se darán en términos de mantener la estructura y función de la biodiversidad con las que este ecosistema cuenta.

Más tarde, el 08 de febrero del presente año, se pronunció el Estado con la Sentencia C-035/16 de la Corte Constitucional sobre minería en páramos, tras una demanda realizada por algunos senadores y congresistas de izquierda, integrantes de la “Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular” y ciudadanos. Dicha sentencia da cuenta de un significado de Naturaleza como proveedora de recursos, tanto a nivel del suelo como del subsuelo, y perteneciente al Estado colombiano; sin embargo, precisa que aunque éste sea propietario de los recursos a nivel subsuelo, no es libre de explotarlos siempre -tal es el caso de los páramos- por la siguiente razón:

Por una parte, el artículo 332 establece que el Estado es propietario de los recursos del subsuelo. Por la otra, los artículos 287 y 288 de la Constitución Política le otorgan a los municipios autonomía en el manejo de los asuntos que afectan la capacidad para planificar su desarrollo a nivel local, y el numeral 7° del artículo 313 les otorga a los concejos la facultad para reglamentar el uso del suelo dentro del municipio. La Corte sostuvo que, si bien es cierto que el Estado es propietario de los recursos del subsuelo, la extracción de dichos recursos también afecta el uso del suelo (Corte Constitucional, 2016, pág. 3).



### Desarrollo:

Ahora bien, al analizar el significado de desarrollo que maneja el Estado colombiano, se encuentra que en la Constitución Política de Colombia de 1991 este concepto hace alusión, en el artículo 226, a “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 85). Esto se refleja en el Código de Minas, ya que el término de desarrollo se relaciona con la satisfacción de las demandas locales e internacionales mediante la exploración y extracción de recursos naturales renovables y no renovables (Congreso de la República, 2001).

Para lograr esta satisfacción, este Código recoge el concepto de desarrollo sostenible para el “fortalecimiento económico y social del país” (Congreso de la República, 2001, pág. 1). Este propósito de fortalecimiento económico se puede leer también en el Plan Nacional para el Desarrollo Minero, donde se maneja un concepto de desarrollo dirigido a beneficiar a los empresarios mineros, mejorar la calidad de vida de las comunidades y contribuir al crecimiento económico del país, tal como lo expresa la siguiente cita: “La Ley Minera asigna al Estado la obligación de procurar que quienes operan el negocio minero lo hagan con criterios de desarrollo sostenible, de tal manera que generando riqueza para los empresarios mineros puedan contribuir también al bienestar de las comunidades involucradas y al progreso de la economía nacional” (2006, pág. 13). Con este propósito, el Estado persigue que la actividad minera sea formal y estandarizada, por lo cual el desarrollo se significa también con procesos de institucionalización y generación de alianzas “estratégicas y encadenamientos con empresas del sector privado para exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización de minerales” (2006, pág. 81).

A su vez, estos procesos de institucionalización y generación de alianzas requieren de un reconocimiento y formalización de la especialización productiva de los territorios; sobre todo de los mineros para este caso. De esta forma lo expresa el documento precitado: “En este sentido, debe buscarse que los territorios con significativa actividad minera sean reconocidos como distritos o regiones productivas especiales y que como tales reciban un

tratamiento que les permita aprovechar las ventajas y oportunidades que les ofrece su geología” (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006, pág. 107).

Para que esto sea posible, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 expresa que el Estado debe procurar “el aprovechamiento sostenible de la riqueza minera, el uso del suelo de acuerdo con potencialidades y limitantes que sean identificadas para la aptitud del suelo y del subsuelo, y el ordenamiento territorial, entre otros usos” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 212). Bajo la misma lógica, se puede decir que el PND 2010-2014 posiciona el significado de desarrollo en el marco de la actividad minera, entendida como una oportunidad de crecimiento económico para aumentar los recursos de la esfera social y productiva, dado que “más allá de que el sector esté generando la mitad de la exportaciones y dos terceras partes de la inversión extranjera directa, su mayor contribución en materia de desarrollo es la generación de recursos para inversión social y productiva” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 276).

Según este mismo documento, el desarrollo en Colombia se proyecta como un proceso que llevará a la nación a ser en el 2018 altamente competitiva y productiva a nivel internacional mediante “un uso eficiente de las ventajas comparativas, de una oferta más amplia y moderna de conectividad (...) y una mejora sustancial en el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos naturales (Departamento Nacional de Planeación, 2014, págs. 118-119). Esta aspiración productiva se asocia a un elemento determinante que emerge si se continúa estudiando el significado de desarrollo a la luz de la megaminería, éste es el de locomotora. Como bien señala el mismo PND 2010-2014, “las locomotoras de crecimiento son los sectores o actividades económicas que van a definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años. Sectores con el potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el capital, el trabajo o los recursos naturales” (2011, pág. 205), para lo cual se debe promover la inversión nacional y extranjera, además de manejar mediante políticas públicas oportunas, en términos ambientales, el “auge de recursos naturales” (2011, pág. 208).

Añádase a este elemento, lo que el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 enuncia como transformación del campo; es decir que el desarrollo se contempla también como una reestructuración de la ruralidad, en tanto “Colombia necesita

una estrategia integral de transformación del campo, que lo atienda y lo modernice” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 33) bajo la lógica del crecimiento verde en pro de una relación más amable con el llamado medio ambiente y así contrarrestar las vulnerabilidades producto de desastres naturales y el cambio climático, por medio de una modernización y mejora de “la eficiencia y eficacia de la administración pública de acuerdo a estándares nacionales e internacionales” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 856).

Situado el análisis ahora a nivel departamental, vale la pena señalar que en el plan de desarrollo de Santander, periodo 2012-2015, se comprende que el concepto aquí estudiado de la siguiente manera: “El desarrollo económico ha evolucionado al concepto de desarrollo sustentable que busca el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales. La sostenibilidad en las políticas y planes de gobierno es el elemento clave para el desarrollo de regiones y ciudades amables, verdes y sostenibles” (Departamento de Santander, 2012, pág. 53). Ahora, al leer el siguiente plan de desarrollo del mismo departamento, se evidencia una comprensión del desarrollo como diálogo entre el sector minero con el sector ambiental, a lo cual se suma la formación de capital humano idóneo para mejorar las prácticas mineras (Departamento de Santander, 2016). Por último, el significado de desarrollo en el departamento del Norte de Santander hace referencia a una visión prospectiva del territorio en aras, grosso modo, de la competitividad económica, la equidad social, la educación, las condiciones de vida digna, un ambiente más sano y “la infraestructura necesaria para enfrentar los nuevos retos de la globalización” (2012, pág. 4).

Finalmente, el discurso del Estado, en torno al significado de desarrollo, converge en el crecimiento económico combinado a la idea de conservar un ambiente sano para las generaciones futuras, tal como lo expresa la resolución 2090 que delimita el páramo de Santurbán al decir que “el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 1).

### Derechos:

El primer elemento a tener en cuenta en la identificación del significado de derechos es la construcción normativa de los mismos bajo una perspectiva jerárquica, expresa en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la que se consideran como derechos fundamentales aquellos de vital importancia para el desarrollo humano, tales el derecho a la vida, el derecho a la libertad, entre otros; sin embargo, derechos como la vivienda digna, la seguridad social, el ambiente sano y otros, se ubican en una posición inferior.

Muestra de lo anterior son los mecanismos de exigibilidad y defensa que se le asignan tanto a los derechos fundamentales como a los no fundamentales, ya que para los primeros corresponde la acción de tutela considerada como única, individual e inmediata, la cual se presenta ante un juez de la República debido al papel que cumple en la protección de los derechos fundamentales; y para la exigibilidad y defensa de los derechos no fundamentales se puede recurrir al derecho de petición, la acción de cumplimiento y la acción popular, etc., los cuales no demandan una respuesta inmediata y requieren de un proceso extenso para su solución.

El segundo elemento a considerar es la exclusividad de la condición humana para el goce de derechos, ya que -valga la redundancia- los derechos son derechos humanos; es decir que para el Estado sólo el ser humano es poseedor de estos, lo cual se expresa en la Constitución, artículo 1º al decir que la nación está “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 9); lo que demuestra que la noción de derechos utilizada por el Estado colombiano supedita a la Naturaleza y los derechos que ésta podría poseer.

Lo anterior se pronuncia en el discurso estatal tanto a nivel nacional como regional mediante las políticas públicas y lineamientos que se han tenido en consideración para este trabajo; así lo demuestra el siguiente cuadro, el cual permite visualizar con citas textuales de los documentos más determinantes las diferentes maneras con las que el Estado privilegia al ser humano y excluye a la Naturaleza en su noción de derechos:

*Cuadro 4. Significado de derechos en función del ser humano:*

| <b>DOCUMENTOS DEL ESTADO</b>                              | <b>CITA</b>  |
|---|--|
| Constitución Política                                     | Artículo 366: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 147).         |
| Código de Minas   | “Artículo 121. Integridad Cultural. Todo explorador o explotador de minas está en la obligación de realizar sus actividades de manera que no vayan en desmedro de los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades y grupos étnicos” (Congreso de la República, 2001, pág. 121).   |
| PND 2010-2014   | “(…) fortalecer, desarrollar y armonizar los planes, programas y proyectos de protección de personas, grupos y comunidades que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir un daño irreparable a sus derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 533). |
| Planes de Desarrollo Departamental de Santander 2016-2019 | “(…) el desarrollo de la minería y la explotación de hidrocarburos como condiciones ineludibles para lograr altos niveles de competitividad y productividad, empleo, industria, ciencia, tecnología e innovación, tecnologías de la información y la comunicación, el turismo, el sector agropecuario” (Departamento de Santander, 2016, pág. 157).    |
| Delimitación del páramo Santurbán                         | “(…) es necesario tener en cuenta que el marco constitucional determina la necesidad de proteger los recursos naturales en el marco del interés general, así como también el respeto por los derechos y libertades constituidos a favor de los particulares” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 4).                           |

Cuadro de elaboración propia.

Por último, el tercer elemento es la ambigüedad en el significado que el Estado otorga a los derechos en relación con la Naturaleza, ya que no es claro el rol que cumple el Estado con los éstos. Por un lado, promulga la conservación y protección del ambiente como derecho de la población y por otro lado, asume la explotación de los denominados recursos naturales como medio de obtención de recursos monetarios que favorecen al desarrollo social, económico y ambiental. Así lo expresa la Constitución en el artículo 361:

Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, pág. 141).

Vale la pena precisar que el Sistema General de Regalías, según el artículo 360, hace referencia, entre otros elementos, a una contraprestación económica que favorece al Estado la cual se obtiene de la actividad de explotación de los recursos naturales (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

El significado de derechos expresa, a su vez, una contradicción ya que el Código de Minas contempla que los proyectos de exploración y explotación minera pueden ser ejecutados siempre y cuando no afecten de manera negativa los valores culturales, sociales y económicos de las comunidades; es decir que aunque las actividades de exploración y explotación atenten contra el derecho a un ambiente sano, éstas tienen validez en su ejecución en tanto el Estado, como ya se mencionó, ha argumentado su impacto favorable en el desarrollo de proyectos que den garantía a los derechos de la población.

## **CAPÍTULO 11: LOS SENTIDOS DETRÁS DE LA RELACIÓN ESTADO-NATURALEZA**

Tras haber identificado en el capítulo anterior los significados que el Estado colombiano atribuye a los significantes Naturaleza, desarrollo y derechos; en este segundo capítulo se desarrolla la significación (*de los sentidos*) latente detrás de cada significado atribuido a estas categorías. Dichas significaciones, cabe anotar, han sido construidas con base en el posicionamiento político-teórico que guía el presente trabajo.

Así las cosas, ya en este momento del presente texto, bien se podría decir que los sentidos de los significantes aquí estudiados, con los cuales es posible dilucidar la relación Estado-Naturaleza, se soportan en los argumentos centrales que se visualizan en el siguiente esquema:

Esquema 3. Argumentos centrales de los sentidos del por significativo:

## Naturaleza

---

- ***Sentido 1: Crecimiento económico.***
  - Generación de bienestar social.
  - Protección, conservación y defensa del capital natural.
- ***Sentido 2: Aumento de la democracia mediante políticas ambientales.***
  - Disminución de conflicto en torno al uso del suelo y sus factores dependientes.

## Desarrollo

---

- ***Sentido 1: El Estado colombiano debe integrarse en las dinámicas de la globalización.***
  - Participación en el crecimiento económico global.
  - Influencia ejercida en el territorio ( y América Latina) por entes supraestatales.
  - Tendiente relocalización de la industria en los países desarrollados.
  - Influencia de las dinámicas del sector financiero del mundo global en las políticas del Estado.

## Derechos

---

- ***Sentido 1: Los derechos se fundan en un sentido antropocéntrico.***
  - Distancia entre la sociedad y la Naturaleza.
- ***Sentido 2: Sentido economicista.***
  - Condicionamiento de la protección, cumplimiento y reparación de los derechos humanos.

Entrando ahora de lleno en las significaciones detrás del significado atribuido por el Estado a la Naturaleza, se partirá diciendo que el *sentido de crecimiento económico* es la razón de ser por la cual el Estado colombiano centra su atención en la Naturaleza y asume la responsabilidad de su control y explotación, ya que lo que prevalece es el interés económico bajo el argumento del bienestar social. Empero, tanto el bienestar social como el

bienestar ambiental quedan subordinados a este interés bajo la ilusión de que la explotación minera -y otras- permite una mejora de las problemáticas de la sociedad, ya que -discursivamente- habría una mayor cantidad de recursos para enfrentar las mismas, sin tener que cambiar estructuralmente el sistema socio-económico del país.

Lo anterior se puede evidenciar claramente en el artículo 194 del Código de Minas, el cual expresa “la necesidad de fomentar y desarrollar racionalmente el aprovechamiento de los recursos mineros como componentes básicos de la economía nacional y el bienestar social” (Congreso de la República, 2001, pág. 26). De este y otros enunciados se desprende que el sector minero (y energético) es considerado motor del desarrollo y que su importancia radica en su participación en el PIB, la cual “pasó del 9,7% en el cuatrienio 2006-2009 al 11,2% en el periodo 2010-2013” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 115). A su vez, para el Estado, el aumento de esta participación en el PIB nacional implica la recepción de regalías, impuestos y dividendos que representan un factor de crecimiento económico y la posibilidad de poner en marcha proyectos dirigidos al bienestar social.

Esta justificación de generación de bienestar social responde a las lógicas neoliberales plasmadas, por ejemplo, en las políticas que se sustentan en la economía de goteo<sup>7</sup>; la cual pregonaba que el beneficio socio-económico de las poblaciones se produce -en el caso de la megaminería y otras actividades productivas- garantizando la “generación de riqueza a los empresarios mineros, (*para que éstos*) puedan contribuir también al bienestar de las comunidades involucradas y al progreso la economía nacional” (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006).

Por su parte, la adopción de la estrategia de crecimiento verde, que el actual PND plantea, compagina con la justificación de bienestar social, ya que expresa favorecer en primera instancia al crecimiento económico y evitar que las poblaciones más pobres o vulnerables sufran las consecuencias de la degradación de la Naturaleza (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Así, esta estrategia valida la minería a gran escala, en la medida que esta actividad representa una oportunidad económica que responde a nuevos

---

<sup>7</sup> La que expresa que “favoreciendo a los más ricos, la economía genera beneficios que, cayendo hacia abajo como gotas, se transforman en una ventaja para todos. Nada más lejano a la realidad” (Arango Marín, 2008).



parámetros capitalistas con los que se pretende mitigar el impacto socioambiental y garantizar a largo plazo el acceso a los denominados recursos naturales y servicios ambientales que permiten continuar el ciclo de producción y acumulación.

Por otro lado, incluso en la protección, conservación y defensa de la Naturaleza, el sentido de fondo es el crecimiento económico, debido a que estas tres acciones tienen como propósito asegurar el sostenimiento ambiental que, si bien procura mantener los elementos naturales necesarios para la vida, también procura mantener el llamado capital natural necesario en los procesos de producción. Por esta razón, cobran importancia las áreas denominadas estratégicas -tales los páramos-, ya que ofertan particularmente una amplia gama y cantidad de bienes y servicios ecosistémicos. Lo expuesto se evidencia con claridad en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual señala que “la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos proveen beneficios que son la base para el desarrollo de las actividades económicas y sociales del país (...). Para mantener la capacidad de los ecosistemas de proveer dichos beneficios es necesario conservarlos, restaurarlos y reducir su degradación” (2014, pág. 601).

En el caso del Norte de Santander, departamento en el que se ubican parcialmente los páramos de Santurbán y del Almorzadero, el sentido hasta aquí discutido cobra vida al observar que en su plan de desarrollo correspondiente al periodo 2012-2015, la conservación de estos páramos se contempla dentro del apartado de “iniciativas para el sector productivo”; lo que llama a interpretar la preponderancia del factor económico ya arriba expuesto.

Así, se puede decir que la protección, conservación y defensa de la Naturaleza -concebida como capital natural-, es restringida por parte del Estado; lo que responde al desentendimiento del deber proteger a la Naturaleza en todo su conjunto, ya que lo que no es en estricto rigor protegible, en términos de capital natural (bienes y servicios ambientales), no será conservado.

Otro sentido relacionado al significante Naturaleza es el *supuesto aumento de democracia mediante políticas ambientales* dirigidas a recuperar y mantener el capital natural y sus servicios ecosistémicos, ya que según el pasado gobierno de Juan Manuel

Santos, éstas propenden por el crecimiento económico y el “apoyo a las locomotoras para la prosperidad democrática” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 567). Este sentido se sustenta en la hipotética disminución de conflicto en torno al uso del suelo y sus factores dependientes, de la cual se hace referencia en el Plan Departamental de Desarrollo de Santander 2012-2015.

Ahora bien, respecto a la significación detrás del signifiante desarrollo, parece un hecho indudable que el sentido es *la integración del Estado colombiano en las dinámicas de la globalización*. Tal integración se expresa en variadas acciones, entre ellas los acuerdos de Tratados de Libre Comercio (TLC) en aras de una participación en el crecimiento económico global. Por esta razón, el mismo documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, proyecta que la demanda externa sea uno de los principales factores del crecimiento económico del país gracias a “los efectos positivos esperados de los avances en los TLC con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Alianza Pacífico y Centro América, entre otros” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 833).

Otra acción en la se expresa también el sentido de integración aquí expuesto es la implementación del instrumento de cooperación internacional, el cual según la Cancillería “es una herramienta de relacionamiento político (...) que contribuye al posicionamiento de Colombia en instancias globales, multilaterales, regionales y subregionales, así como a diversificar la agenda de política exterior hacia diversos sectores del desarrollo nacional” (Cancillería, 2015). Esta es la situación que afecta también al territorio donde se ubica el páramo de Santurbán, ya que el plan de desarrollo de Santander (2016-2019) expresa que mediante la cooperación internacional se pretende responder a una política exterior en pro de fortalecer tanto el desarrollo interno como de otros actores del mundo (Gobernación de Santander, 2016).

Este empeño del Estado por hacer parte de las dinámicas de la expansión global del capital da cuenta de la influencia ejercida en el territorio nacional por entes supraestatales que proyectan las perspectivas no sólo para Colombia sino para América Latina en general; tal es el caso de la adopción de los lineamientos de desarrollo, en el marco del crecimiento verde, propuestos por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico), la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Así, a partir de dichos lineamientos, territorios como el departamento de Santander se visualizan como “ganadores” en la medida que se esfuerzan para convertirse en “punto(s) neurálgico(s) de conectividad para la integración y el desarrollo productivo del país” (Gobernación de Santander, 2016, pág. 27); lo cual implica lograr acuerdos en relación a la inversión, innovación e infraestructura y conectividad tanto regional como nacional e internacional (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006).

Esto hace parte del porqué el Estado colombiano concibe a los territorios rurales como un escenario de ventaja comparativa determinante para la competitividad internacional, ya que mediante su especialización productiva en actividades tales las agropecuarias, forestales y mineras -entre otras-, se internacionalizan en el marco de la globalización. Referente a esto, la afirmación hecha por el Plan Nacional para el Desarrollo Minero -proyectado hasta el año 2019-, indica que “en el contexto de la globalización económica, la dimensión regional tiene tanta importancia como la supranacional, por lo cual se considera que el proceso globalizador tiene en el fondo una fuerte base territorial” (Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, 2006).

Aquí, la transformación del campo -y de la Naturaleza- resulta un elemento determinante si se analiza bajo las perspectivas de la globalización, ya que si bien el Estado argumenta esta acción bajo el ideal de la construcción de la paz, precisa que ésta debe estar integrada en las dinámicas económicas globales. Así es que las Bases del PND 2014-2018, en su capítulo “Transformación del Campo”, plantea como visión la transformación integral del campo colombiano para la construcción de una paz estable y duradera (Departamento Nacional de Planeación, 2014), donde dicha transformación debe responder a la construcción de un territorio competitivo para que “en el mediano y largo plazo los habitantes del campo puedan vivir dignamente, logren movilidad social a través del ejercicio de actividades económicas competitivas y sostenibles” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 380).

Por otro lado, las dinámicas del sector financiero del mundo global también influyen en las políticas del Estado colombiano, poniendo a éste en una situación preocupante, ya

vque dichas dinámicas tienden a revertir las estrategias orientadas a que los países en vía de desarrollo cuenten con un fácil acceso crediticio mediante bajos tipos de interés y expansión de la oferta monetaria; provocando como consecuencia que para estos países sea más difícil el acceder al mercado de capitales y el captar inversión extranjera. Esta preocupación por las dinámicas globales derivan también de la tendiente relocalización de la industria en los países desarrollados, fenómeno contrario a lo sucedido desde 1990 en adelante (Gobernación de Santander, 2016); empero, dicha relocalización no modifica para el Estado colombiano el sentido de las relaciones internacionales en términos de globalización, ya que como expresa el mismo plan departamental de desarrollo anteriormente citado:

El trabajo constante alrededor de esta demanda internacional nos permitirá aumentar y diversificar la base productiva, desarrollar el enfoque de Desarrollo Económico Local (DEL), generar riqueza y por consiguiente, resistir a situaciones propias del sistema financiero internacional (CGLU 2015, pág. 4) que responden a un mundo más interdependiente, innovador y menos apegado a recursos no renovables como por ejemplo: el petróleo (Gobernación de Santander, 2016, pág. 27).

Fíjese ahora la atención sobre la última parte de la precedente afirmación -no apegarse a la producción de recursos no renovables-, la cual da cuenta de la flexibilidad productiva a la que le apuesta el Estado colombiano para satisfacer las demandas internacionales y así estar en sintonía con el proceso de globalización. Sin embargo, esta flexibilidad no cambia la esencia extractiva, sino que llanamente desplaza -de manera temporal- la atención en otros elementos de la Naturaleza.

Por último, se quisiera aquí poner a discusión la significación (sentido) latente detrás de la adopción y puesta en práctica de la noción de derechos descrita en el capítulo anterior, teniendo en cuenta la apuesta teórico-política del profesor Gregorio Mesa Cuadros de reconfigurar los derechos en perspectiva de integralidad.

Así, lo primero a mencionar es el sentido antropocéntrico de los derechos en el Estado colombiano, el cual se traduce como la distancia entre la sociedad y la Naturaleza, y justifica que esta última junto a los demás seres vivos no reciban el mismo tratamiento que los seres humanos para el goce de derechos, salvo que sean un vehículo para la efectividad

de los derechos humanos. Bajo este sentido, la Naturaleza queda supeditada a las demandas de la sociedad para satisfacer un conjunto de necesidades que no siempre resultan inherentes a la especie humana, provocando que el Estado evalúe las bondades de la Naturaleza en términos de oferta de bienes y servicios ambientales.

Así, la Naturaleza no posee derechos per sé, sino que estos dependen de su capacidad de oferta ambiental, tal como se da en los ecosistemas de páramo, que son considerados fábricas de agua. Por tal razón, la delimitación del páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, acogió el artículo 16 de la Ley 373 de 1997, el cual ordena que “las entidades ambientales de la jurisdicción correspondiente (...) realizarán los estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales para iniciar un proceso de recuperación, protección y conservación” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 2).

Lo anterior se relaciona con el segundo sentido aquí desarrollado, el cual es el economicista que condiciona tanto la protección, como el cumplimiento y la reparación (en los casos que corresponda) de los derechos. Este condicionamiento pone en entre dicho la protección y cumplimiento de derechos como el acceso a la tierra, la consulta previa y el ambiente sano, ya que como lo afirma el CONPES 3762, estos derechos requieren un conjunto de trámites que impactan la agilidad y viabilidad de grandes proyectos mineros y por ende “afecta negativamente (...) en el mejoramiento de la infraestructura del país y de la inversión en el sector minero energético” (Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES, 2013, pág. 5). Con esta afirmación se evidencia que el Estado concibe a los derechos como un espacio de transacción por intereses económicos en el cual se puede hacer negociaciones que favorezcan el desarrollo de proyectos mineros a gran escala.

Este sentido además justifica la prevalencia del interés económico que tiene el Estado colombiano sobre el interés social y por supuesto sobre el interés ambiental; prevalencia que puede evidenciarse también al analizar la reparación de los derechos vulnerados por acciones que se ejercen sobre la Naturaleza, donde, según el CONPES precitado, el Estado establece un monto indemnizatorio para casos de expropiación de predios destinados a exploración y/o explotación de “recursos naturales”, es decir, donde el Estado le asigna un valor económico a la reparación de los derechos que se vulneran por la explotación minera.

En síntesis, los derechos que debiera tener la Naturaleza y las poblaciones rurales se ven enfrentados también al escenario de armonización con los intereses particulares; es decir, a la transacción de derechos por intereses económicos. Con la actividad minera en el páramo de Santurbán se puede ver esto claramente, ya que a pesar de quedar estipulada la prohibición de celebrar contratos, otorgar títulos mineros o expedir nuevas licencias ambientales desde el 9 de febrero de 2010 en el páramo aquí en cuestión, toda actividad minera que se venga realizando antes de dicha fecha puede seguir su curso hasta su terminación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).

*Cuando los sentidos provocan contrasentidos:*

Todo lo expuesto arriba se confronta a una serie de argumentos que provienen de actores contrahegemónicos que se han replanteado la relación que sostiene el Estado colombiano con la Naturaleza en territorios rurales, sobre todo en torno a la actividad minera a gran escala. Estos argumentos, llamados aquí contrasentidos, responden a dos tipos de sentidos hegemónicos (del Estado): los identificados en el capítulo anterior y los emergentes de los cuales dieron cuenta los textos contrahegemónicos estudiados, los cuales son “progreso” y “colonialidad”. Los contrasentidos entonces, se configuran en una realidad que afecta o interpela a los actores contrahegemónicos aquí considerados.

Es así como el sentido de crecimiento económico por el cual el Estado centra su atención en la Naturaleza y asume la responsabilidad de su control y explotación es cuestionado por actores contrahegemónicos que ven a *la Naturaleza como parte de un todo, en donde se construyen relaciones socioambientales*. Ejemplo de ello es lo expuesto por actores de la zona del páramo de Santurbán, tales la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-Pcdhdd, y CENSAT Agua Viva, quienes apelan que la comunidad de este territorio está “en contra de la extracción de oro en Santurbán, (*lo que*) puso a pensar al país entero en los modelos de desarrollo económico que se están asumiendo, y en los costos que estos podrían generar si no hay un cambio profundo en las estructuras económicas y de mercado” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 408).

Aquí se ve cómo la extracción industrial de oro ha despertado en la comunidad del páramo de Santurbán el interés por cuestionar el modelo económico, el cual pone en riesgo al agua, elemento considerado de vital y mayor importancia que el oro debido a que permite la vida no sólo de la especie humana, sino también “de otras formas de vida vegetales y animales. Es decir, para estos pobladores, los páramos y las selvas alto andinas (...) son un espacio donde se evidencia un complejo entramado de relaciones de seres interdependientes” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 405). Por ello la importancia de velar por la vida humana y no humana, defender de la extracción minera los territorios, la cultura, la identidad y la soberanía. Este contrasentido implica también romper la visión hegemónica del Estado que fracciona la protección de la Naturaleza, ya que para determinadas poblaciones contrahegemónicas, la protección (socio) ambiental ha de ser amplia y compleja.

A esto se añade la denuncia por parte de actores contrahegemónicos sobre la condición privilegiada que el Estado le otorga a la actividad minera a gran escala en relación a la ordenación ambiental; condición que se refleja en el esfuerzo público por construir un marco normativo netamente favorecedor para esta actividad a pesar de ir contra de “otras manifestaciones de la política y la normativa nacional” (Tierra Digna, 2015, pág. 44). Esta condición privilegiada está respaldada por el debatido argumento de que la minería es una actividad de interés social, lo que le permite ignorar determinadas restricciones y consideraciones ambientales (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012).

En esta medida, y de forma paralela, el sentido de progreso y desarrollo, que sustenta el fomento de la megaminería por parte del Estado, representa uno de los ejes fundantes de oposición de los discursos contrahegemónicos, ya que éstos lo rechazan bajo la comprensión crítica de que *todos los proyectos de sociedad amparados en este sentido son de carácter hegemónico y excluyente*. Así:

(...) mientras los promotores del modelo utilizan estos discursos del desarrollo y el progreso, las comunidades que resisten se oponen al proyecto minero contraponiendo otros discursos como el buen vivir, los planes de vida y otras alternativas al desarrollo:

ellas saben que de esto no hay para todos y todas, que desarrollo y progreso se hacen a costa de sus formas de vida y sus territorios. Por tal razón, (...) las comunidades ya no solamente se dan cuenta de que (*desarrollo y progreso*) jamás serán una realidad para todos, sino que tampoco quieren tenerlas como objetivo. Su resistencia se basa justamente en revalorizar sus formas de vida para evitar que el desarrollo termine depredando la naturaleza y llevando miseria a muchos seres humanos” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 410).

Bajo esta crítica, los actores contrahegemónicos reconocen que el modelo extractivista -enmarcado en el sentido de progreso y desarrollo- se sustenta en el “espíritu colonialista propio de la modernidad” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, págs. 409-410); es decir, en el *mito de que la explotación a la Naturaleza cumple una función civilizatoria que garantiza riqueza para elevar el nivel de vida de toda la sociedad*; mito que para estos actores se convierte en un contrasentido.

Este supuesto aumento de riqueza se aleja de la realidad para las comunidades en las que hay presencia de proyectos mineros a gran escala, ya que para ellas la minería afecta la prosperidad de sus economías debido a que, por un lado, “profundiza y perpetúa las lógicas excluyentes de las economías de enclave, presentes a lo largo de toda la historia nacional” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 410) y, por otro lado, “no genera la misma cantidad de empleos que la industria manufacturera o los minifundios, pues sólo se necesitan los operadores de maquinaria y las instalaciones (y algunos enlaces para el suministro de provisiones o servicios relacionados a la actividad)” (Tierra Digna, 2015, pág. 95). A su vez, este supuesto aumento de riqueza derivado de la minería a gran escala, tampoco satisface para los actores contrahegemónicos las múltiples necesidades de las variadas identidades culturales que hacen parte del territorio rural nacional (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012).

Otra falacia es la relacionada al supuesto aumento de democracia que pregonan el Estado por vía de las políticas que provocan afectaciones socioambientales. Por esta razón



es que actores como los de la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular proponen “una política de reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra” (INDEPAZ, 2014, pág. 34). Esta propuesta surge como consecuencia del padecimiento de estas comunidades, expresado en el contrasentido de *la histórica desigualdad por el acceso a la tierra y la falta de autonomía territorial*.

Este contrasentido se basa en la concentración histórica de la tierra en Colombia por la organización rural latifundista y ahora también por el apoderamiento de tierras - impulsado por el Estado- por parte de empresas multinacionales que emprenden actividades de explotación a la Naturaleza como la megaminería. Este apoderamiento resulta contraproducente, ya que como bien lo señalan los actores políticos pertenecientes a la cumbre recién mencionada, “es preciso detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, (y) la entrega a empresas multinacionales, (ya que) acaba con la economía campesina y destruye la vida” (Movimiento por la Constituyente Popular y ASONALCAM, 2014, pág. 18).

Esta realidad expuesta lleva al siguiente punto: la integración del Estado colombiano en las dinámicas de la globalización mediante la adopción de políticas neoliberales que facilitan el apoderamiento de tierras por parte de las multinacionales (Movimiento por la Constituyente Popular y ASONALCAM, 2014). La muestra de esto es la considerable suma de TLC vigentes, suscritos y en negociación, además de otros acuerdos comerciales que hacen parte de la continuidad del modelo económico que ahora lidera el gobierno nacional de Juan Manuel Santos; acuerdos que según el documento resultante del Encuentro Nacional de Territorio, Ambiente y Minería, que lideró la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena Del Cauca-CRIC, bien pueden relacionarse con “las nuevas políticas institucionales en materia de desarrollo rural (*las cuales*) promueven la desterritorialización y el repoblamiento desde las indicaciones neoliberales” (INDEPAZ, 2012, pág. 6).

Para los actores contrahegemónicos el fuerte énfasis en inversión extranjera multinacional en megaproyectos minero-energéticos y agroindustriales, que se traduce en diversas concesiones, títulos, exploraciones y explotaciones de gran minería en gran parte del territorio nacional “materializa el saqueo y entrega de nuestros recursos naturales

hídricos y energéticos, (*por lo cual*) la locomotora minero-energética representa una gran amenaza para la naturaleza y la vida de las comunidades que habitan estos territorios” (Movimiento por la Constituyente Popular y ASONALCAM, 2014, pág. 8).

Esta invitación a la inversión extranjera multinacional encarna un contrasentido conexo al anterior, dado que para determinados actores contrahegemónicos *representa una dependencia y, por tanto, pérdida de soberanía nacional e incluso continental*, ya que según un documento de CENSAT Agua Viva y la PCDHDD, el actual auge de exportación minera que vive Colombia y América Latina es un fenómeno que se alinea con los mandamientos del Consenso de Washington-1990, los cuales impulsaron la reducción del Estado, la privatización y la desregulación, entre otras medidas (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012). Debido a esto, las organizaciones precitadas hacen alusión a la necesidad de preguntarse “cómo ingresa la riqueza generada por esta industria al patrimonio público y cómo financia la realización de iniciativas que resuelvan las necesidades del conjunto de la población. (*Y asegura que*) El ingreso de las utilidades de la actividad minera al presupuesto nacional es cuestionable” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 268).

En consonancia con todos estos contrasentidos expuestos, actores contrahegemónicos como el Movimiento Santandereano por el Agua son una muestra del esfuerzo invertido en la búsqueda de otras formas de habitar y organizar la vida en el mundo, es decir, de la resistencia organizada de comunidades o colectivos hacia las formas de relacionarse con la Naturaleza que impone el Estado y entes de mayor jerarquía (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012). En últimas, las propuestas contrahegemónicas hacen referencia a un ordenamiento territorial de orden comunitario que, entre otras cosas, redefina la producción rural; permita una distribución del uso del suelo y un gobierno popular del subsuelo; y protega el aire, el agua y los ecosistemas estratégicos para entablar una relación mucho más armoniosa con el ambiente que permita la pervivencia socioambiental de los territorios rurales (INDEPAZ, 2014).

*Los grises entre los sentidos del Estado y los contrasentidos de actores  
contrahegemónicos:*

En el análisis de los sentidos del Estado y los contrasentidos de los actores contrahegemónicos, en torno a la relación del primero con la Naturaleza, se encuentra que las posturas no están siempre polarizadas en blancos y negros, sino que se encuentran posturas matizadas que emergieron en el proceso investigativo y que aquí se han querido llamar contrasentidos grises. Tales contrasentidos dan cuenta de posturas que, de una u otra manera, toman un distanciamiento con la esencia del sentido hegemónico pero que, a su vez, comparten elementos discursivos con la postura del Estado.

Una vez hecha esta precisión, se debe mencionar que el ideal de desarrollo es un elemento presente en las dos posturas estudiadas, lo cual -según el posicionamiento político-teórico de esta investigación- obedece a la trasposición de conceptos y teorías, ya que el presente trabajo investigativo parte de la negación de cualquier modelo de desarrollo; respecto a la postura hegemónica se ha dicho que el Estado se encarga de construir todo un conjunto de normas, acciones y mandatos enmarcados en el modelo neoliberal con el objetivo de lograr un desarrollo económico y sostenible; y en cuanto a la postura contrahegemónica, se encuentra que la Organización Nacional de Indígenas de Colombia-ONIC está de acuerdo con el ideal de desarrollo siempre y cuando éste brinde la garantía y protección de sus derechos, es decir que proponen un cambio en el modelo de desarrollo del Estado que reconozca el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas (ONIC, 2014, pág. 66). Aquí, se ve cómo el ideal de desarrollo ha permeado el discurso del pueblo indígena colombiano, el cual articula elementos básicos de su cosmovisión ancestral con ideales dominantes de desarrollo que se apartan del posicionamiento contrahegemónico en el que se ubica dicha población.

En complemento a lo anterior, la organización Tierra Digna, la cual defiende el ideal en cuestión, agrega que debe haber un desarrollo que entienda a la Naturaleza como escenario vital y no como instrumento, con el fin de asegurar -bajo esta concepción- “una justicia que pase por lo social y trascienda a lo ambiental” (Tierra Digna, 2015, pág. 8). Con lo expuesto, se ve cómo las posturas contrahegemónicas hacen propuestas acorde con sus pensamientos e intereses, empero no muestran con claridad tener un propósito

realmente alternativo o de cambio estructural en donde las bases que sostienen el actual tipo de relación depredadora con la Naturaleza sean superadas.

Por otro lado, aunque ha sido interesante encontrar que los actores contrahegemónicos proponen, entre otras cosas, entender la Naturaleza como un escenario vital y aluden a una comprensión compleja de ésta como un todo que trasciende el espacio, los elementos naturales y otros factores (comprensión opuesta al significado que el Estado tiene de la Naturaleza); se halla en dicha propuesta un elemento que marca un tinte contradictorio, en tanto compagina con el sentido que tiene el Estado sobre la conservación fragmentada y discriminada de la Naturaleza y se opone a la noción ya mencionada de la Naturaleza como un todo. Debido a esta contradicción, es que organizaciones como Tierra Digna denuncian la negligencia del Estado al no delimitar zonas de especial protección y no consolidar un inventario de bienes ambientales (Tierra Digna, 2015); denuncia que se correlaciona con la postura hegemónica, ya que al reclamar por la falta de definición de zonas merecedoras de protección devela una comprensión limitada y sesgada de la Naturaleza.

El INDEPAZ manifiesta otra postura matizada, la cual muestra una flexibilidad frente a la defensa y protección de los territorios colectivos al afirmar que “se requiere en ellos consentimiento previo para programas de inversión que afecten los derechos territoriales y los planes de vida” (INDEPAZ, 2012, pág. 25). Lo anterior da cuenta de un posicionamiento contradictorio respecto a la defensa y protección de los territorios, ya que dicho actor contrahegemónico concibe estas dos acciones como negociables y susceptibles a los intereses que se pretenden cumplir con proyectos de inversión, que por su naturaleza generan un impacto negativo tanto en los territorios como en sus poblaciones.

Los contrasentidos grises ya expuestos denotan el amplio poder de influencia del entramado hegemónico en la esfera discursiva de los actores contrahegemónicos que asumen un rol protagónico en la construcción de alternativas y resistencias al modelo imperante. Sin embargo, lo anterior no significa una invalidez de los esfuerzos y compromisos de dichos actores; sino que, es muestra del recorrido complejo que implica la construcción de una realidad basada en una relación armoniosa y recíproca con la Naturaleza.

## CAPÍTULO 12: LAS MANIFESTACIONES DE LA TENSION ENTRE LOS SENTIDOS Y CONTRASENTIDOS

Hasta aquí, se han presentado tanto los significados como los sentidos que tiene el Estado colombiano frente a las tres categorías abordadas en la investigación -Naturaleza, desarrollo y derechos-, con lo cual ha sido posible reconocer el discurso del Estado respecto al fenómeno de la minería a gran escala. Sin embargo, el propósito del presente trabajo no es sólo quedarse en la mera descripción del discurso y el análisis de los sentidos que lo sustenta, sino que es ir más allá y determinar su *implicación discursiva*, la cual según la presente investigación es la *legitimación del modelo neoliberal por parte del Estado colombiano*. Esta legitimación se logra a través de la instauración del discurso demagógico de bienestar social y bienestar ambiental contemplados como justificantes del crecimiento económico para poder responder a los intereses del sistema capitalista mediante una participación significativa del Estado en las dinámicas de la globalización.

Ahora bien, esta implicación discursiva recién descrita puede considerarse a su vez como un escenario de pugna por el acceso y relación con la Naturaleza dada la contraposición de sentidos del Estado y contrasentidos de actores contrahegemónicos expuesta en el capítulo anterior. Empero, además de estos dos actores, existen otros determinantes en este escenario de pugna, tales los entes supraestatales, que por su figura de poder establecen las condiciones de la relación Estado-Naturaleza en el territorio nacional. Por esta razón se puede decir que esta pugna en la realidad colombiana no responde sólo a dinámicas internas del territorio nacional, sino a una disputa geopolítica a nivel global, que según Horacio Machado, gira en torno a la utilización de los ecosistemas para el control y apropiación de los elementos naturales, tales los minerales (Machado Aráoz, 2015).

El rol del Estado colombiano en esta pugna sería el de facilitador para el acceso y relación -de carácter hegemónico- con la Naturaleza por parte de multinacionales y entes supraestatales de otro orden, mediante la flexibilidad estatal que se refleja en la configuración de un marco legal acorde a las demandas de actores privados para el acceso, en el caso de la megaminería, al suelo, subsuelo y los elementos naturales -llamados recursos- que estos contienen. Según el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra

Digna”, esta flexibilidad choca con parámetros de tipo constitucional, que son omitidos por el Estado (Tierra Digna, 2015); con lo cual se devela la posición y apuesta política del Estado respecto a la Naturaleza del territorio nacional -y a las poblaciones rurales que con ella se relacionan- en el caso de megaminería.

Desde tiempos remotos, el Estado colombiano ha puesto las riquezas nacionales al servicio del capital transnacional, incluso poniendo estructuras militares legales e ilegales para destruir toda expresión social que se oponga a esta lógica económica. De esta manera, las políticas gubernamentales mineras y energéticas se han formulado en favor de las empresas transnacionales, mientras a los pueblos mineros y petroleros sólo les queda miseria, destrucción y abandono (Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, 2013 , pág. 393).

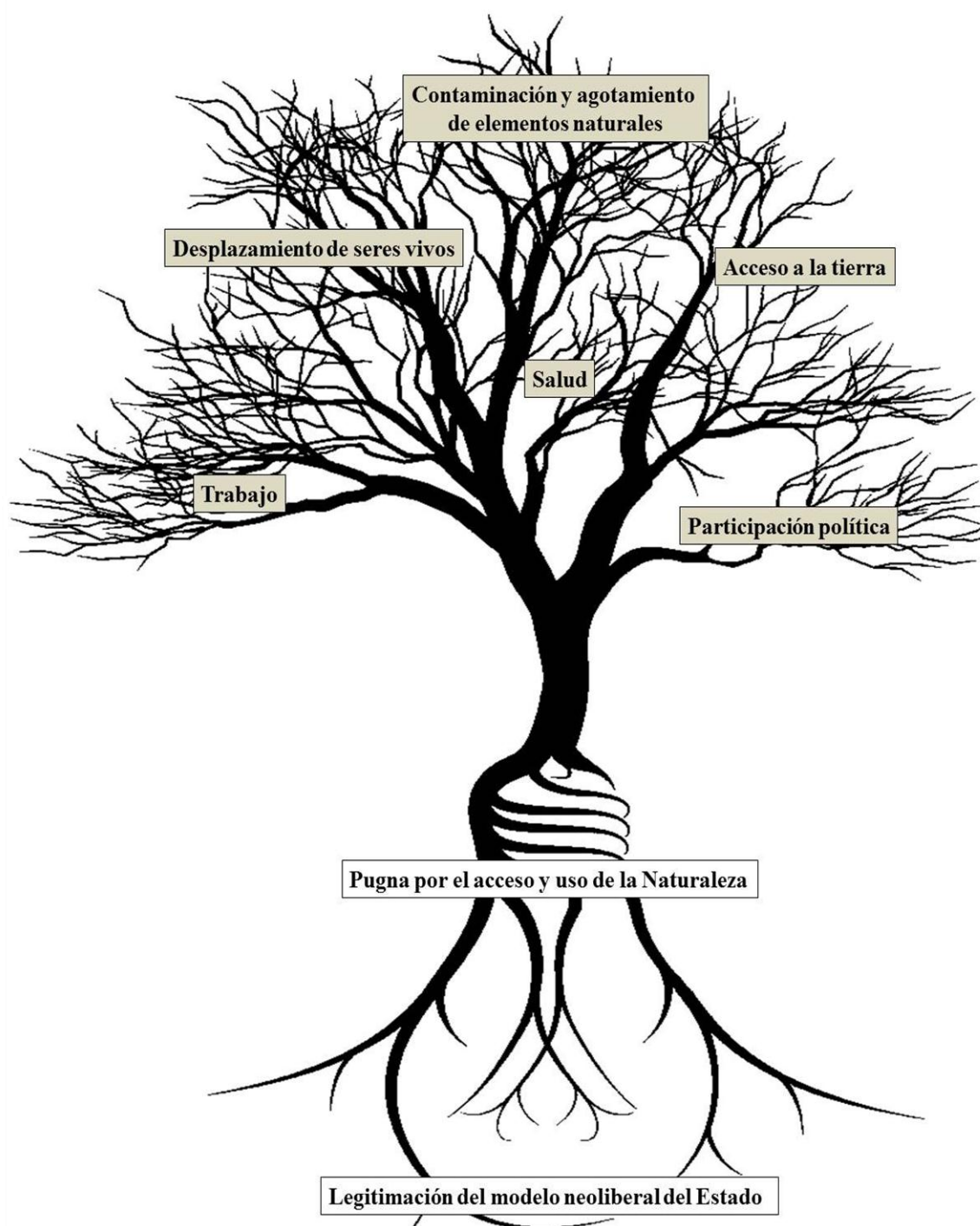
La flexibilidad estatal, como expresión de la posición y apuesta política del Estado recién mencionada, es el instrumento que impulsa el desarrollo minero a gran escala y perpetúa la histórica pugna que ha caracterizado a Colombia en cuanto al acceso y tipo de relación con la Naturaleza. Como bien indica el Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, “Colombia ha sufrido y se mantiene como un país impactado negativamente en su historia por tres “tsunamis”: el de la concentración, propiedad y uso de la tierra; el de la producción, transformación y tráfico de la cocaína y, ahora, el de la minería. Los tres tsunamis, en la actualidad, se dan al mismo tiempo con todo su peso y perversidad” (CINEP/PPP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, 2012, pág. 5).

Para poder comprender esta promoción del desarrollo minero basta observar con sospecha el hecho de que casi el 25% del territorio nacional está destinado a concesiones mineras para la exploración y explotación de minerales; hecho que, según Tierra Digna, es prueba de la creciente especialización de la economía nacional en torno a la generación de productos mineros, la cual desplaza otras actividades productivas del territorio (Tierra Digna, 2015). De esta manera, el ordenamiento territorial, en tanto definición de los usos y actores que pueden controlar e intervenir en los territorios y la Naturaleza, es llevado a cabo de forma hegemónica en este escenario de pugna aquí en cuestión.

Desde este ángulo, se puede concordar con Machado en que existe una colonialidad territorial que distiende la pugna de la que aquí se viene tratando. En esta colonialidad territorial no sólo participa el Estado, sino también las grandes corporaciones extractivistas que “desarrollan tecnologías de penetración sociocultural muy sofisticadas” (Machado Aráoz, 2015, pág. 19) para que los proyectos mineros sean aceptados por las comunidades. Estas tecnologías de penetración hacen referencia a la instauración de la lógica mercantil de compensación y reparación como criterio racional de negociación, mediante la oferta de empleos locales y donaciones de todo tipo que se amparan en el discurso de la responsabilidad social empresarial (Machado Aráoz, 2015).

Todas estas observaciones en torno a la pugna por el acceso y relación con la Naturaleza, más específicamente con el suelo y subsuelo en el escenario de la actividad minera a gran escala, se relacionan con una serie de implicaciones socioambientales que no se separan del ámbito de los derechos. Dichas implicaciones deben comprenderse de forma compleja e integral, para lo cual la presente investigación las ha configurado -sin intencionalidad jerárquica- de la siguiente manera:

*Esquema 4.* Implicaciones socioambientales:





### La tierra, ¿para quién?:

Partiendo de este esquema, véase la implicación socioambiental del acceso a la tierra que se desprende de la locomotora minero-energética en Colombia. Esta implicación se traduce como el conflicto en el que actores privados persuaden al Estado para que mediante la construcción -o deconstrucción- de un marco normativo que respalde tanto la tenencia como el uso de la tierra, responda a los intereses económicos de dichos actores y así sus proyecciones capitalistas de minería a gran escala sean viables en los territorios. Es así que el Estado y los entes supraestatales partícipes de dicho conflicto han establecido, como lo menciona Omar Giraldo, “una ofensiva extractivista de acumulación por desposesión que ha convertido a Colombia en el segundo país del mundo con mayor cantidad de conflictos socioambientales” (Giraldo, 2015, pág. 4).

Si se fija la mirada en el territorio referente de la presente investigación, páramo de Santurbán, es posible identificar la extracción de sus bienes comunes, la expropiación de sus aguas y el saqueo de su biodiversidad (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012) como actividades representativas y determinantes de las multinacionales que propician el conflicto socioambiental que se ha expuesto. Así se comprende que uno de los conflictos socioambientales de este territorio y en general del país, donde se desarrollan proyectos de megaminería, es la vulneración del derecho al acceso a la tierra por parte de comunidades locales; la cual está prefijada por una serie de actividades propias de las multinacionales, en este caso mineras, que arremeten en contra de la Naturaleza y que conducen a la vulneración del derecho en cuestión.

Las actividades mencionadas llevan a identificar un deterioro ambiental definitivo causado por los megaproyectos mineros. Ante dicha situación problemática el Estado no asume la responsabilidad de establecer acciones preventivas y de control que permitan resolverla (Tierra Digna, 2015); por esta razón las repercusiones negativas en la Naturaleza como los “profundos cambios paisajísticos que reconfiguran los modos de vida de los habitantes atrapados en medio de las plantaciones de monocultivos (...) la desertización, deforestación y contaminación ambiental producida por la megaminería y la tecnología de la revolución verde” (Giraldo, 2015, pág. 6) se pueden entender como causas del

desplazamiento de la población que ha habitado ancestralmente en territorios destinados, de manera arbitraria por el Estado, para la minería industrial.

A la luz de estas aclaraciones es posible afirmar que en el conflicto por el acceso a la tierra se gestan nuevas dinámicas de reconfiguración territorial del país producto del desplazamiento forzado de las comunidades, principalmente campesinas, indígenas y afrocolombianas, ya que pertenecen a territorios con una amplia gama de biodiversidad, lo que los convierte en estratégicos (ABColombia, 2012) desde la perspectiva del modelo neoliberal que cobija a la locomotora minero-energética del país. A su vez, el desplazamiento forzado bajo la mirada del modelo neoliberal es también visto “como una herramienta para la adquisición de tierras en beneficio de, entre otros intereses, proyectos a gran escala de explotación de recursos naturales” (ABColombia, 2012, pág. 5).

Aquí vale la pena tener un acercamiento cuantitativo con la realidad para dimensionar la magnitud del desplazamiento forzado en el conflicto socioambiental del país:

Según cifras de Funtraenergética (2011), “el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero-energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas” (Ramírez Cuéllar, 2011: 1) (Contraloría General de la República, 2013, pág. 63).

A pesar de que las cifras referenciadas son alarmantes, el Estado colombiano ha tomado una posición cuestionable frente a su condición de garante en el cumplimiento, reparación y no repetición de la violación de los derechos de las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado por el desarrollo de megaproyectos mineros. Tal posición considera que la expulsión de las poblaciones de sus territorios, por motivos del desarrollo, no debe reconocerse como desplazamiento forzado y, en esta medida, no supone que esta situación requiera ser abordada como el desplazamiento por conflicto armado (Tierra Digna, 2015, pág. 51); consideración que minimiza el accionar del Estado frente a este fenómeno y deja en desamparo a las víctimas del modelo extractivista.

Aunque el desplazamiento forzado en Colombia, tanto por el desarrollo como por el conflicto armado, ha sido generalmente estudiado y tratado sólo desde las afectaciones a las poblaciones locales, es pertinente resaltar que el desplazamiento por desarrollo impacta a otros seres vivos y/o entes naturales como los animales y los cuerpos de agua por ejemplo, ya que para la realización de actividades mineras a gran escala se requiere del uso de maquinarias que producen alteraciones en los ecosistemas llevando a que las especies propias de un determinado territorio minero tengan que abandonar su habitat de manera involuntaria (Tierra Digna, 2015).

En relación con las diferentes afectaciones socioambientales mencionadas, es decir, la violación de derechos tanto de la Naturaleza como de las comunidades, resulta importante destacar, bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos, tres obligaciones que según esta norma debe asumir el Estado para enfrentar y evitar el desplazamiento por desarrollo; la primera hace referencia a la necesidad de rechazar un desarrollo que tenga cimientos en la violación de derechos y por el contrario, la importancia de que prevalezca el bienestar común sobre el crecimiento económico, la segunda alude a la implementación de medidas preventivas que enfrente al desplazamiento forzado por desarrollo, y la tercera implica la reparación integral de las víctimas con garantía de no repetición (Tierra Digna, 2015).

Sin embargo dichas obligaciones del Estado no adquieren mayor relevancia en la realidad por el interés de legitimar el modelo neoliberal, lo cual se refleja, entre otras cosas, en su flexibilidad institucional y normativa imposibilitando “la protección tanto de la Naturaleza como de las condiciones de vida de las y los pobladores locales” (Tierra Digna, 2015, pág. 51). El rol del Estado como aliado de las multinacionales agudiza el conflicto socioambiental que enfrenta el país, debido a que implicaciones como el desplazamiento forzado de seres vivos (específicamente poblaciones y animales) se da de manera paulatina llevando a que se complejice aún más la toma de decisiones y el establecimiento de acciones pensadas para la solución permanente de dicho conflicto.

### *Vida saludable versus megaminería:*

Dentro de las dinámicas de la extracción minera, existe un aspecto que poco se visibiliza en la sociedad o se informa de manera que no dimensiona la magnitud de las problemáticas socioambientales que provoca su accionar; se trata de la violación del derecho a la salud mediante la contaminación y el agotamiento de los elementos naturales a causa de la actividad minera a gran escala. Una clara muestra de lo anterior es lo que sucede en el páramo de Santurbán, en donde “los de la Greystar querían (y quieren) sacar el oro de este páramo, porque es fácil hacerlo en nuestro país y les representa jugosas ganancias, así dejen tras de sí contaminación, enfermedad, prostitución, alcoholismo y muerte, flagelos comunes en los lugares en los cuales las multinacionales meten las narices” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 486).

Entonces retomar la contaminación y el agotamiento de los elementos naturales resulta indispensable, porque conforman un punto clave en el estado de salud de las poblaciones rurales, no sólo en Santurbán sino en los distintos territorios en donde la megaminería hace presencia. Son los altos grados de contaminación, producto de la maquinaria y del desequilibrio en la Naturaleza que las multinacionales ocasionan cuando extraen minerales, la que provoca daños en el agua y el aire mayoritariamente, repercutiendo en enfermedades como, entre otras, las respiratorias e incluso las auditivas por la maquinaria empleada en los procesos extractivos.

Los daños al agua hacen parte de un tema más profundo, ya que el derecho al agua está en riesgo de no ser garantizado tanto en el presente como en los años futuros, dado que cada vez se ve menos probable asegurar su acceso debido a la gran cantidad de agua utilizada por las minerías y la contaminación que se produce en ella. Esta contaminación afecta la subsistencia del ser humano y todos los seres vivos en general, porque se produce escasez del agua o transmisión de enfermedades a través de su consumo. Es importante resaltar que el derecho al agua y al aire limpio, los cuales se yuxtaponen al derecho a la salud, no son los únicos derechos socioambientales afectados por la minería a gran escala;

también se encuentra el tema alimentario, ya que los suelos dejan de ser fértiles para el cultivo de alimentos que son el sustento de familias rurales, debido a que:

(...) un modelo de desarrollo basado en la extracción de minerales e hidrocarburos puede causar un impacto aún más fuerte debido a la contaminación de aguas y suelos, en particular en la zona de laderas andinas, poniendo en riesgo no sólo la diversidad, sino también la soberanía alimentaria, pues las especies químicas tóxicas liberadas pueden permanecer por muy largo plazo (decenas de miles de años) disponibles en el ambiente (Londoño Calle, 2013).

Lo dicho anteriormente muestra cómo la megaminería no garantiza el cumplimiento del derecho alimentario de las personas, ya que, por los daños en el suelo, no se garantiza que las tierras conserven sus propiedades para poder cultivar el alimento, ni se garantiza que el alimento que se logre producir sea del todo saludable. Con todo, se puede denotar que los derechos socioambientales están lejos de ser garantizados y respetados tanto por las multinacionales como por el Estado, ya que éste último, a pesar de tener conocimiento sobre los daños socioambientales de la megaminería, sigue permitiendo esta actividad.

#### *Cuando trabajo no hay:*

Ahora bien, la relación que el Estado colombiano ha establecido con la Naturaleza, la cual ha llevado a que diversos actores confluyan en un elevado número de conflictos en torno al uso y relación que se establece con la misma, ha afectado también el derecho al trabajo, haciendo que éste se vea coartado o privado para las poblaciones cuando sus territorios son identificados como zonas de interés minera.

El derecho al trabajo se ve violado por parte del Estado y las empresas multinacionales en dos medidas: la primera, por el desplazamiento de población rural dedicada a la agricultura, debido a intereses extractivos en sus zonas de siembra, que lleva a un cambio de las prácticas referentes al trabajo de esta población; la segunda, por considerar a la minería artesanal como minería ilegal o no reglamentada, criminalizando y

violando el derecho ancestral que tienen estas poblaciones de relacionarse con la Naturaleza mediante esta forma de extracción -muy distante del extractivismo empresarial-.

Así, al establecerse la megaminería como locomotora para el desarrollo, se ha generado la priorización de esta actividad frente a las demás, como se ha planteado en los capítulos anteriores; esto implica que se desplace la actividad económica de la agricultura por la megaminería, ya que al Estado esta última actividad le permite insertarse en las dinámicas que la globalización le impone. Por ende, las políticas se han enfocado a fortalecer la explotación minera frente a otras actividades económicas o de subsistencia:

Esta legislación ha permitido la incursión de la actividad minera con ánimo de lucro en zonas agropecuarias productivas, lo cual ha generado dos fuertes impactos en la población: i) el desplazamiento de población económicamente activa que se ve obligada a buscar nuevas actividades productivas que les generen ingresos para su sobrevivencia y ii) la amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria, situando a la nación en un estado de dependencia alimentaria (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 326).

Es decir que las poblaciones afectadas por la presencia de actividades mineras a gran escala deben reformular sus economías y formas de subsistencia, lo que ocasiona la pérdida de la oferta alimentaria producida por las poblaciones rurales y, por ende, la generación de dependencia al tener que importar alimentos que históricamente se han producido en el territorio nacional. Esta problemática además es un reflejo de la carencia de políticas agrarias que fortalezcan este sector productivo -desde las dinámicas autónomas e incluso ancestrales de las poblaciones rurales-; lo que conduce a que la industria minero-energética coarte estas formas de producción, ya que:

El desplazamiento de los pequeños agricultores en relación con la minería y la ausencia de políticas para la economía campesina tienden a favorecer a las unidades grandes y poco generadoras de empleo. La concentración de la tierra es una de las más altas del mundo. Para que este sector recupere su capacidad histórica se requerirá un cambio radical de la política de desarrollo rural (CINEP/PPP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, 2012, pág. 23).

Por tanto, el permitir la incursión de la megaminería en sectores con poblaciones que desarrollan la agricultura, le aporta a los intereses neoliberales del Estado en la medida que al facilitarle la entrada a multinacionales mineras se crea una dependencia de alimentos para la población colombiana, la cual se suple por medio de la importación de los mismos; es decir, se genera una relación complementaria entre la explotación minera a gran escala y la pérdida de soberanía alimentaria, cuyos propósitos están orientados por los parámetros de la globalización.

Ahora, retrocediendo un poco, se puede decir igualmente que el derecho al trabajo es violado al no reglamentarse la extracción artesanal de minerales y, por el contrario, al criminalizarse esta forma de relación con la Naturaleza que tienen determinadas poblaciones rurales. Aquí vale la pena señalar que la minería artesanal se ha soslayado bajo el término de minería informal, lógica que acarrea una serie de consecuencias como, por ejemplo, el que se le considere una actividad de orden ilegal.

Esto sucede, porque en la minería informal entra la artesanal y la ilegal, siendo la artesanal principalmente desarrollada desde el barequeo<sup>8</sup> -por ejemplo- y la ilegal por pequeños mineros y actores -en algunos casos- al margen de la ley; de lo cual tanto la industria minera como el Estado colombiano se han valido para desligar al minero artesanal de su relación cultural y facilitar así la apropiación de sectores con potencial minero para la multinacionales extractivas. Como bien expone Cristina Echavarría: “toda regulación minera colombiana utiliza como sinónimos los términos ‘minería ilegal’ y ‘minería informal’, sin diferenciar operadores sin amparo de licencias mineras o ambientales, ya que existe tanto la minería criminal, como la minería informal y ancestral” (Echavarría Usher, 2014, pág. 27).

Lo expuesto anteriormente se puede ver reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, donde el gobierno explicita que:

Un sector que merece especial atención al producir deterioro ambiental a pesar de los esfuerzos recientes para su control, es el minero. Si bien la legislación prohíbe

---

<sup>8</sup> Según el Código de Minas, en el artículo 155, el barequeo es una “actividad popular de los habitantes de terrenos aluviales actuales (...). Se entiende que esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger metales preciosos contenidos en dichas arenas” (Congreso de la República, 2001, pág. 21).

adelantar actividades con fines comerciales en áreas de importancia ambiental, el cumplimiento de esas disposiciones ha sido limitado y, en muchos casos, la actividad minera informal ha generado graves consecuencias ambientales, sobre todo en el uso y afectación del recurso hídrico (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 562).

La criminalización sucede entonces cuando por ejemplo barequeros, en su calidad de mineros artesanales, son identificados por el Estado como trabajadores ilegales por no contar con los permisos establecidos y se les prohíbe desarrollar la actividad mediante la cual obtienen su sustento. En otras palabras, el Estado fomenta la explotación minera a gran escala, en menoscabo de la minería artesanal y, por ende, del derecho fundamental al trabajo que tienen estas personas. Frente a esto, debe tenerse en cuenta además que la actividad minera a gran escala no suple la necesidad de ocupación y generación de ingresos que tienen las poblaciones, ya que tal como lo reconoció el propio ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, en el año 2011 (citado en “este sector no es generador de empleo directo. No lo es en Colombia ni en ningún país del mundo. En medio de toda esta bonanza, las cifras de empleo directo apenas llegan a 200.000 personas, o sea 1% del total de trabajadores” (CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2012, pág. 340).

### *El silenciamiento del pueblo:*

En vista de la vulneración de derechos ocasionada por la megaminería, vale la pena preguntarse por las acciones que pudiesen emprender la población afectada -principalmente la campesina, la indígena y la afrocolombiana- en pro de la defensa sus propios derechos. Esto remite directamente al derecho de participación política y a sus mecanismos legales; derecho que también se ve afectado en el escenario de pugna por el acceso y relación con la Naturaleza, puesto que estas poblaciones carecen de herramientas jurídicas para impedir la llegada de empresas mineras multinacionales a sus territorios y los efectos socioambientales que de ella se desprenden.



Es necesario aclarar que esta vulneración al derecho fundamental de participación política<sup>9</sup> sucede gracias a que el Estado colombiano no garantiza su cumplimiento, ya que no ejerce los controles necesarios para aplacar la pugna entre multinacionales y comunidades en torno al extractivismo minero. De esta manera, el derecho de consulta previa con el que cuentan comunidades indígenas y afrodescendientes, además del mecanismo de consulta popular al que pueden acceder las poblaciones campesinas<sup>10</sup>, se supeditan a los intereses de inserción en las dinámicas de la globalización que tiene el Estado, mediante la invitación y vía libre a las multinacionales que dan vida a la locomotora minero-energética.

Por este ánimo de participación en el mercado global mediante los megaproyectos mineros es que se pasa por encima de la voluntad de las comunidades -en este caso rurales-, y se suprimen las posibles decisiones que a nivel local y regional se pudieran tomar sobre los territorios y la Naturaleza. Un ejemplo claro de esto es el discurso que maneja el Estado respecto al derecho de la consulta previa que “sugiere que quien resulte acreedor de la concesión deberá cargar con el proceso de consulta; sin embargo, esto se llevaría a cabo sólo después de haber obtenido el contrato (ABColumbia, 2012, pág. 8)”.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, el 80% de las concesiones para megaproyectos en territorios indígenas se otorgaron sin proceso de consulta previa (ABColumbia, 2012). Como resultado de esta vulneración del derecho de consulta previa es que los actores políticos que convergen en la Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular exigen en su pliego de peticiones:

Que no se aprueben nuevos títulos mineros en territorios ancestrales, en territorios indígenas y afros, sin pasar por el requisito de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En caso aprobatorio de las comunidades, que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal (INDEPAZ, 2014, pág. 38).

---

<sup>9</sup> La participación política se abordará específicamente desde la consulta previa y la consulta popular, sin desconocer otras expresiones de la misma.

<sup>10</sup> En consideración de que el campesinado, a pesar de su carácter histórico y fundamental, no ha sido reconocido jurídicamente como sujetos de derechos (Castilla, 2016).

Por último, se quisiera terminar este apartado diciendo que, en el marco de la vulneración del derecho fundamental de participación política, las comunidades rurales se ven enfrentadas a una violencia de Estado que responde a la actuación política de organización y movilización que emprenden dichas comunidades cuando se oponen a las políticas de desarrollo impuestas, tales las minero-energéticas. Esta violencia de Estado se expresa por ejemplo, en el asesinato selectivo de líderes políticos (Castilla, 2016), que tiene como propósito atomizar los procesos organizativos que se consolidan para tener un rol deliberativo en las formas alternativas de construir territorio y de relacionarse con la Naturaleza.

## **CAPÍTULO 13: CONCLUSIONES**

Recordando el objetivo general de esta investigación *-analizar las implicaciones de la relación entre el Estado colombiano con la Naturaleza en contextos rurales, mediante una lectura crítica de las políticas públicas y los discursos contrahegemónicos en torno al fenómeno de la megaminería-*, cabe precisar que esta investigación no tiene la intención de establecer conclusiones definitivas en torno a esta relación abordada, ya que el camino por el cual se ha aventurado a incursionar es inacabable por su rica complejidad; empero, sí se pueden establecer conclusiones respecto a los objetivos específicos planteados.

Entonces, frente al primer objetivo *-identificar la relación del Estado colombiano con la Naturaleza, a la luz de los significados que éste atribuye a las categorías de Naturaleza, desarrollo y derechos en lineamientos y políticas públicas-* se desea precisar que esta relación aquí en cuestión se fundamenta en la lógica economicista y neoliberal apropiada por el Estado, de la cual se derivan los significados que éste le asigna a las categorías de estudio. Esta apropiación del Estado lleva a la reproducción del distanciamiento entre la sociedad colombiana y la Naturaleza, por un lado, y a la despolitización de la relación que se tiene con la misma, por el otro.

Lo anterior permite que el Estado adecúe -a través del discurso de los derechos humanos- su accionar según los parámetros que dictan el proyecto político de desarrollo. Estos significados que les otorga el Estado colombiano a las tres categorías -significantes- aquí en cuestión, son los que dan vida a los discursos hegemónicos develados en los documentos de política pública vistos, los cuales sustentan su relación depredadora con la Naturaleza en aras de la acumulación de capital.

Los significados reconocidos en el primer capítulo permitieron comprender la base que da cabida al entramado discursivo que configura la realidad socioambiental del país; dicho entramado dota de sentido y validez a las políticas públicas, en este caso, ambientales, las cuales fijan las acciones que desde el Estado se establecen y se ejecutan sobre la Naturaleza.

En relación al segundo objetivo -*develar los sentidos latentes en la relación del Estado colombiano con la Naturaleza, y los contrasentidos que estos ocasionan en actores contrahegemónicos*- se encontró que los sentidos hegemónicos del Estado de crecimiento económico, de aumento de la democracia mediante políticas ambientales, de integración del Estado colombiano en las dinámicas de la globalización, de derechos bajo una visión antropocéntrica y de economicismo -los cuales sustentan el fomento de la explotación minera a gran escala- provocan unos contrasentidos en determinados actores contrahegemónicos debido al choque que se produce por las formas que tiene el Estado de relacionarse con la Naturaleza y de configurar los territorios, en tanto modifican las dinámicas sociales, culturales, económicas y ambientales sin tomar en cuenta la capacidad de decisión que estos actores tienen sobre su vida y su estrecha relación con la Naturaleza.

Es de resaltar, sin embargo, que la investigación arrojó como aspecto emergente el matiz en los discursos de los actores contrahegemónicos estudiados, ya que a pesar de estar en desacuerdo con las políticas del Estado que configuran la relación depredadora que sostiene éste con la Naturaleza, convergen hasta cierto punto con los discursos hegemónicos del Estado en aspectos como el ideal de desarrollo, dado que éste -por la histórica penetración discursiva de carácter colonizador- ha logrado permear la cosmovisión de poblaciones rurales, incluso de las indígenas.

Por otra parte, mediante la lectura de los sentidos del discurso del Estado colombiano -propios de una lógica globalizadora impuesta por entes supraestatales-, es posible dimensionar el sometimiento tanto de la Naturaleza como de las poblaciones rurales que enfrentan las consecuencias de su devastación y, a su vez, es posible reconocer la posición y los intereses que el Estado asume frente a su responsabilidad de ente garante de derechos. Tal posición e intereses brindan seguridad legal y financiera a los entes privados también protagonistas y responsables en la relación depredadora con la Naturaleza.

Ahora bien, respecto a los contrasentidos de los actores contrahegemónicos aquí abordados, se infiere que su apuesta tiende a romper -lo que desde el marxismo ecológico se denomina- la relación de distanciamiento entre el ser humano y la Naturaleza; lo cual, de una u otra manera, representa un acercamiento a la consolidación de la relación ser humano-Naturaleza como unidad.

Por último, en cuanto al tercer objetivo *-problematizar la relación entre el Estado colombiano y la Naturaleza a partir de las implicaciones expresadas en políticas públicas y en discursos contrahegemónicos-*, se ve que el choque de sentidos y contrasentidos permite colegir como implicación discursiva la legitimación del modelo neoliberal, dado que la manipulación que el discurso de bienestar social y bienestar ambiental justifica el crecimiento económico que demanda el sistema capitalista, supeditando los intereses de las comunidades. Esta implicación discursiva puede ser leída también como un escenario de pugna por el acceso y relación con la Naturaleza entre determinados actores sociales, que genera en la práctica una serie de implicaciones socioambientales, de carácter holístico, que afectan directamente a las poblaciones rurales que desean establecer o mantener relaciones de carácter alternativo con la Naturaleza y a los demás seres vivos que en ella cohabitan.

De esta manera, se puede decir que los discursos -en torno a las categorías o significantes analizadas- que se instauran e imponen desde el Estado y desde entes supraestatales construyen determinadas relaciones socioambientales de carácter conflictivo, las cuales se expresan en la relación directa que se entabla con la Naturaleza y en relaciones sociales específicas que se desprenden de la pugna por el acceso y forma de relacionamiento con la misma.

Por otro lado, dar respuesta a estos objetivos permitió generar unos aportes respecto a los vacíos de conocimiento en torno al tema de investigación, ya que como se mencionó en el apartado *Antecedentes* (ver página 10), la mayoría de los estudios académicos revisados se encuentran limitados por el concepto de medio ambiente y las lógicas de desarrollo sostenible y/o sustentable como referentes epistemológicos de las comprensiones de lo socioambiental. Los aportes mencionados hacen referencia a la superación de términos como medio ambiente, recursos naturales, entre otros, que son funcionales a los modelos de desarrollo expuestos; también a trascender la naturalización y despolitización de los impactos negativos por actividades industriales como la minería a gran escala, respecto a la responsabilidad del Estado y las grandes empresas mineras frente a los daños socioambientales.

Por todo lo dicho a lo largo de este trabajo, claro queda que estas formas de construir conocimiento socioambiental ignoran o minimizan los análisis de las consecuencias del sistema capitalista sobre la Naturaleza y las distintas poblaciones -rurales en este caso- que sostienen una relación con ella de forma más armónica; razón por la cual se hace necesario -para las Ciencias Sociales y más específicamente para el trabajo social- pensarse las futuras investigaciones relacionadas al ambiente desde un(os) marco(s) epistemológico(s) distinto(s).

Cabe exponer ahora que referente a las políticas públicas ambientales, la investigación permite afirmar que éstas representan, en primera medida, la manifestación del discurso del Estado colombiano y, en segunda medida, las herramientas de éste para disponer de una reserva ambiental que garantice los intereses de sobreproducción y acumulación de entes privados y supraestatales mediante la relación depredadora con la Naturaleza. La destinación de la Naturaleza como reserva ambiental -correspondiente a las lógicas del Estado social de derecho- es muestra de que dicho tipo de Estado no contempla “el reconocimiento, la redistribución, el respeto y la reciprocidad” (Mesa Cuadros, 2010, pág. 368) de y para la Naturaleza, alejándose del camino que Gregorio Mesa plantea para la consolidación de un Estado ambiental de derecho, en donde estos principios sean los fundantes de la relación Estado-Naturaleza.

Además, es importante resaltar que la investigación permitió reflexionar de manera prospectiva sobre dos puntos referentes al quehacer profesional del trabajo social. El primero de ellos tiene que ver con el bajo nivel de importancia que el tema socioambiental ha tenido desde la construcción teórico-práctica de la profesión, donde la lectura del mundo aún se hace distante del componente ambiental, como si fuera una esfera de otra dimensión epistémica y práctica; y el segundo tiene que ver con la exigencia, por ende, de reconstruir la cuestión social a partir de la incorporación holística del componente ambiental, llegando así a hablar de la cuestión socioambiental para pensarse y construir formas alternativas y complejas de un Trabajo Social que considere al campo socioambiental como uno de sus ejes centrales de conocimiento e intervención y logre dar cuenta de las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas causadas no sólo por la megaminería, sino por las variadas formas de relación depredadora que ha entablado el Estado colombiano -y otros- con la Naturaleza.

Sin pretensiones de profundizar en el recorrido teórico en torno al concepto de cuestión social, vale la pena traer a colación la aproximación teórica que desarrolla la trabajadora social H. Franceschi Barraza, quien indica que la nueva cuestión social no se encasilla únicamente en las manifestaciones producto de “las desigualdades derivadas de la posesión de los medios de producción por parte de clases sociales antagónicas” (Franceschi Barraza, 2014, pág. 90), es decir, de la contradicción capital-trabajo en las relaciones de producción; sino que incluye también a las manifestaciones tanto de lo estructural antes mencionado como de lo coyuntural que pueden suscitar de determinadas problemáticas. La nueva cuestión social hace referencia entonces a “otras formas de luchas de clase, que no se circunscriben a la defensa del salario y de los ingresos de los productores independientes, sino que ahora problematizan la distribución de riquezas colectivas de dominio público como por ejemplo, las naturales” (Franceschi Barraza, 2014, pág. 92).

Frente a lo expuesto, se puede hablar de la cuestión socioambiental en la medida que el componente ambiental está latente dentro del entramado estructural y también de las coyunturas que dan vida a la llamada cuestión social. Esta consideración como componente responde a las contradicciones que surgen de la relación hegemónica entre determinados sujetos sociales con la Naturaleza frente a relaciones de carácter matizado con la misma,

como por ejemplo de indígenas, campesinos, afrodescendientes, comunidades de otro orden y movimientos sociales, entre otros. Estas contradicciones se dan por las opuestas nociones “que visualizan a la naturaleza como negocio, dando como resultado la captación de utilidades por parte de los sectores y actores con mayor poderío económico-político (Franceschi Barraza, 2014, pág. 92).

Por todo lo expuesto, como conclusión en prospectiva, el grupo investigador desea agregar que el presente trabajo considera imperioso politizar las causales y manifestaciones de la cuestión socioambiental para complejizar tanto los análisis como la puesta en marcha de acciones en torno no sólo al campo ambiental, sino también al campo de derechos correlacionados en perspectiva de integralidad, es decir, en torno a un campo de análisis y acción que no separe ni jerarquice lo ambiental y lo social. Frente a las causales y manifestaciones de la cuestión socioambiental, Franceschi acota un punto de alta importancia:

Para contribuir a la conformación del campo del Trabajo Social ambiental, en el ámbito intelectual y profesional, se requiere colocar tal discusión en el contexto actual de la globalización económica neoliberal y esclarecer sus expresiones particulares en cada sociedad concreta. Implica análisis de coyuntura, que permita entender los determinantes y condicionantes de los problemas ambientales (Franceschi Barraza, 2014, pág. 96).

En últimas, son estas reflexiones las que se desean dejar como inquietud al Programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle y a la línea de Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático. El trabajo que aquí se ha realizado es una apuesta investigativa que pretende dar luces hacia un campo de actuación profesional en donde se dialogue a nivel interdisciplinar y también a nivel de multi-actores, y en donde se aúnen conocimientos y fuerzas en pro de procesos de construcción que busquen agenciar soluciones alternativas a los problemas socioambientales; problemas que el Estado colombiano ignora o gestiona de forma contraria a las demandas populares. De estas circunstancias nace la necesidad, también reconocida por Franceschi (2014), de generar alianzas cognitivo-prácticas con movimientos sociales que en el marco de una comprensión amplia de derechos o de postulados reivindicativos de otro orden, y en pro de construir

relaciones contra-hegemónicas con la Naturaleza, reflexionan y conducen sus luchas en torno a la cuestión socioambiental.

Por último, es valioso mencionar que los aprendizajes de esta investigación se enmarcan principalmente en el aspecto metodológico, ya que se descubrió a lo largo del proceso que la metodología no es una receta replicable de teóricos externos a la investigación, sino que ésta se construye y reconstruye según los requerimientos y dinámicas propias de esta última, dado que las metodologías ya utilizadas son guías que orientan los recorridos idóneos para dar respuesta a los objetivos trazados en cualquier estudio.



## BIBLIOGRAFÍA

- ABColombia. (Noviembre de 2012). Regalando Todo: Las Consecuencias de una Política Minera No Sostenible en Colombia.
- Acosta, A., & Martínez, E. (2009). *Derechos de la naturaleza. El futuro es ahora*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Alonso, L. E., & Fernández Rodríguez, C. J. (20 de Noviembre de 2006). Roland Barthes y el Análisis del Discurso. *Revista de Metodologías de Ciencias Sociales*(12), 11-35.
- Alvater, E. (2007). Existe un marxismo ecológico. En A. Borón, J. Amadeo, & S. González, *La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas* (págs. 341-363). Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Arango Marín, M. (14 de Diciembre de 2008). El efecto goteo. *El Mundo*.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá, Colombia: Skla.
- Ballén, C., Buitrago, C., Gómez, A., Salamanca, J., & Toro, D. (2000). Trabajo social en el área ambiental: un nuevo desafío para el siglo XXI. Bogotá, Colombia: Universidad Monserrate.
- Barthes, R. (1967). "El azul está de moda este año" Nota sobre la investigación de las unidades significantes en el vestido de moda. En R. Barthes, *El sistema de la moda y otros escritos* (págs. 379-395). París: Paidós.
- Bello, R. (2002). La seguridad alimentaria y el medio ambiente en la vereda Pasquillita, zona rural de Ciudad Bolívar. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Bohórquez Caldera, L. A. (2013). Colonización de la Naturaleza: Una aproximación desde el extractivismo. Medellín, Colombia: La bioética en la universidad.
- Buitrago Hernández, E. A. (14 de 09 de 2015). *Unimedios | Agencia de Noticias UN | Política & Sociedad*. Obtenido de <http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/habitantes-del-paramo-de-santurban-estan-invisibilizados.html>
- Campos, B. S. (2008). Atropología y Medio Ambiente. Revisión de una tradición y nuevas perspectivas de análisis en la problemática ecológica. *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, 144-184.
- Cancillería. (22 de 09 de 2015). *Cancillería*. Obtenido de <http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation>
- Castilla, A. (2016). Proyecto de Acto Legislativo "Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad

- campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular" . Bogotá, Colombia: Congreso de Colombia.
- Castro Castro, J. C. (2002). La dimensión ambiental en la lógica de planificación y gestión para el desarrollo en el municipio El Colegio Cundinamarca 2002. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional.
- Castro Osorio, C. (Octubre de 2009). Trayectorias de lo ambiental en la esfera pública y transformaciones sociales, Bogotá 1970 -2000. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología.
- CENSAT Agua Viva; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. (2012). *Minería, territorio y conflicto en Colombia*. (C. Toro Pérez, J. Fierro Morales, S. Coronado, & T. Roa Avendaño, Edits.) Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Cifuentes Gil, R. M. (2014). *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*. Buenos Aires: Noveduc.
- CINEP/PPP, Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz. (2012). *Minería, Conflictos Sociales y Violación a los Derechos Humanos en Colombia* . Bogotá: CINEP.
- Congreso de la República. (15 de Agosto de 2001). Código de Minas. Bogotá, Colombia.
- Congreso de la República. (15 de Agosto de 2001). *Sistema de Información Minero Colombiano- SIMCO*. Recuperado el 15 de Enero de 2016, de [www.simco.gov.co/Portals/0/ley685.pdf](http://www.simco.gov.co/Portals/0/ley685.pdf)
- Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES. (20 de Agosto de 2013). CONPES 3762 Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos -PINES. Bogotá , Colombia : Departamento Nacional de Planeación .
- Contraloría General de la República. (Mayo de 2013). *Minería en Colombia. Derechos, Políticas Públicas y Democracia* . Bogotá : Contraloría General de la República.
- Corte Constitucional. (08 de Febrero de 2016). Sentencia C-035. Bogotá D.C, Colombia: Corte Constitucional .
- Departamento de Santander. (23 de Abril de 2012). Plan de Desarrollo Departamental Santander "Gobierno de la Gente" 2012-2015. Bucaramanga, Colombia: Departamento de Santander.
- Departamento de Santander. (23 de Abril de 2016). Plan de Desarrollo de Santander "Santander nos une" 2015-2019. Bucaramanga, Colombia: Departamento de Santander.
- Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación.
- Departamento Nacional de Planeación. (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018: Todos por un nuevo país. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación.

- Departamento Norte de Santander. (2012). Plan de Desarrollo para Norte de Santander. “Un Norte Pa’lante”. Colombia: Plan de Desarrollo para Norte de Santander. “Un Norte Pa’lante”.
- Echavarría Usher, C. (2014). *¿Qué es legal? Formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia*. Envigado: ComCom Studio.
- Escobar, A. (1999). *El final del salvaje. Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea*. Bogotá: CEREC.
- Escobar, A. (2007). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas: El perro y la rana.
- Franceschi Barraza, H. (2014). Ambiente: ¿Nueva cuestión social para el trabajo social? *Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, 89-100.
- Giraldo, O. F. (2015). Acaparamiento de tierras en Colombia. *Biodiversidad*, 4-7.
- Gobernación de Santander. (10 de Marzo de 2016). Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019. Nos une Santander. Colombia: Gobernación de Santander.
- Gómez López, N. (2012). Conflicto Ambiental Minería y Agua. Conflicto socio-ambiental en la vereda de Santa Lucía, Municipio de la Sierra-Cauca. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Humanas-FCH. Departamento de Sociología.
- Greenpeace. (2013). *Paramos en Peligro*.
- Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. (2013). *Alternativas al capitalismo/ colonialismo del siglo XXI*. Quito: Ediciones Abya Yala.
- INDEPAZ. (2012). Encuentro Nacional de Territorio, Ambiente y Minería –Conclusiones. *Punto de encuentro*, 1-28.
- INDEPAZ. (2014). Pliego de la Cumbre agraria, étnica, campesina y popular. *Punto de Encuentro: Tierras en la Agenda 2014*, 76.
- Jaramillo Giraldo, M. L. (2005). Elite y naturaleza. ¿Naturaleza de elite? *Nómadas*, 86-100.
- Leff, E. (2010). Globalización, Ambiente y Sustentabilidad. En *Saber Ambiental* (pág. 8). Siglo XXI Editores.
- Londoño Calle, V. (6 de Mayo de 2013). 'Colombia no está preparada para la locomotora minera'. *El espectador*.
- Löwy, M. (2013). Ecosocialismo: hacia una nueva civilización. *Revista Herramienta: Lecturas sobre Marxismo Ecológico*, 55-61.

- Machado Aráoz, H. (Octubre de 2015). Territorios y cuerpos en disputa. Extractivismo minero y ecología política de las emociones. *Biodiversidad, Sustento y Culturas*(86), 19-20.
- Marx, K., & Engels, F. (2002). *El Capital. Tomo I "El Proceso de Producción del Capital"*. Siglo XXI Editores.
- Mellizo, W. (2014). *Línea de investigación e intervención en derechos humanos y fortalecimiento democrático*. Bogotá: Universidad de la Salle.
- Mesa Cuadros, G. (2010). *Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. Concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el "Estado Ambiental de Derecho"*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (19 de Diciembre de 2014). Resolución 2090 “Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, y se adoptan otras determinaciones”. Bogotá D.C., Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (14 de 09 de 2015). *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia*. Obtenido de [https://www.minambiente.gov.co/images/sala-de-prensa/Documentos/2014/diciembre/191214\\_infografia\\_santurban.pdf](https://www.minambiente.gov.co/images/sala-de-prensa/Documentos/2014/diciembre/191214_infografia_santurban.pdf)
- Ministerio del Medio Ambiente. (Diciembre de 2001). Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta montaña colombiana: Páramos. Bogotá, Colombia: Ministerio del Medio Ambiente.
- Movimiento por la Constituyente Popular y ASONALCAM. (2014). Por una Reforma Agraria Democrática vamos al paro Nacional Agrario y Popular. Bogotá: Movimiento por la Constituyente Popular y ASONALCAM.
- Muñoz Angulo, R. A. (2010). Economías extractivas y desarrollo sostenible: Análisis y reflexiones de sus relaciones, a partir de la explotación minera del Putumayo. Bogotá, Colombia: Instituto de Estudios Ambientales-IDEA-Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia.
- Observatorio Nacional de Paz. (s.f.). El páramo de Santurbán: ¿Amenaza al desarrollo minero del país? Región Nororiente , Colombia : Observatorio Nacional de Paz.
- Observatorio Nacional de Paz. (2010). Documentos mensuales de análisis y divulgación sobre conflictos, Región Nororiente. *El PÁRAMO DE SANTURBÁN: ¿AMENAZA AL DESARROLLO MINERO DEL PAÍS?* Colombia: Observatorio Nacional de Paz.
- ONIC. (2014). *Mandato Político General del VIII Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC 2012 - 2016*. Bogotá: Editorial Gente Nueva.
- PBI Colombia. (2011). *Minería en Colombia: ¿a qué precio?* Bogotá.

- Quintero, J. D. (Junio de 2010). La colonialidad del ser y del saber: la mitologización del desarrollo en América Latina. Medellín, Colombia .
- Sabbatella, I., & Tagliavini, D. (2013). Marxismo Ecológico: Elementos fundamentales para la crítica de la economía-política-ecológica. *Herramienta: Lecturas sobre Marxismo Ecológico*, 3-11.
- Sánchez Ariza, A. I. (2009). Exploración y análisis de la relación ser humano- naturaleza en la microcuenca quebrada la Magnolia municipio de Málaga (Santander). Bucaramanga , Colombia : Universidad Industrial de Santander .
- Sánchez, D., Castillo, H., & Soler, C. (Mayo de 2013). LUCHAS Y CONTRADICCIONES POR EL CONTROL DEL AGUA Estudio de caso en los corregimientos de Betania y Nazareth, Región Sumapaz en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Bogotá, Colombia: Universidad de La Salle.
- Santurbán-FAOS, F. A. (14 de 09 de 2015). *FAOS-Fundación Ambientalista del Oriente Santurbán*. Obtenido de <http://fundacionambientalistasanturban.webmium.com/>
- Suárez, N. (2007). La investigación documental paso a paso. Mérida, Venezuela: Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes.
- Tegría Uncaria, H. (2012). Construcción de procesos sociales desde trabajo social para la defensa del agua del río Manco en los sectores vía Málaga y Pescadero, municipio Piedecuesta Santander. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander.
- Tierra Digna. (Octubre de 2015). El carbón de Colombia ¿Quién gana, quién pierde? Minería, Comercio global y Cambio climático. Bogotá, Colombia: Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.
- Unidad de Planeación Minero Energética-UPME. (Diciembre de 2006). *Colombia País Minero: Plan Nacional para el Desarrollo Minero*. Bogotá, Colombia: Ministerio de Minas y Energía.

## ANEXOS

### Anexo 1 Matriz PP.

| TEMA               | PREGUNTAS   | AGRUPACIÓN SEMEJANZAS                                    | MEGA-PREGUNTAS ENFOQUE TEÓRICO EMPÍRICO-ANALÍTICO (DESCRIPTIVO)  | MEGA-PREGUNTAS ENFOQUE TEÓRICO HISTÓRICO-HERMENÉUTICO (INTERPRETATIVO)   | MEGA-PREGUNTAS ENFOQUE TEÓRICO CRÍTICO-SOCIAL (PROPOSITIVO-TRANSFORMADOR)  |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| <b>NATURAL EZA</b> | <p>N1. ¿De qué manera debe pensarse la Naturaleza?</p> <p>N2. ¿La naturaleza debe ser usada o respetada?</p> <p>N3. ¿La Naturaleza es un objeto que se posee?</p> <p>N4. ¿Quién puede denominarse legítimo para hacer uso de la</p> | <p>➤ N1+N2+N6</p> <p>➤ N3+N4</p> <p>➤ N5</p> <p>➤ N8</p> | <p>N3+N4=</p> <p>EA1: ¿Es la Naturaleza un objeto que se posee y si es así, quién puede denominarse legítimo para hacer uso de ella?</p> | <p>N1+N2+N6=</p> <p>HH1: ¿Cómo campesinos y empresarios de materias primas conciben la Naturaleza y/o interactúan con la misma?</p> <p>N8=</p> <p>HH2: ¿Cuáles son las manifestaciones a nivel de la Naturaleza, lo social, económico, lo político y lo cultural, de la relación Naturaleza-capitalismo?</p> | <p>N5=</p> <p>CS1: ¿Qué implica la construcción de una relación Naturaleza-sociedad alternativa, en aras de superar el actual sistema socio-económico-político-cultural capitalista?</p> |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | <p>Naturaleza?</p> <p>N5. ¿Es la Naturaleza la alternativa para hacer contraparte al capitalismo?</p> <p>N6. ¿Los consumidores tienen el mismo nivel de opinión sobre la Naturaleza frente a quienes la trabajan diariamente?</p> <p><del>N7. ¿Cómo se relaciona este análisis con otros contextos latinoamericanos (de derecha e izquierda)?</del></p> <p>N8. ¿Cuáles son las manifestaciones a nivel de la Naturaleza, lo</p> |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|

|                         |   |  |  |   |   |
|-------------------------|---|--|--|---|---|
|                         | social, económico, lo político y lo cultural, de la relación Naturaleza-capitalismo?  |  |  |   |   |
| <b>DERECHOS HUMANOS</b> | <p>DH1. ¿Es posible encontrar la garantía de los Derechos Humanos comprendiendo la Naturaleza como sujeto de derechos?</p> <p>DH2. ¿Existe en el enfoque de Derechos Humanos un análisis crítico frente a la devastación de la Naturaleza?</p> <p>DH3. ¿Bajo qué parámetros se da la relación entre Naturaleza y Derechos</p> | <p>➤ DH1</p> <p>➤ DH2+DH3</p> <p>➤ DH4</p> | <p>DH1=</p> <p>EA2: ¿Puede el reconocimiento de la Naturaleza como sujeta de derechos ser garante de los derechos humanos?</p> | <p>DH1=</p> <p>HH3: ¿Cómo es posible garantizar los Derechos Humanos bajo la perspectiva de Naturaleza como sujeta de derechos?</p> | <p>DH2+DH3 =</p> <p>CS2: ¿Bajo qué parámetros se da la relación entre Naturaleza y el enfoque Derechos Humanos, y existe en dicho enfoque un análisis crítico frente a la devastación de la Naturaleza?</p> <p>DH4=</p> <p>CS3: ¿Qué implicaciones tendría la relación entre Naturaleza y enfoque de D.D.H.H. en el actual contexto de negociaciones de paz y el nuevo PND?</p> |



|                       |  |                   |  |  |   |
|-----------------------|--|-------------------|--|--|---|
|                       | Humanos?<br><br>DH4. ¿Qué implicaciones tendría esta consideración en el actual contexto de negociaciones de paz y el nuevo PND?   |                   |  |  |   |
| <b>TRABAJO SOCIAL</b> | <p>TS1. ¿Existe en el Trabajo Social una perspectiva “propia” que aborde la cuestión social desde la Naturaleza?</p> <p>TS2. ¿Cuál es la importancia para el trabajo social, considerar a la Naturaleza como un componente de la cuestión social?</p> <p>TS3. ¿Cuál es el papel del Trabajo Social en la consolidación de una relación</p> | ➤ TS1+TS2+TS3+TS5 |  |  | <p>TS1+TS2+TS3+TS5=</p> <p>CS4: ¿Qué implicaría la construcción, de una perspectiva propia del trabajo social para: abordar a la Naturaleza como componente de la cuestión social y consolidar una relación horizontal Naturaleza-sociedad que conduzca a la superación del actual sistema socio-económico-político-cultural capitalista?</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>horizontal<br/>Naturaleza-<br/>sociedad?</p> <p><del>TS4. ¿Cómo se<br/>lee la<br/>mercantilización<br/>de los derechos<br/>económicos,<br/>sociales y<br/>culturales, desde<br/>el trabajo social?</del></p> <p>TS5. ¿Cuáles<br/>serían los retos,<br/>en términos<br/>dialogicos, para el<br/>análisis complejo<br/>de las formas de<br/>abordar el<br/>componente de la<br/>Naturaleza en la<br/>cuestión social,<br/>desde la política y<br/>la etnicidad<br/>colombiana?</p> <p><del>TS6. ¿El trabajo<br/>social contribuye<br/>a la construcción<br/>de paz sólo desde</del></p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | la resolución de<br>conflictos<br>humanos? |  |  |  |  |
| <b>PREGUNTA ORIENTADORA SEGÚN ENFOQUE TEÓRICO</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>EMPÍRICO ANALÍTICO:</b><br>EA1+EA2=<br>N-DH-EA: ¿Es la Naturaleza un objeto, que la sociedad puede usar legítimamente; o es sujeta, garante de los derechos humanos?  |  |  |  |  |  |
| <b>HISTÓRICO HERMENÉUTICO:</b><br>HH1+HH2+HH3=<br>N-DH-HH: ¿Cómo campesinos y empresarios interactúan a nivel social, económico, político y cultural con la naturaleza, desde un enfoque de derechos?  |  |  |  |  |  |
| <b>CRÍTICO SOCIAL:</b><br>CS1+CS2+CS3+CS4=<br>N-DH-TS-CS: ¿Desde el trabajo social, qué implicaría el análisis crítico “Naturaleza-cuestión social”, que permita generar formas alternativas de pensarse el actual sistema socio-económico-político y cultural, en pro de una relación horizontal sociedad-Naturaleza en el contexto colombiano? |  |  |  |  |  |
| <b>PREGUNTA PROBLEMA</b>   |  |  |  |  |  |
| ¿Cómo los discursos del Estado colombiano, sobre la Naturaleza, determinan su relación con la misma y la sociedad, específicamente en contextos rurales del territorio nacional?   |  |  |  |  |  |

**Anexo 2 Formato Inst-E.**

| FICHA TEMÁTICA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN   |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------|--|---------|--|------------|---|
| “LA RELACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA NATURALEZA EN TERRITORIOS RURALES:<br>Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería” |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| CÓDIGO:  | 1. FECHA DE ELABORACIÓN           |                        |        | 2. ELABORADO POR:              |  |         |  |            |   |
|  |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| 3. TIPO DE DOCUMENTO:  |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| 3.1 LIBRO  |                                   | 3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS |        | 3.7 ARTÍCULO DE INTERNET       |  |         |  |            |   |
| 3.2 ARTICULO DE REVISTA  |                                   | 3.5 DOCUMENTO LEGAL    |        | 3.8 OTROS                      |  |         |  |            |   |
| 3.3 AGENDA POLÍTICA  |                                   | 3.6 INVESTIGACIÓN      |        |                                |  |         |  |            |   |
| 4. REFERENCIA DOCUMENTAL   |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| NOMBRE DEL TEXTO:  |                                   |                        |        |                                |  |         |  | 4.3 SEXO   |   |
| 4.1 NOMBRE DEL/A AUTOR/A   |                                   |                        |        |                                |  |         |  | F          | M |
| 4.2 Otros/as autores/as  |                                   |                        |        |                                |  |         |  | F          | M |
| PAÍS   | COLOMBIA                          | CIUDAD                 | BOGOTÁ | AÑO                            |  | EDICIÓN |  |            |   |
| EDITORIAL  |                                   |                        |        |                                |  |         |  | Nº DE PÁG. |   |
| BIBLIOGRAFÍA   |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| SIGNIFICANTE   | SIGNIFICADO [CITA(S) TEXTUAL(ES)] |                        |        | SIGNIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS |  |         |  |            |   |
| Naturaleza   |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| Desarrollo   |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |
| Derechos   |                                   |                        |        |                                |  |         |  |            |   |

**Anexo 3 Formato Inst-CH.**

| <b>FICHA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE TEXTOS CONTRAHEGEMÓNICOS</b><br><b>“LA RELACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA NATURALEZA EN TERRITORIOS RURALES:</b><br><b>Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería”</b> |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
|--|--|--|------------------------|---|--|-----|--------------------------|------------|---|
| CÓDIGO:  | 1. FECHA DE ELABORACIÓN                      |  |                        | 2. ELABORADO POR:                           |  |     |                          |            |   |
|  |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
| <b>3. TIPO DE DOCUMENTO:</b>   |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
| 3.1 LIBRO  |  |  | 3.4 POLÍTICAS PÚBLICAS |   |  |     | 3.7 ARTÍCULO DE INTERNET |            |   |
| 3.2 ARTICULO DE REVISTA  |  |  | 3.5 DOCUMENTO LEGAL    |   |  |     | 3.8 OTROS                |            |   |
| 3.3 AGENDA POLÍTICA  |  |  | 3.6 INVESTIGACIÓN      |   |  |     |                          |            |   |
| <b>4. REFERENCIA DOCUMENTAL</b>  |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
| NOMBRE DEL TEXTO: AUDIENCIA SOBRE DESARROLLO, INDUSTRIA Y DERECHOS HUMANOS   |  |  |                        |   |  |     |                          | 4.3 SEXO   |   |
| 4.1 NOMBRE DEL/A AUTOR/A   |  |  |                        |   |  |     |                          | F          | M |
| 4.2 Otros/as autores/as  |  |  |                        |   |  |     |                          | F          | M |
| PAÍS   |  |  | CIUDAD                 |   |  | AÑO |                          | EDICIÓN    |   |
| EDITORIAL  |  |  |                        |   |  |     |                          | Nº DE PÁG. |   |
| BIBLIOGRAFÍA   |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
| <b>DISCURSOS CONTRAHEGEMÓNICOS RESPECTO A LA RELACIÓN DEL ESTADO CON LA NATURALEZA</b>   |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
| <b>CATEGORÍAS</b>  | <b>CITA(S) TEXTUAL(ES)<br/>CONVERGENCIAS</b> |  |                        | <b>CITA(S) TEXTUAL(ES)<br/>DIVERGENCIAS</b> |  |     |                          |            |   |
|  |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
|  |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |
|  |  |  |                        |   |  |     |                          |            |   |

**Anexo 4** *Formato Inst-Imp.*

| <b>FORMATO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN<br/>DE LAS MANIFESTACIONES DADAS POR LA TENSION<br/>ENTRE LOS SENTIDOS Y CONTRASENTIDOS</b> |                |
|--|----------------|
| <b>FECHA:</b>  |                |
| <b>VIOLACIÓN DE<br/>DERECHOS HUMANOS</b>   | <b>CITA(S)</b> |
| Salud y agotamiento de<br>elementos naturales.   |                |
| Acceso a la tierra y<br>desplazamiento.  |                |
| Trabajo.   |                |
| Participación política y<br>consulta previa.   |                |
| Flexibilidad institucional.  |                |

**Anexo 5 UDA.**

| <b>UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN:</b><br><b>“LA RELACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CON LA NATURALEZA EN TERRITORIOS RURALES.</b><br><b>Discursos hegemónicos e implicaciones socioambientales a la luz de la megaminería”</b> |   |
|--|---|
| <b>Cód.</b>  | <b>Textos del Estado</b>  |
| E1   | Constitución política de Colombia 1991.   |
| E2   | Código de Minas.  |
| E3   | PND 2010-2014 tomo 1 y 2.   |
| E4   | Bases PND 2014-2018.  |
| E5   | Conpes 3839- Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por 30 millones de dólares, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el programa para el fortalecimiento institucional del sector minero-energético.     |
| E6   | Conpes 3683- Lineamientos para la formulación del programa nacional de observación de la tierra que incluya el diseño de un programa satelital colombiano.  |
| E7   | Conpes 3716- Concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por US\$ 10 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, destinados al financiamiento adicional del programa de inversión para el desarrollo Sostenible – IDS. |
| E8   | Conpes 3762- Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos-PINES.   |
| E9   | Política nacional para la formalización de la minería en Colombia.  |
| E10  | Plan de desarrollo Norte de Santander 2012-2015.  |
| E11  | Plan de desarrollo Santander 2016-2019.   |
| E12  | Plan de desarrollo Santander 2012-2015.   |
| E13  | Delimitación páramo Santurbán – resolución 2090-diciembre 2014.   |
| E14  | Sentencia de la Corte Constitucional sobre minería en páramos.  |

|             |   |
|-------------|---|
| E15         | Plan Nacional de Desarrollo Minero 2006-2019.   |
| <b>Cód.</b> | <b>Textos Contrahegemónicos</b>   |
| Ch1         | Seguridad y derechos humanos ¿para quién?   |
| Ch3         | Minería, territorio y conflicto en Colombia.  |
| Ch4         | Las 7 perlas del plan nacional de acción de empresas y derechos humanos. Tierra digna.  |
| Ch5         | El carbón de Colombia. Tierra digna.  |
| Ch6         | Audiencia sobre desarrollo, industria y derechos humanos.   |
| Ch7         | Boletín foro social nororiente.   |
| Ch8         | Conclusiones: encuentro nacional de territorio, producción, ambiente y minería<br><a href="http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/07/revista_pe61.pdf">http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/07/revista_pe61.pdf</a> |
| Ch9         | Tierras en la agenda 2014<br><a href="http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2014/10/revista_pe64-tierras-en-la-agenda-2014.pdf">http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2014/10/revista_pe64-tierras-en-la-agenda-2014.pdf</a>  |
| Ch10        | El páramo de Santurbán, patrimonio nuestro y de la humanidad: en peligro inminente-viva la ciudadanía.  |
| Ch11        | Por una reforma agraria democrática vamos al paro nacional agrario y popular.   |
| Ch12        | Mandato político general de los pueblos indígenas de Colombia-ONIC.   |
| Ch13        | Por una Reforma Agraria Democrática vamos al paro Nacional Agrario y Popular.   |